



DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL

en Centroamérica y la
República Dominicana



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

El PNUD se asocia con personas de todos los niveles de la sociedad para ayudar a construir naciones que puedan resistir las crisis e impulsar y mantener el tipo de crecimiento que mejora la calidad de vida de todos. En el terreno en más de 170 países y territorios, ofrecemos una perspectiva global y conocimiento local para ayudar a empoderar vidas y construir naciones resilientes.

Pueden obtener más información en www.undp.org o seguirnos en @PNUD

© 2022 PNUD y USAID. Todos los derechos reservados.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Centro Regional del PNUD en América Latina, Edificio 220, Ciudad del Saber.
Ciudad de Panamá, Panamá.

Cita recomendada: PNUD. (2022). *Diagnóstico de la situación de la inclusión económica y la cohesión social en Centroamérica y la República Dominicana.*

Centro Regional del PNUD en América Latina y el Caribe

José Cruz - Osorio

Gerente del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe

Jairo Acuña - Alfaro

Líder Regional del Equipo de Gobernabilidad y Paz del PNUD en América Latina y el Caribe

Rita Sciarra

Líder Regional del Equipo de Crecimiento Inclusivo e Integración de los ODS del PNUD en América Latina y el Caribe

Gloria Manzotti

Especialista Regional de Acceso a Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del PNUD para América Latina y el Caribe

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL

en Centroamérica y la
República Dominicana



Proyecto Regional PNUD-Infosegura

Marcela Smutt

Coordinadora regional del proyecto PNUD Infosegura

Juan Pablo Gordillo

Coordinador adjunto del proyecto PNUD Infosegura

Elvia Tapia-Santamaria

Especialista en gestión del conocimiento e investigaciones PNUD Infosegura

Supervisión

Sara Luaces

Coordinación del estudio

Chiara Brunetti

Autores

Nicoletta Ghisu y Eduardo Spinelli

Revisión editorial

Laura Cárdenas

Diseño y diagramación:

Ximena Chaperó

Agradecimientos:

El documento fue posible gracias al trabajo y revisión de los equipos de nuestras oficinas del PNUD en los países en los que opera el Proyecto Regional Infosegura y agradecemos a Laura Rivera, Rafael Pleitez, Daniel Carsana y Víctor Tablas en El Salvador; Claudia Saravia, Ana Gabriela de León, Iñaki de Francisco, Giovanni García, Eduardo Díaz y Silvia Mendoza en Guatemala; Tania Martínez, Sergio Membreño, Cristina Sevillano, Osvaldo Lapuente y Carmela Lanza en Honduras; Randall Brenes y Karol Sánchez en Costa Rica; Marilyn Lee en Belice; Pura Hernández y María del Mar Pérez en República Dominicana. También se agradecen a los peer reviewers por su valiosa contribución: Alejandro Rauch, Godofredo Pacheco y Nergis Gulasan.

infoSEGURA



La elaboración de este documento ha sido posible gracias al apoyo brindado por el Gobierno de los Estados Unidos por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y a la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe (PNUD).

Las opiniones y los puntos de vista que se presentan en este documento son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones ni los puntos de vista de las agencias y los organismos que apoyaron la realización de esta publicación, ni tampoco aquellos de los países miembros de las Naciones Unidas.

Índice de contenidos

Prólogo	5
Introducción	6
Resumen ejecutivo	10

CAPÍTULO 1

MARCO DE REFERENCIA	20
1.1 La relación entre inclusión económica y cohesión social	20
1.2 Impacto y respuesta regional a la COVID-19 en el tejido socioeconómico	24
1.3 Intersección con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	28

CAPÍTULO 2

LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN LA SUBREGIÓN	32
2.1 Contexto socioeconómico y análisis institucional de la subregión de Centroamérica y la República Dominicana	32
2.2 Una perspectiva subregional: diferencias y afinidades	34
2.3 Desigualdades sociales con una mirada especial a los jóvenes	44
2.4 El rol del sector privado: actores, retos y oportunidades	49
2.5 El impacto de la COVID-19 en la economía local: desafíos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas	51

CAPÍTULO 3

UN ENFOQUE A NIVEL DE PAÍS	58
Belice	59
Costa Rica	64
El Salvador	69
Guatemala	74
Honduras	79
Panamá	84
República Dominicana	89

CONSIDERACIONES FINALES

Bibliografía de base	99
Referencias	100
Siglas y Acrónimos	105



PRÓLOGO

El tejido social en las sociedades de América Latina y el Caribe se ha deteriorado en la última década, poniendo a la cohesión social en el centro del debate de las políticas públicas. Forjar acuerdos entre actores políticos, sociales y económicos para preparar e implementar planes de respuesta y estrategias inclusivas se convierten en elementos fundamentales para avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.

La pandemia del COVID-19 ha profundizado las desigualdades sociales en la región. Si bien el virus afecta a todos por igual, las consecuencias económicas y sociales de su impacto no son igualitarias, estas son más severas para los más vulnerables. Esto presenta un reto para los Estados, los cuales tienen que reconstruir tejidos sociales y productivos de manera equitativa y eficientes para trazar el camino de la recuperación.

El presente documento de análisis es parte de un compendio de tres informes sobre cohesión social, que profundizan el concepto desde perspectivas diferentes y complementarias en la subregión de Centroamérica: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. La serie analiza la cohesión social en relación con tres de los temas más relevantes identificados en el contexto actual para su promoción: (i) la inclusión económica, (ii) la conflictividad socioambiental y (iii) el enfoque ODS 16+ sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

Este diagnóstico sobre la situación de la inclusión económica y la cohesión social es particularmente relevante en la situación actual de definición de las estrategias de recuperación, en el que se debe actuar de manera coordinada para minimizar el impacto e invertir las tendencias negativas en los aspectos económicos y sociales. La falta de inclusión económica no solo limita la generación equitativa de ingresos y el desarrollo pleno de las personas, también genera desigualdad de oportunidades, que pueden ser resumidas en el concepto más amplio de pobreza multidimensional.

El documento presenta un análisis del contexto socioeconómico de la subregión, centrándose en las características del mercado laboral y el ecosistema empresarial, para entender cómo la actual crisis impacta en la población joven con un análisis transversal de género. La estructura planteada pretende identificar y sintetizar las afinidades y diferencias entre países. Esto como puntos de partida para el diseño de estrategias, políticas y programas a medida, para reducir las brechas existentes y promover la inclusión social y económica de la población, foco del análisis. Dichas estrategias requerirán esfuerzos y articulación entre el sector público, el sector privado y la cooperación internacional para su implementación.

Las asimetrías en el impacto de las rupturas del tejido social exigen propuestas y respuestas de políticas pública diferenciadas y enfocadas a las necesidades de grupos poblacionales. Por ello, se destacan una serie de recomendaciones para el diseño de políticas activas que apunten entre otros aspectos a: la generación de empleo formal y fomento del emprendimiento, el acceso a oportunidades educativas de calidad y ajustadas a la demanda del mercado laboral, la eliminación de las desigualdades, el logro de la igualdad de género y la creación de institucionalidad tanto a nivel nacional como local, promoviendo un proceso de descentralización y territorialización.

Frente a los múltiples desafíos de la reconstrucción, resulta crucial intervenir a través de políticas coherentes, integrales y holísticas. La cohesión social, dado su carácter multidimensional, se vuelve un elemento orientador de las políticas públicas, no solo como fin sino como medio, para fomentar un desarrollo más inclusivo, pacífico y sostenible.

Esperamos que este compendio sea útil para poner en la agenda pública las dinámicas de la cohesión social en Centroamérica y la República Dominicana y su interrelación con la dimensión económica, ambiental y de seguridad ciudadana.



José Cruz-Osorio
Gerente

Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe



INTRODUCCIÓN

El presente documento es parte de una iniciativa del Centro Regional para América Latina y Caribe del PNUD y se enmarca dentro de sus actividades de generación de conocimiento para acompañar a los países para el logro de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El punto de partida del análisis está representado por dos elementos fundamentales: la constatación de que América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo y la relevancia de la cohesión social en el debate regional como elemento fundamental para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible, aún más, en el marco de la estrategia de reconstrucción post COVID-19. El documento tomará como referencia para el análisis, la definición de cohesión social de CEPAL, y utilizada también por PNUD y AECID (2021) como “la dialéctica entre mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la ciudadanía frente al modo en que estos operan que se traducen en un sentido de pertenencia a la sociedad”¹.

Partiendo de estas premisas, el presente documento pretende analizar los diferentes componentes de la dimensión socioeconómica y cómo ésta influye e impacta en la cohesión social, en particular en la subregión de América Central y República Dominicana objeto de este análisis. Es importante destacar que, a lo largo del documento, el concepto de subregión se refiere a los siguientes países: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. El documento se enfocará específicamente en los efectos de la baja inclusión económica y cohesión social en los empleos, la educación y el bienestar de las personas jóvenes.

El documento se redactó a partir de una *desk review* de publicaciones, estudios y artículos disponibles sobre cohesión social e inclusión económica, retomando principalmente fuentes oficiales del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. La sección dedicada a los diferentes países recoge las informaciones derivadas de entrevistas semiestructuradas a los referentes de cada Oficina País del PNUD, con el objetivo de resaltar aquellas iniciativas que favorecen la inclusión económica de las personas jóvenes, promovidas por el sector público, el sector privado y la cooperación internacional. El borrador del documento ha sido sometido a una *peer review* por parte de expertos y expertas seleccionados para garantizar una perspectiva multidimensional de los temas tratados.

Para cumplir con el propósito de la investigación, el primer capítulo parte de la definición de inclusión económica y su relación con la cohesión social. Las condiciones socioeconómicas de un país son el fruto de una combinación entre diferentes elementos que, sin las medidas



correctas, pueden generar un vórtice de causa y efecto difícil de erradicar y provocar una concentración de vulnerabilidad en determinados colectivos.

Partiendo de un análisis del contexto socioeconómico de la subregión, el segundo capítulo pretende identificar y sintetizar las afinidades y diferencias entre los países implicados en el análisis, como hallazgos y puntos de partida esenciales para la definición de los principales retos que requerirán esfuerzos y articulación entre el sector público y el sector privado. El análisis del presente capítulo se centra especialmente en las personas jóvenes y en las poblaciones indígenas, en cuanto estos colectivos presentan altos niveles de vulnerabilidad y requieren una especial atención en forma de estrategias, políticas y programas a medida para promover su inclusión social y económica.ⁱ

Los primeros dos capítulos dedican también una sección a los efectos de la COVID-19 y las medidas de distanciamiento social en la región, que ponen en riesgo los avances logrados en la región antes de la pandemia, en términos de crecimiento económico y reducción de las desigualdades.

Finalmente, el tercer capítulo se centra en una mirada más cercana a la situación general de cada país, en función del grado de cohesión social e inclusión económica, con un foco especial en la situación de los jóvenes y en aquellas iniciativas puestas en marcha para favorecer su inclusión. Completan las fichas elaboradas por país, una serie de desafíos a nivel nacional y propuestas específicas para vencerlos.

El documento concluye presentando algunas recomendaciones, fruto del análisis y de la sistematización de las informaciones recogidas y de las lecciones aprendidas a nivel regional y nacional, que se espera puedan ser de utilidad para los tomadores de decisiones, para que este contexto de pandemia y post pandemia COVID-19 pueda representar una oportunidad para reconstruir con mayor equidad, “sin dejar a nadie atrás”.

ⁱ Tratando el tema de la cohesión social y la inclusión económica, resulta fundamental aplicar una perspectiva de género y un enfoque multidimensional, involucrando en el análisis las necesidades y condiciones de las poblaciones más vulnerables, como las personas jóvenes, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las mujeres, las niñas y la población LGTBQ+, así como las personas en situación de movilidad humana. El presente estudio se enfocará especialmente en las personas jóvenes y en los pueblos indígenas, con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual identificando oportunidades que se puedan traducir en futuras acciones y políticas a nivel regional y nacional.



Resumen ejecutivo

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL

en Centroamérica y la República Dominicana

La cohesión social ha asumido un rol más central en el debate socio político, representando un importante desafío para los países de América Latina y el Caribe, acentuado por el actual contexto de pandemia y consecuente crisis social y económica, debida a la COVID – 19.

Este informe diagnóstico presenta un análisis de los diferentes componentes de la inclusión económica y cómo esta influye e impacta en la cohesión social, en particular en la subregión de Centroamérica compuesta por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y la República Dominicana. El documento se enfoca específicamente en los efectos de la baja inclusión económica y cohesión social en los empleos, la educación y el bienestar de las personas jóvenes, que representan el talento y el futuro de las sociedades. A través de una serie de recomendaciones, se pretende ofrecer propuestas de acción para los tomadores de decisiones en el diseño de políticas públicas activas que apunten, entre otros aspectos, a la generación de empleo formal y fomento del emprendimiento, al acceso a oportunidades educativas de calidad y ajustadas a la demanda del mercado laboral, al logro de la igualdad de género y a la creación de institucionalidad tanto a nivel nacional como local, promoviendo un proceso de equidad, con base en las necesidades específicas de los diferentes grupos poblacionales.



© PNUD Colombia

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La región de América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. El desarrollo latinoamericano muestra dificultad a la hora de conjugar crecimiento con equidad. En efecto, la región se caracteriza por tener la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y este rasgo ha tendido, con escasas excepciones, a exacerbarse. Muestra de ello es el coeficiente de Gini, el cual ha registrado una disminución considerable desde el 2002 al 2019, año en que se registró un valor promedio de 0.46, dato que sigue siendo mucho más alto respecto a otros países de la OCDE y a otros países con niveles de desarrollo parecidos, respectivamente 0.33 y 0.36.

La desigualdad limita el crecimiento económico y la productividad e impacta negativamente en la cohesión social. Desde hace más de una década, el concepto de cohesión social se ha convertido en uno de los temas centrales en el debate internacional y se ha vuelto todavía más relevante en el contexto actual de crisis social y económica generada por la pandemia de la COVID – 19. Es evidente que el retraso de la plena inclusión del conjunto de la ciudadanía en los beneficios del desarrollo representa un problema que afecta a la convivencia democrática y un obstáculo a un crecimiento sano, contribuyendo a crear un entorno propicio para el incremento de la desconfianza y la generación de conflicto y violencia.

Partiendo de los conceptos generales, en los primeros dos capítulos del presente informe diagnóstico, se analiza la relación entre la inclusión económica y la cohesión social, enfocando la atención en algunos de los grupos más vulnerables: las personas jóvenes y los pueblos indígenas, que representan importantes grupos poblacionales, también en números, en los países de la subregión de Centroamérica y la República Dominicana. El 46.9% de la población en la subregión está formada por personas con menos de 24 años y el 14.28% por personas indígenas, por ende, su inclusión socioeconómica representa retos y oportunidades importantes para el desarrollo de estos países. A lo largo del documento, se destaca también que, además de la inclusión económica, para alcanzar un pleno desarrollo humano, es necesario apostar a otros dos aspectos fundamentales: el acceso a la vivienda, a servicios de educación y salud y espacios públicos de calidad y a una seguridad ciudadana corresponsable, como derecho de vivir en un contexto libre de amenazas delictuales y situaciones de inseguridad.

PRINCIPALES HALLAZGOS

Entre el 2000 y el 2010, la subregión experimentó el período de mayor crecimiento económico de las últimas cuatro décadas, pero a este crecimiento económico no correspondió una reducción de la desigualdad en la distribución de ingresos, a pesar de los importantes avances logrados a partir del 2002.

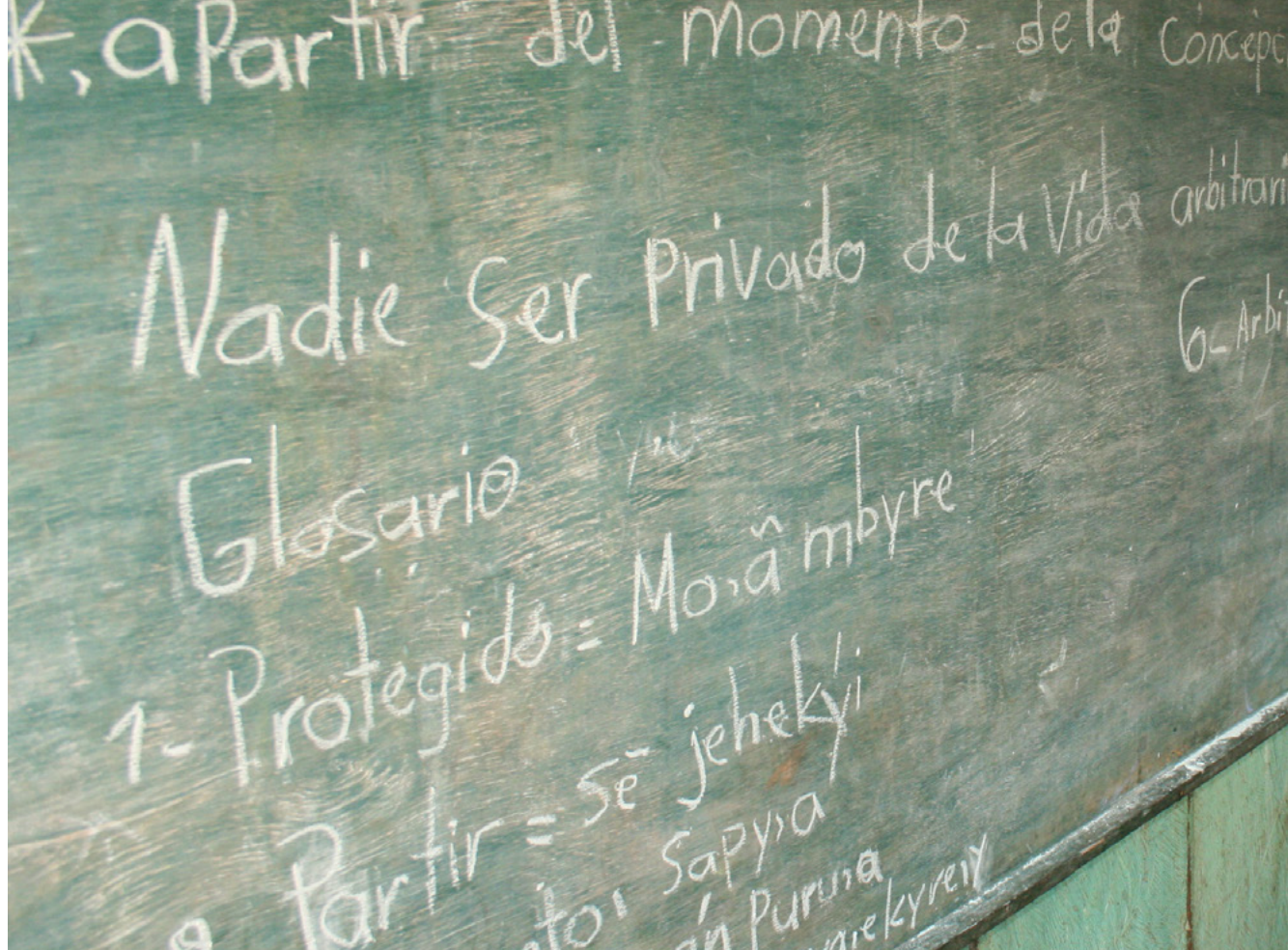
Con las debidas diferencias, la estructura económica de los países de la subregión se caracteriza por una fuerte presencia de micro, pequeñas y medianas empresas (99%), que generan más del 70% del empleo total y aportan aproximadamente el 34% de la producción. Se caracterizan también por una alta tasa de informalidad laboral, con niveles bastante heterogéneos entre los países (desde el 38.8% en Costa Rica al 82.6% en Honduras). Otro elemento común a destacar es el alto porcentaje de personas jóvenes en estos países (las personas jóvenes entre 15–24 años representan el 19% de la población total de la subregión), que permite transitar por un periodo de bono demográfico. Esto, acompañado por la debidas políticas e inversión en capital humano, puede representar una gran oportunidad para el desarrollo. Sin embargo, en la práctica, la tasa de desempleo entre las personas jóvenes de la subregión entre 15 y 24 años llegó, antes de la pandemia, al 17.2% (casi el doble de la tasa general de desempleo promedio en la subregión) y, en general en ALC, el 22.4% del total de las personas jóvenes son categorizados como NINI (Ni Estudian Ni Trabajan).

Esta situación se ha acentuado con el impacto que tuvo y tendrá la COVID–19 en la economía de la subregión, afectando particularmente a los empleos temporales e informales y a algunos sectores productivos, como en el caso del turismo, donde se observa mayor concentración de personas jóvenes, en particular los que cuentan solo con un título de educación primaria.

Esta situación se ha acentuado con el impacto que tuvo y tendrá la COVID–19 en la economía de la subregión, afectando particularmente a los empleos temporales e informales y a algunos sectores productivos, como en el caso del turismo.



© Salmonegro



La educación de calidad representa una de las condiciones preliminares para que las personas jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos, formándose como personas y preparándose al mercado de trabajo, sea esto en términos de empleo o de desarrollo de emprendimientos. La finalización de la educación secundaria es considerada el nivel mínimo de educación para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y ampliar las posibilidades de acceso al trabajo decente. A pesar de los grandes avances de los países de Centroamérica y la República Dominicana en la reducción de la tasa de abandono escolar durante el ciclo de primaria y secundaria (entre las personas jóvenes de 20 a 24 años, el número de las personas que finalizaron el ciclo de educación secundaria aumentó del 37% al 58% entre 1997 y 2013), las tasas relativas a la educación superior siguen bajas (del 23% en el 2000 al 44% en el 2014). La permanencia en la educación es influenciada también por el nivel de riqueza de las familias de origen: a familias con bajos niveles de riqueza corresponden más altos niveles de abandono escolar y una mayor dificultad de acceso a una educación de calidad. Este elemento ha sido exacerbado por la pandemia que ha dejado a más de 137 millones de estudiantes de la región de América Latina y el Caribe sin acceso a los cursos, golpeando más fuertemente a las personas jóvenes que provienen de familias con ingresos más bajos y que no pudieron acceder a modalidades de aprendizaje en línea.

La falta de inclusión económica y de cohesión social influye negativamente también en otro grupo poblacional: los pueblos indígenas. Históricamente la comunidad indígena es objeto de discriminación y de exclusión que no se traduce solo en desigualdades en términos monetarios o de concentración de la tasa de pobreza, sino también de acceso a las oportunidades y de baja participación en los espacios de toma de decisiones. Tomando como referencia el empleo informal, la tasa de informalidad entre la población indígena es del 82.6%, muy por encima de la estimada para la población total, igual al 61.7%. Aplicando una perspectiva de género, los resultados son todavía peores: el 85.1% de las mujeres indígenas cuenta con un empleo informal, frente al 80.9% de los hombres indígenas.



© PNUD Paraguay

Las vulnerabilidades socioeconómicas, un débil tejido social y la percepción de injusticia contribuyen a crear un entorno propicio para el incremento de la desconfianza y para la generación de conflicto y violencia.

En la subregión, la integración plena de las mujeres a la vida económica sigue siendo un desafío importante. A pesar de los avances logrados en la equidad de género, por ejemplo en el aumento del empleo femenino, siguen existiendo grandes desigualdades en el acceso y permanencia en el mercado laboral por falta de políticas sociales que las sostengan en los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños, niñas y personas mayores: las mujeres latinoamericanas dedican más de 4 horas y media al día a las tareas domésticas o al cuidado de los hijos y personas mayores (tres veces más tiempo que los hombres). El proceso de inclusión de las mujeres y de equidad de género, a causa de la pandemia, ha enfrentado un retroceso, cuyas consecuencias se pueden extender más allá de la crisis sanitaria, sin el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral.

Como lo indica la Agenda 2030 a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, para la construcción de sociedades más inclusivas, es necesario apuntar al diálogo y articulación entre todos los actores: los gobiernos, la ciudadanía, la sociedad civil, la academia y el sector privado, para avanzar en la construcción de la cohesión social. El sector privado juega un papel fundamental en la protección de los derechos humanos, la promoción de un empleo digno y formal, la reducción del impacto en el ambiente y la adopción de prácticas anti-corrupción. El punto de partida para el involucramiento del sector privado en los procesos de inclusión económica, protección de los derechos humanos y en la reducción de las desigualdades, está representado por la ruptura del paradigma de la responsabilidad social de empresa, que puede ser leída como una actividad voluntaria y accesorio, y ser sustituido por el concepto de corresponsabilidad.

Las vulnerabilidades socioeconómicas, un débil tejido social y la percepción de injusticia contribuyen a crear un entorno propicio para el incremento de la desconfianza y para la generación de conflicto y violencia. Muestra de ello, es el aumento en la última década de la percepción de injusticia distributiva y la desconfianza en los poderes públicos. En el 2018, únicamente el 10.8% de la población de los países de la subregión declaró que la situación económica de su país era buena y solo el 16.8% opina que “la distribución del ingreso en su país era muy justa o justa”. Sin duda, el aspecto económico es solo una de las dimensiones que influyen en la cohesión de una sociedad, junto a las dimensiones ambiental y social.



PROPUESTAS DE ACCIÓN

Como se desprende del análisis, a partir de los hallazgos anteriores y a pesar de las diferencias y peculiaridades que presenta cada país de la subregión de Centroamérica y la República Dominicana, se han identificado las siguientes propuestas de acción con el objetivo de avanzar hacia una mayor inclusión económica y cohesión social, especialmente de las personas jóvenes:

I. EDUCACIÓN ALINEADA A LA DEMANDA DEL MERCADO LABORAL

- Disponer de datos actualizados y desagregados que permitan contar con una fotografía del contexto nacional y, más específicamente, del nivel de participación en el mercado laboral por parte de las personas jóvenes y de las mujeres, para la elaboración de políticas públicas activas que permitan fortalecer sus habilidades en función de la demanda del trabajo y ofrecer servicios públicos para su acceso y permanencia.
- Garantizar la coherencia entre la formación técnica y tecnológica de las personas jóvenes y la demanda del mercado laboral, identificada en base a diagnósticos que sistematicen las necesidades y potencialidades del sector público y privado a nivel territorial.
- Acelerar el proceso de transformación educativa orientado a la calidad y a la formación técnica, incluyendo la necesaria digitalización en términos de habilidad y de herramientas, con programas específicos dedicados a las personas jóvenes de escasos recursos.
- Favorecer la articulación interinstitucional entre el sector público y privado y otros actores clave, a través la creación de mesas de diálogo interinstitucionales, que permitan la construcción de un pacto social conjunto, que se traduzca en la incorporación e integración de prácticas y protocolos para una conducta diligente por parte del sector privado y un mayor conocimiento de su demanda laboral por parte de los demás actores clave.

II. EQUIDAD DE GÉNERO

- Promover la participación de las mujeres, diseñando programas dirigidos a sectores y tipos de trabajos más atractivos para las mujeres, proporcionando servicios de cuidado infantil y garantías de seguridad personal para los participantes.
- Crear bases de datos desagregados y sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación sensibles al género.
- Implementar un sistema integral de apoyo, tanto académico como social, para prevenir el abandono escolar, con medidas de carácter permanente en los centros educativos, para reducir la incidencia del embarazo en la adolescencia y sus consecuencias en la tasa de abandono escolar.

III. PROMOCIÓN DE EMPLEO VERDE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA BIODIVERSIDAD

- Impulsar y promover el emprendimiento verde, en particular en los sectores de gestión integrada de desechos, agricultura ecológica y energía, a través un proceso de formación y sensibilización, y garantizando la coherencia con los esfuerzos nacionales para cumplir con las metas trazadas para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
- Promover alianzas público–privadas sostenibles en áreas como el ecoturismo, el transporte verde, practicas agrícolas y sistemas energéticos, favoreciendo soluciones y enfoques desde las comunidades, que permitan una transición hacia una economía limpia y equitativa.
- Potenciar el turismo verde, manejado a nivel comunitario y orientado a la protección de recursos naturales, terrestres y acuáticos.

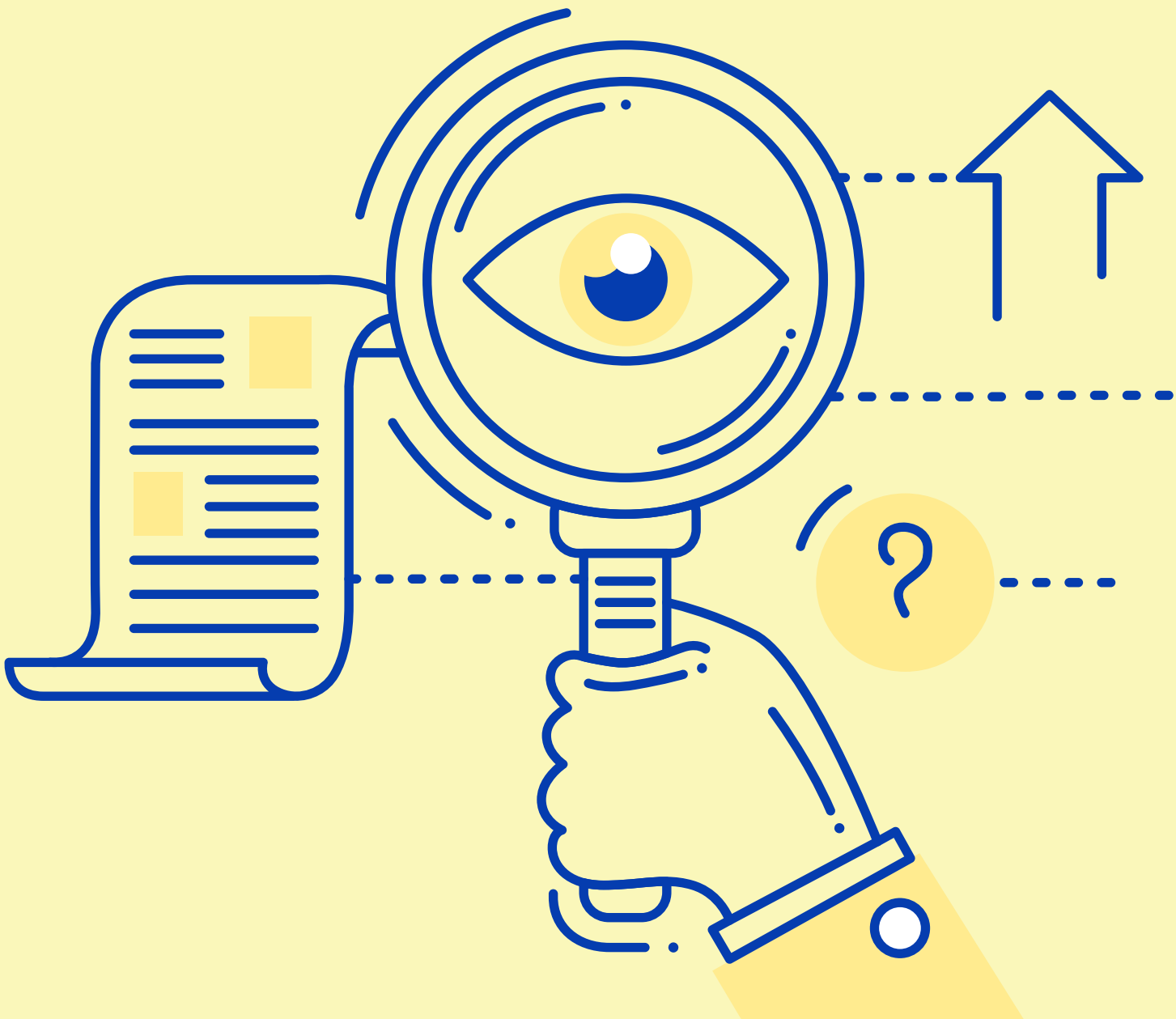


IV. SERVICIOS DESCENTRALIZADOS PARA LAS MIPYMES

- Apoyar el proceso de descentralización de los países, a través la promoción de centros o agencias a nivel territorial (provincial, departamental, regional) públicos – privados, capaces de brindar servicios integrales de calidad a las MIPYME y a los nuevos emprendimientos. A través de personal técnico formado, estos centros deberían proveer servicios que aporten a una cultura de formalización, innovación y de incubación de empresa.
- Empujar el proceso de formalización de empresa, asociándolo a una clara oferta de servicios a las personas, en cuanto a protección y seguridad social, y a las empresas, con respecto a servicios empresariales que permitan incrementar la competitividad y acceder a nuevos mercados.
- Favorecer la articulación entre las instituciones de crédito, incluyendo aquellas de microcrédito, y promover productos financieros que respondan a las necesidades de las micro y pequeñas empresas, fomentando su inclusión e incrementando su competitividad.
- Reducir la brecha digital existente, a través de intervenciones infraestructurales para ampliar la cobertura tecnológica, en particular en las áreas rurales, y plantear programas formativos para enseñar competencias digitales básicas que faciliten el acceso a los servicios empresariales y que permitan un incremento de competitividad empresarial.

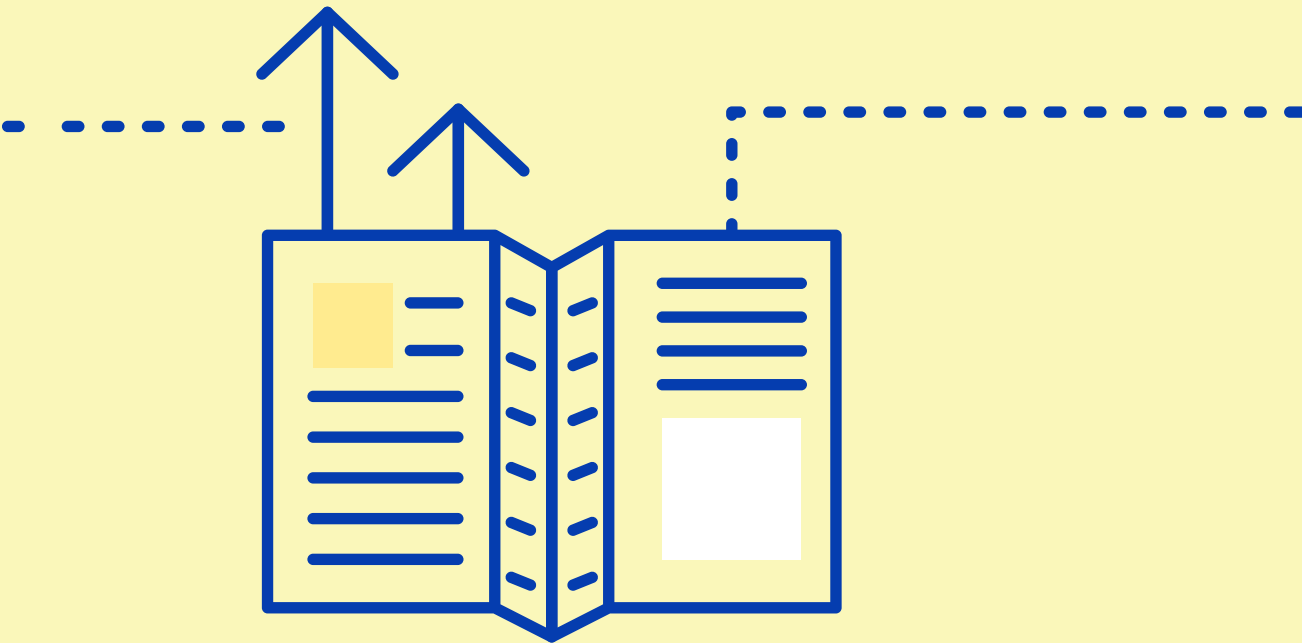






1

MARCO DE REFERENCIA





1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 LA RELACIÓN ENTRE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y COHESIÓN SOCIAL

Como demuestra el ejercicio que se está realizando a nivel mundial, en particular en la región de América Latina y Caribe, la cohesión social es un concepto complejo y multidimensional, que requiere un enfoque sistémico para analizar sus diferentes componentes y las relaciones que los enlazan. Partiendo de la definición de cohesión social adoptada por el PNUD y presentada en la introducción del presente documento, la cohesión social representa tanto un fin como un medio de la política y las políticas. Como fin, las políticas públicas apuntan a que la sociedad se sienta parte activa de un sistema y sus miembros como agentes de cambios y beneficiarios del desarrollo. Como medio, las sociedades que presentan altos niveles de cohesión social sientan las bases para un ambiente estable, positivo e inclusivo, que permite la atracción de inversiones y un crecimiento económico más equitativo².

Un elemento fundamental para avanzar en la cohesión social es la participación, el diálogo y la articulación entre los actores de los diferentes sectores de la sociedad, entre los cuales destacan la ciudadanía, quien debe estar dispuesta a ceder parte de sus intereses para el bien común.

Un elemento fundamental para avanzar en la cohesión social es la participación, el diálogo y la articulación entre los actores de los diferentes sectores de la sociedad, entre los cuales destacan la ciudadanía, quien debe estar dispuesta a ceder parte de sus intereses para el bien comúnⁱⁱ.

En ese contexto, el retraso de la plena inclusión del conjunto de la ciudadanía en los beneficios del desarrollo adquiere una importancia fundamental y representa un problema que afecta a la convivencia democrática y un obstáculo a un crecimiento sano. En el análisis, es importante también tomar en cuenta la percepción que la ciudadanía tiene de la situación: la percepción de injusticia distributiva y la desconfianza en los poderes públicos, han crecido en la última década.³ En el 2018, solo el 10.8% de la población de los países de la subregión declaró que la situación económica de su país era buena y solo el 16.8% opina que “la distribución del ingreso en su país era muy justa o justa”⁴.

Las vulnerabilidades socioeconómicas, un débil tejido social y la percepción de injusticia contribuyen a crear un entorno propicio para el incremento de la desconfianza y para la generación de conflicto y violencia.

En este marco, y como refleja el cálculo de diferentes índices (Índice de Pobreza Multidimensional, Índice de Desarrollo Humano, Índice de Desigualdad de Género, Coeficiente de Gini), el aspecto económico es solo una de las dimensiones que influyen en la cohesión de una sociedad, junto a las dimensiones ambiental y social. El análisis de las condiciones socioeconómicas de un país o una región no debe enfocarse únicamente

ii Ejemplos de bien común son las restricciones comportamentales para disminuir el impacto en el medio ambiente ante el cambio climático, el pago de impuestos directamente proporcional a los ingresos para garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la ciudadanía, la democracia y la división de los poderes en lugar de la concentración en favor de unos pocos.



© PNUD Panamá / Yolanda Vicente

en los ingresos y su distribución, sino estudiar también otros componentes entre los cuales están: el empleo, en términos de formalidad, garantías de protección social y nivel de estabilidad laboral; la relación entre oferta de las instituciones educativas y demanda del mercado laboral; la educación, en términos de acceso no únicamente a la educación primaria, sino de finalización de la educación secundaria y acceso a la educación superior; el emprendimiento, como oportunidad de las personas, especialmente de las personas jóvenes, a emprender aportando desarrollo e innovación a la sociedad.

Bajo esta visión, en base a la cual la condición económica de una persona es el resultado de diferentes factores, promover la inclusión económica significa eliminar todas aquellas brechas que impiden a una persona desarrollarse plenamente y satisfacer sus necesidades, más allá de las primarias. La falta de inclusión económica, concebida de esta forma, lleva a la generación de pobreza entre ciertos grupos poblacionales que, por diferentes razones, muestran una mayor vulnerabilidad. Este concepto está directamente conectado a el de capacidades y libertad del economista y filósofo Amartya Sen, entendidas como las oportunidades reales de las cuales disponen las personas para lograr lo que valoran.⁵ La pobreza, entendida en todas sus dimensiones, tiende a reproducir la exclusión social por medio de una cadena de eslabones, entre los que se encuentran: muy bajos ingresos y escaso capital educativo en el hogar; maternidad adolescente y desnutrición durante el embarazo; recién nacidos con bajo peso; lactancia materna insuficiente; falta de estimulación temprana; retrasos en el desarrollo psicomotor; episodios de desnutrición global y crónica; falta de preparación para la escuela; bajo rendimiento y repetición en los primeros años de la enseñanza; deserción escolar; inserción precaria en el mercado laboral; bajos ingresos y desprotección social; alto riesgo de caer en dinámicas de violencia y crimen; todos factores que reproducen el ciclo de pobreza y exclusión en la generación siguiente⁶.

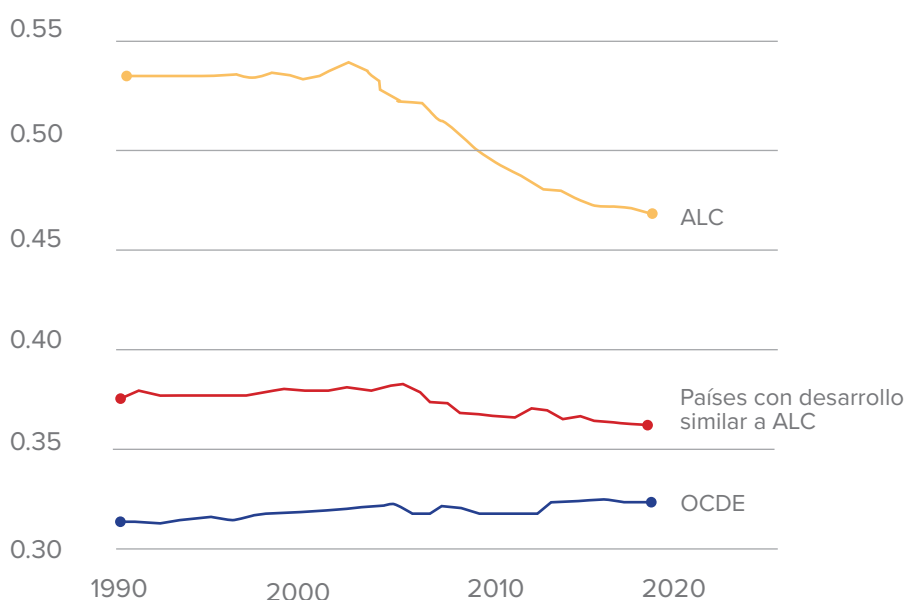
Para lograr avances en el desarrollo humano, es necesario aplicar un enfoque integral, incluyendo en el análisis y en el trabajo, además de la inclusión económica, otros dos ejes fundamentales: a) vivienda, servicios de calidad y espacios públicos, en términos de las condiciones básicas que permitan a la persona de acceder a un servicio de educación y salud de calidad, de contar con una vivienda adecuada, transporte, ocio y de vivir en un

entorno caracterizado por el bienestar; b) seguridad ciudadana corresponsable, entendida como el derecho de vivir en un contexto libre de amenazas delictuales y situaciones de inseguridad. Estos tres componentes están fuertemente relacionados: las condiciones de seguridad dependen, entre otras cosas, de las posibilidades de las personas de acceder a un empleo digno y contar con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades y vivir en una situación de bienestarⁱⁱⁱ. Al mismo tiempo, las personas deben contar con las capacidades necesarias para acceder y permanecer en el mercado laboral. Con estas premisas, cualquier acción orientada a la promoción del desarrollo humano y la cohesión social deberá aplicar un enfoque multidimensional, que tenga como base un pacto social, derivado de la definición de derechos y obligaciones del Estado y de la sociedad.⁷

Enfocando la atención del análisis en América Latina y el Caribe, el desarrollo regional muestra dificultad a la hora de conjugar crecimiento con equidad. En efecto, la región se caracteriza por tener la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y este rasgo ha tendido, con escasas excepciones, a exacerbarse.

Basándose en la medición del Coeficiente de Gini, como sugiere el gráfico a continuación, en la región se han logrado importantes avances, pero siguen existiendo grandes diferencias, en particular comparando la región con otros países de la OCDE y a otros países con niveles de desarrollo parecidos a los de América Latina y el Caribe. El gráfico a continuación permite identificar tres etapas de evolución del Coeficiente de Gini: la primera (desde 1990 hasta 2002), donde la desigualdad de la región fue estable, con un Coeficiente de Gini promedio del 0.53, donde el 10% de la población más rica tenía un ingreso 45 veces más alto que el 10% más pobre; la segunda (desde 2002 a 2012), donde la desigualdad disminuyó de forma considerable (tasa anual de 0.6 puntos) y una tercera (desde 2012 a 2018), durante la cual se registró una reducción a tasas más bajas (tasa anual de 0.2 puntos)⁸.

Figura 1 | Evolución y comparación del Coeficiente de Gini.



Fuente: SEDLAC y Banco Mundial para los países de ALC. Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad para la OCDE y países similares a ALC^v

iii Para más detalles sobre la relación entre la inclusión económica y el ODS16+ sobre Paz, Justicia e Instituciones sólidas, ver PNUD (2021). Cohesión social con enfoque ODS16+. Bases para su medición en el contexto sub-regional.

iv Los países con desarrollo similar a ALC son: Albania, Argelia, Bulgaria, Hungría, Indonesia, Malasia, Marruecos, Filipinas, Polonia, Serbia, Tailandia, Turquía y Túnez.

La falta de correspondencia entre crecimiento económico y equidad impacta negativamente en la cohesión social: el acceso a noticias e información de colectivos que se encuentran en situación de inestabilidad económica y vulnerabilidad de ingresos genera expectativas de mayor bienestar que choca con la realidad. Esta situación lleva a una mayor frustración entre las personas, en particular jóvenes y mujeres, quienes, a pesar de sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida y la de su familia, no logran acceder a un empleo digno, ni a servicios públicos de calidad, como salud y educación. Esto disminuye la confianza en las instituciones y reduce la disponibilidad a participar como actores activos. Eso conlleva consecuentemente, a una menor cohesión de la sociedad y una creciente inestabilidad política y social.⁹



© PNUD Haití / Borja Lopetegui González

Figura 2 | Temas relevantes para la inclusión económica de los jóvenes en la subregión.



Fuente: Elaboración propia

1.2 IMPACTO Y RESPUESTA REGIONAL A LA COVID-19 EN EL TEJIDO SOCIOECONÓMICO

El **36%** de las personas empleadas se encuentran en sectores altamente afectados por el coronavirus.



El **58.9%** de mujeres empleadas trabajan en los sectores más afectados por la crisis.

La pandemia de la COVID-19 es mucho más que una crisis sanitaria, ya que está teniendo y tendrá impactos profundos en las sociedades, en particular en las personas más vulnerables, y sus economías¹⁰.

El objetivo principal de los gobiernos a nivel mundial ante la epidemia de la COVID-19, ha sido aplanar la curva epidemiológica con restricciones que frenen la propagación del virus, lo que se ha traducido en medidas de distanciamiento social y medidas de confinamiento de la población contagiada o en riesgo de contagio. A partir de esta realidad, Rogoff (2020)¹¹ sostiene que la pandemia de la COVID-19 implicará un choque económico, tanto de oferta como de demanda, del que no se tienen antecedentes cercanos hasta la década de los años 70, cuando la crisis económica derivada del choque petrolero y el posterior deterioro de la deuda pública afectó a la mayoría de las economías en desarrollo.

A medida que se incrementan las medidas de distanciamiento social, se reflejan impactos similares a una recesión económica donde se observa la contracción del consumo de los hogares y la reducción de las inversiones por el lado de las empresas. Cabe señalar que el motivo “esperar y ver”, como lo denominan Baldwin y Tomiura (2020)¹², juega un papel fundamental en los choques, donde la incertidumbre de los agentes económicos a partir de la opinión generalizada sobre las acciones de política pública que toman los gobernantes, así como los obstáculos sanitarios que la letalidad del virus puede generar, se proyecta en una postergación del consumo y la inversión. Asimismo, la temporalidad y la intensidad del choque económico también se relacionan con la vinculación que tienen los países con los cinco siguientes canales de contagio: la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de la región, la caída en la demanda de servicios de turismo, la interrupción de las cadenas globales de valor, la probable caída de los precios de los principales bienes primarios de exportación y la mayor incertidumbre para los inversionistas¹³.

Previo a la difusión del SARS-CoV-2, los países de la subregión tenían altos niveles de desigualdad socioeconómica, que se traducían en diferencias de ingresos muy acentuadas y en el acceso segregados a bienes públicos de calidad en el ámbito de la educación, la salud, el transporte y la infraestructura¹⁴.

La pandemia ha tenido graves repercusiones en diferentes ámbitos, entre los cuales destaca, en el mercado laboral de la subregión de América Central y la República Dominicana. La OIT estimó que Centroamérica perdió 19.2% de horas de trabajo, equivalentes a 16 millones de empleos perdidos a tiempo completo (40 horas por semana); 8.3 millones de trabajadores centroamericanos se encuentran en situación de riesgo; el 36% de las personas empleadas se encuentran en sectores altamente

afectados por el coronavirus; el 58.9% de mujeres empleadas trabajan en los sectores más afectados por la crisis, mientras que la proporción de hombres es del 43%¹⁵.

En este sentido, la evolución de los indicadores laborales sugiere analizar el impacto que la contracción económica está teniendo en dos de los grupos que presentan mayor vulnerabilidad, como son las mujeres y las personas jóvenes.

Como se puede apreciar en la tabla a continuación, la crisis sanitaria impactó de forma similar a los hombres (-5.5 p.p.) y a las mujeres (-5.4 p.p.) en términos de tasas de participación, comparando los tres primeros trimestres de 2020 con el mismo periodo en 2019, aunque proporcionalmente fue más importante entre las mujeres, dada su menor tasa de participación.

Analizando los demás indicadores, la tendencia es bastante parecida, aunque, observando los datos con el contexto, se puede entender como el impacto en las mujeres es más significativo. Entre 2015 y 2019 las tasas de participación y ocupación femenina crecieron de 1.8 p.p. y del 0.8 p.p., respectivamente. Esto contrasta con la contracción de la participación (-0.3 p.p.) y ocupación (-1.1 p.p.) de los hombres en el mismo periodo. Es decir, previo a la crisis sanitaria, lo que ha sostenido a la participación y ocupación regional ha sido la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Debido a la pandemia, este proceso claramente enfrenta un retroceso, cuyas consecuencias pueden extenderse más allá de la crisis sanitaria sin el debido soporte de los sistemas públicos de cuidados (enfermos, ancianos, niños) y el sistema escolar presencial, que faciliten el retorno de las mujeres al mercado laboral. A su vez, el significativo incremento en la subutilización de la fuerza de trabajo durante 2020 puede también generar mayores dificultades para su reinserción laboral en el futuro. Por ende, la crisis económica regional, puede incluso tener impactos más permanentes, con el riesgo de presentarse un retroceso en los avances logrados en los últimos años en materia de igualdad de género en el ámbito laboral, si no se implementan respuestas de política socio laboral pertinente¹⁶.

Tabla 1 | América Latina y el Caribe: principales indicadores del mercado de trabajo por año, según sexo. 2015 - III trimestre 2020 (tasas anuales medias).

Indicadores ^{a/}	2015	2016	2017	2018	2019	Promedio I-III Trim. ^{b/}		
						2019	2020	Var (pp.)
Tasa de participación	62.0	62.1	62.4	62.5	62.7	62.6	57.2	-5.4
Hombre	75.2	75.1	75.2	75.1	74.9	74.2	68.7	-5.5
Mujer	49.7	50.0	50.6	50.9	51.4	51.8	46.4	-5.4
Tasa de ocupación	57.9	57.3	57.4	57.6	57.8	57.2	51.2	-6.0
Hombre	71.0	70.1	70.0	70.0	69.9	68.8	62.4	-6.4
Mujer	45.8	45.5	45.8	46.2	46.6	46.5	40.9	-5.7
Tasa de desocupación	6.6	7.8	8.1	8.0	8.0	8.7	10.6	1.9
Hombre	5.7	6.8	7.0	6.9	6.8	7.4	9.4	2.0
Mujer	7.9	9.2	9.6	9.5	9.5	10.3	12.1	1.8

Fuente: OIT con la base de información de hogares de los países.



La pandemia ha dejado a más de **137 millones** de estudiantes de la región de América Latina y el Caribe sin acceso a los cursos.



La tasa de desocupación juvenil llegó a un valor del **23.2%**

Respecto a las personas jóvenes que estaban matriculadas en el año escolar 2020-2021, la mayoría experimentaron el cierre de las escuelas presenciales, pero no todos pudieron acceder a aprendizaje en línea y a distancia. En efecto, la pandemia ha dejado a más de 137 millones de estudiantes de la región de América Latina y el Caribe sin acceso a los cursos, y la situación ha golpeado fuertemente a las personas jóvenes que provienen de familias con ingresos más bajos: solo 1 de cada 2 estudiantes de escuelas públicas tiene acceso a la educación a distancia de calidad en el hogar, en comparación con 3 de cada 4 estudiantes de escuelas privadas¹⁷. A pesar de que las escuelas y las instituciones de formación, así como algunos gobiernos de los países de la subregión, han canalizado esfuerzos para asegurar la continuidad de la enseñanza y formación a través del aprendizaje en línea, estos datos muestran claramente las enormes brechas digitales que existen a nivel nacional, regional y entre regiones del mundo¹⁸.

En un contexto de baja tasa de participación y ocupación de las personas jóvenes (15–24 años), los indicadores laborales de los jóvenes han empeorado de manera significativa a causa de la pandemia. La tasa de desocupación juvenil subió de 2.7 p.p. (1.9 p.p. para las personas de 25 años y mayores), llegando a un valor del 23.2%, nivel al cual no se había llegado antes, según los datos registrados en el primer trimestre del 2020, con casos extremos como en Costa Rica que ha detectado un incremento de 11 p.p., (31.1% en el I – III del 2019 y 42.1% en el I – III del 2020)¹⁹. Esta tendencia negativa puede ser debida a varios factores, entre otros: el porcentaje de personas jóvenes que trabajan en los sectores más afectados por la pandemia, como el turismo, es mayor respecto a otros grupos poblacionales; la precariedad y la informalidad del empleo se concentran entre las personas jóvenes, en particular los que cuentan solo con un título de educación primaria.

Este contexto genera presiones internas de diferente naturaleza en los países. Por ejemplo, las presiones fiscales, tanto por el lado de la disminución de los ingresos tributarios como por el aumento de la deuda pública, pueden incidir en el corto y mediano plazo en la provisión y calidad de los programas y servicios sociales que presta el gobierno. Esto podría generar crisis múltiples de inseguridad alimentaria, choques socioeconómicos y políticos, sobre todo en ciertos grupos poblacionales, especialmente mujeres y jóvenes, y grupos de alta vulnerabilidad tales como refugiados, migrantes y desplazados internos.

Asimismo, la ralentización de la actividad económica a partir de las medidas de confinamiento y la ruptura de cadenas de valor provoca la pérdida de fuentes de autoempleo, incremento del desempleo, sobre todo juvenil y femenino, disminución de salarios y, por lo tanto, pérdida de ingresos de los hogares con efectos más significativos en sectores socialmente vulnerables, sobre todo las mujeres. De igual forma, se estima que el impacto sea mayor para aquellas personas que están fuera del mercado laboral formal, las cuales poseen un acceso limitado o nulo a seguridad social y a ahorros y créditos.

La importancia de poner en marcha una recuperación segura y equitativa para las personas, estimulando a los países a orientar sus economías hacia una trayectoria más sostenible e inclusiva, se ve reflejada en el marco de respuesta socioeconómica del sistema de las Naciones Unidas que consta en cinco pilares^v. Para los fines del presente estudio, es esencial destacar el tercer pilar sobre la importancia de proteger los empleos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal, a través de programas de respuesta y recuperación económica; y el quinto pilar que identifica la necesidad de promover la cohesión social e invertir en sistemas de resiliencia y respuestas lideradas a nivel comunitaria²⁰.

El impacto multisectorial que ha tenido la COVID – 19, se refleja también en la situación de violencia y seguridad ciudadana, así como en los datos registrados en 2020 y en el primer semestre del 2021 en la subregión de Centroamérica y República Dominicana. Durante los primeros seis meses del 2020, la subregión registró una reducción del 33% del número de homicidios respecto al mismo semestre del 2019. Sin embargo, esta disminución se acentuó de forma inmediata a partir de la aplicación de las medidas de restricción de movilidad tomadas por los países por la COVID – 19. A partir de julio 2020, la cifra fue similar a las registradas en los primeros meses del año, pero se mantuvo más baja respecto al 2019. Al mismo tiempo, se registró un incremento de otras formas de violencia, particularmente la contra las mujeres.

Con respecto al 2021, el primer semestre registró un incremento de homicidios respecto al primer semestre del año anterior, con un comportamiento heterogéneo entre los países (El Salvador, Guatemala, Honduras y Belice mantienen la tendencia a la baja estabilizada, República Dominicana presenta un ligero incremento frente a 2019 y Costa Rica mantiene un ligero incremento en ambos periodos).²¹

Sin embargo, con cifras actualizadas a agosto 2021, podríamos identificar un efecto rebote sobre los hechos contra el patrimonio, ya que estos delitos han registrado un incremento importante, principalmente los robos y hurtos que han superado el nivel registrado previo a la pandemia. Por referencia, en Guatemala, de enero a agosto 2021, los robos y hurtos fueron mayores en 34.3% y 14.6% en relación al mismo periodo de 2020 y 2019, contrario a la tendencia del periodo del 2013 al 2018, durante el cual se registraba una constante reducción²². En El Salvador, el andamiaje fue parecido al de Guatemala con números de robos registrados en el 2021 superiores a los del 2020 y también del 2019 y de hurtos superiores al 2020, pero inferiores al 2019²³. En Honduras, en el 2020 los robos y los hurtos presentan tendencias decrecientes con un decremento respectivamente del 38% y del 37.2%²⁴.

Esta evidencia coincide con la teoría que argumenta que las tensiones socioeconómicas tienen el potencial de crear un ambiente de presión, que luego desencadena en un incremento en los delitos patrimoniales.

v El Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19 identifica las siguientes cinco líneas de trabajo: 1. asegurar que los servicios de salud esenciales se continúen disponibles y proteger los sistemas de salud; 2. apoyar a las personas a enfrentar la adversidad, brindando protección social y servicios básicos; 3. proteger los empleos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores del sector informal a través de programas de respuesta y recuperación económica; 4. orientar sobre el aumento necesario de los estímulos fiscales y financieros para lograr que las políticas macroeconómicas beneficien a los más vulnerables y fortalecer las respuestas multilaterales y regionales; y 5. promover la cohesión social e invertir en sistemas de resiliencia y respuestas lideradas a nivel comunitario (ONU, abril 2020).

Por tanto, las políticas en apoyo a los trabajadores, formales e informales, y a las empresas durante la reconstrucción post-COVID 19, jugarán un papel primordial en recuperar la estabilidad y la confianza de los agentes económicos. Para Basu (2020)²⁵, las acciones de política monetaria y política fiscal que se tomen, podrán frenar la temporalidad y la intensidad de las consecuencias de la pandemia, más aún si se materializan en acciones coordinadas internacional y regionalmente. La formulación de políticas económicas en el actual contexto de emergencia sanitaria requiere de una gestión programada y coherente de acciones en el corto, mediano y largo plazo que busquen armonizar las medidas de contención, prevención y atención (respuesta) a la COVID-19, con medidas de carácter fiscal, crediticio, monetario y comercial, que aseguren la estabilidad de precios y el correcto abastecimiento en mercados clave, como el sector de medicamentos y alimentos, de la mano de acciones de apoyo directo para mitigar el efecto inmediato de la reducción en los ingresos de los hogares y las empresas.

1.3 INTERSECCIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

La Agenda 2030 con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, apunta a la construcción de sociedades más inclusivas y cohesionadas y, al mismo tiempo, representa una importante guía para asegurar el compromiso y la participación de los gobiernos, de la sociedad civil y sus organizaciones, del sector privado y de la academia para actuar en las 5P (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz, *Partnership*), áreas de vital importancia que le permiten tener una visión integrada y transformadora, como muestra la figura 3.



Si la inclusión económica y la reducción de las desigualdades están implicadas directa y explícitamente, con el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” y el ODS 10 “Reducción de las desigualdades”, su promoción permitirá impactar positivamente en toda la Agenda 2030 y sus correspondientes metas como se demuestra, a modo de ejemplo, en la figura a continuación.

Figura 3 | Impacto de la inclusión económica y cohesión social por metas de cada ODS.



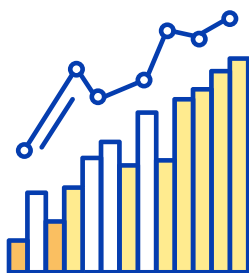
Fuente: Elaboración propia con datos Naciones Unidas (<https://www.un.org>)



2

LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN LA SUBREGIÓN





2. LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y LA COHESIÓN SOCIAL EN LA SUBREGIÓN

2.1 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LA SUBREGIÓN DE CENTROAMÉRICA Y LA REPÚBLICA DOMINICANA

La subregión de Centroamérica y la República Dominicana todavía no logra revertir muchos de los problemas heredados del pasado. La pobreza es todavía un fenómeno generalizado, la distribución del ingreso y de la riqueza sigue siendo desigual, y persisten poderosos intereses sectoriales que con frecuencia obstaculizan todo intento por introducir reformas fundamentales.

La estructura económica de la subregión está caracterizada por la presencia de micro, pequeñas y medianas empresas: el 99% del total de empresas son MIPYME (micro, pequeñas y medianas empresas) que generan cerca de 3 millones de empleos directos, que corresponden a más del 70% del empleo total y aportan aproximadamente el 34% de la producción regional^{26,vi}.

La crisis provocada por la COVID-19 causará una reducción media del 7.3% del PIB y un incremento promedio del 4.3% de población en situación de pobreza en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)²⁷. Los sistemas educativos y de salud de algunos países son todavía deficitarios; el tema ambiental está en un estado de extrema precariedad y los modelos de desarrollo de la subregión aún no se pueden catalogar como sostenibles^{vii}. Por otro lado, la seguridad ciudadana se ha deteriorado ante una ola de violencia y delincuencia que los sistemas judiciales no han podido afrontar de manera eficaz^{viii,28}.

Como se ha destacado en el capítulo anterior, las repercusiones de la COVID-19 han tenido profundos impactos en el mercado laboral y han contribuido a evidenciar las brechas sociales más grandes que aún persisten en la región de América Latina y el Caribe. La pandemia ha agravado la situación de muchos de estos países que, incluso antes de su aparición, mostraban deterioros en sus condiciones sociales y económicas. Los países miembros del SICA no se encuentran ajenos a esta realidad y también se han visto afectados por los impactos de esta pandemia, en diversas áreas sociales, teniendo implicaciones en sus niveles de salud, pobreza, desigualdad, empleo, seguridad alimentaria y nutricional, educación, entre otros.



La crisis provocada por la COVID-19 causará una reducción media del **7.3%** del PIB y un incremento promedio del **4.3%** de población en situación de pobreza en los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

vi El dato del empleo generado por las MIPYME es el resultado de la media del porcentaje calculado a nivel nacional en los seis países implicados en el presente estudio. El mismo es la suma del empleo formal e informal.

vii Para más detalle sobre desplazamiento por causas socioambientales, ver PNUD (2021). Cohesión socioambiental en Centroamérica y la República Dominicana

viii Para más detalle sobre migrantes y seguridad ciudadana, ver PNUD (2021). Cohesión social con enfoque ODS16+ en Centroamérica y la República Dominicana. Bases para su medición en el contexto sub-regional.



Adicional a este contexto, cabe destacar una serie de instancias de articulación claves que jugarán un papel importante en la región analizada. Todos los países objeto de este análisis son parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el cual se constituye como el marco institucional, multidimensional e intersectorial de la Integración Regional de Centroamérica, creado por los Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, adhiriéndose posteriormente Belice como miembro pleno, en el año 2000 y, a partir de 2013, la República Dominicana. El SICA tiene como objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

El Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE) es la instancia especializada en MIPYMES del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo productivo de dichas empresas, así como mejorar la calidad de vida y el empleo de personas que trabajan en ellas. El CENPROMYPE focaliza su acción en el fortalecimiento de las entidades públicas y privadas que apoyan las MIPYMES, ampliando la cobertura de los servicios de desarrollo empresarial y financiero, optimizando su calidad y buscando la eficiencia de las entidades prestadoras de servicios. Desde el año 2010, CENPROMYPE ejecuta la Agenda Regional MIPYME, aprobada por todos los gobiernos de los países miembros, para fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Otra instancia de articulación, representativa del sector privado, es el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) constituido por líderes empresariales de América Latina y el Caribe, Puerto Rico y Miami (Estados Unidos). Éste nace con el fin de unificar esfuerzos para fortalecer sus vínculos recíprocos dentro de un marco de democracia y de fomento del progreso socioeconómico de las naciones a las que pertenecen y en las que han expandido sus negocios y mercados. Su membresía cuenta con aproximadamente 350 empresas que, desde el sector privado, impulsan la integración latinoamericana promoviendo relaciones que van más allá de las fronteras geo – políticas.

2.2 UNA PERSPECTIVA SUBREGIONAL: DIFERENCIAS Y AFINIDADES

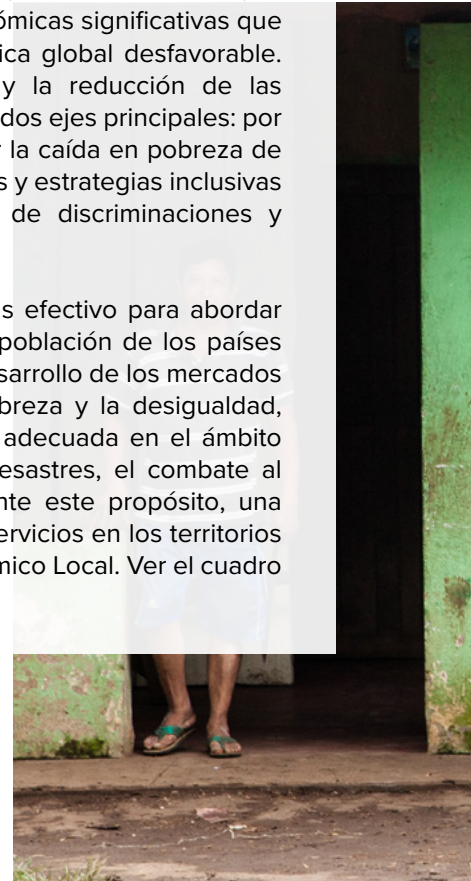
Las poblaciones indígenas resultan aquellas con menor nivel de acceso a los programas educativos y menor acceso a programas sociales del gobierno.

Los países de la subregión comparten el tamaño reducido de sus poblaciones, territorios y economías, que condicionan su modelo de desarrollo y sus relaciones internacionales. Los países en análisis se configuran como países de renta media. Entre el 2000 y el 2010, la subregión experimentó el período de mayor crecimiento económico en las últimas cuatro décadas²⁹. Sin embargo, el progreso ha sido más débil para las mujeres, personas jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes y poblaciones rurales y, por lo tanto, la desigualdad sigue siendo un problema clave³⁰.

Los países miembros del SICA cuentan con una amplia diversidad étnica y cultural en su población. Evidencia de ello es que albergan a más de 60 pueblos originarios que representan cerca del 20% de la población total de Centroamérica³¹. Sin embargo, las diferencias entre países son considerables; de acuerdo con los censos oficiales, el 41% de la población en Guatemala es indígena, el 13.7% en Belice, el 8.6% en Honduras, el 12.3% en Panamá, y el 2.42% en Costa Rica y 0.2% en El Salvador. No se encuentran datos disponibles para la República Dominicana³². Las poblaciones indígenas resultan aquellas con menor nivel de acceso a los programas educativos y menor acceso a programas sociales del gobierno³³.

Otro rasgo común de los países de la subregión es que, en los últimos años, se han experimentado transformaciones sociales y económicas significativas que hoy se ven amenazadas por una coyuntura económica global desfavorable. En este contexto, la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades en todas sus dimensiones se basan en dos ejes principales: por un lado, proteger los logros alcanzados para prevenir la caída en pobreza de millones de habitantes; por otro lado, impulsar políticas y estrategias inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminaciones y exclusiones históricas³⁴.

La integración apunta a proporcionar un entorno más efectivo para abordar aquellos retos que comprometen el bienestar de la población de los países miembros del SICA. Entre estos retos se incluye: el desarrollo de los mercados locales de bienes y servicios, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la protección de los recursos naturales, la inserción adecuada en el ámbito político y económico, la prevención y manejo de desastres, el combate al crimen organizado y la seguridad democrática³⁵. Ante este propósito, una herramienta que se ha demostrado útil para brindar servicios en los territorios y zonas rurales son las Agencias de Desarrollo Económico Local. Ver el cuadro a continuación para mayor detalle.



CUADRO 1

Las Agencias de Desarrollo Económico Local

Para favorecer la inclusión económica es fundamental garantizar el acceso a servicios para las micro y pequeñas empresas y los nuevos emprendimientos a nivel territorial, según un enfoque de descentralización que permita una mayor cercanía con la ciudadanía, brindando servicios que respondan a sus necesidades. Es en este marco que surgen las Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL) como estructuras sin fines de lucro constituidas por entidades territoriales públicas y privadas y como respuesta integral para el fomento del desarrollo sostenible a través de una visión compartida por los actores locales. A través de las ADEL, los actores locales planean y activan, de manera concertada, iniciativas para el desarrollo económico territorial, identifican los instrumentos más convenientes para su realización y establecen un sistema coherente de servicios técnicos y financieros. Los servicios que las ADEL promueven son de promoción territorial, dinamización económica, asistencia técnica y crediticia y capacitación empresarial, con el objetivo de apoyar el desarrollo productivo, la competitividad y la innovación económica, dentro de una perspectiva de desarrollo equitativo, ecológico y humano (IDEASS – ADEL para la gestión y la internacionalización de las economías locales).

Las ADEL han sido reconocidas como importante herramienta de promoción del desarrollo también en el ámbito de la cooperación internacional; el Banco Mundial, por ejemplo, reconoce las ADEL como los mejores instrumentos para el desarrollo económico local (<http://www.worldbank.org/urban/led>). El PNUD ha acompañado, en diferentes países de la región, su creación y fortalecimiento.









© PNUD Guatemala / Caroline Trutmann



© PNUD República Dominicana / Angel de la Rosa

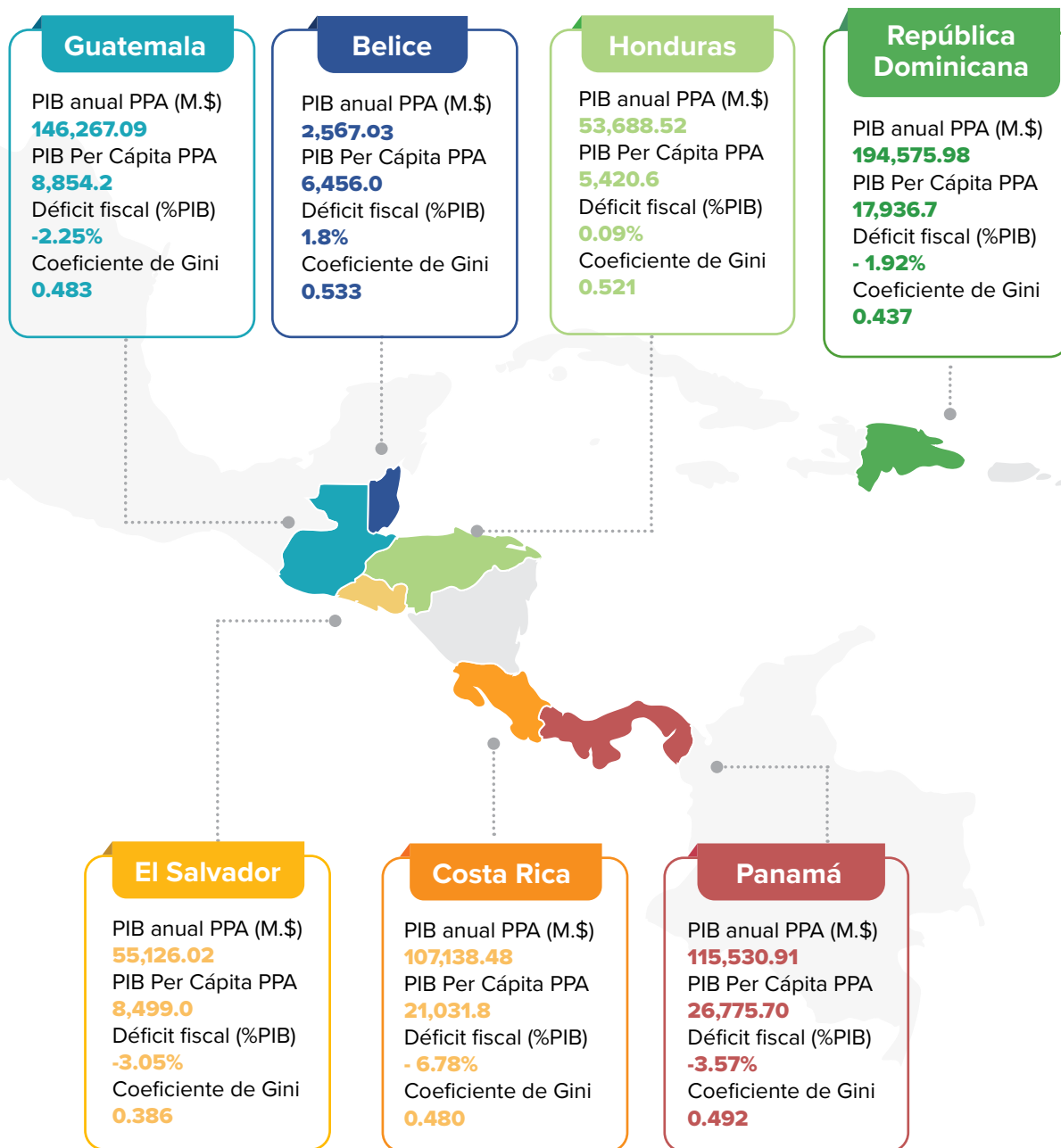
A partir de las informaciones en las tablas a continuación, se pretende resaltar algunas características que puedan facilitar la comprensión del contexto de la subregión y su posible evolución.

Tabla 2 | Panorama socioeconómico de los países de la subregión.

	 Población	 Índice de Desarrollo Humano	 Índice desigualdad de género	 Índice de Pobreza Multi-dimensional	 % Desempleo	 % Desempleo jóvenes 15-24 (años)
Belice	410,695 ³⁶	0.716	0.415	0.017	6.4	15.3
Costa Rica	5,111,238 ³⁷	0.810	0.288	0.002	11.9	31.8
El Salvador	6,704,864 ³⁸	0.673	0.383	0.032	4.1	9.5
Guatemala	16,858,333 ³⁹	0.663	0.479	0.134	2.5	4.9
Honduras	9,362,596 ⁴⁰	0.634	0.423	0.093	5.4	10.6
Panamá	4,219,000 ⁴¹	0.815	0.815	0.081	3.9	13.0
República Dominicana	10,488,499 ⁴²	0.756	0.455	0.015	5.8	15.9

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Mundial 2020 - World Development Indicators database.

Figura 4 | Datos económicos de los países de la subregión.

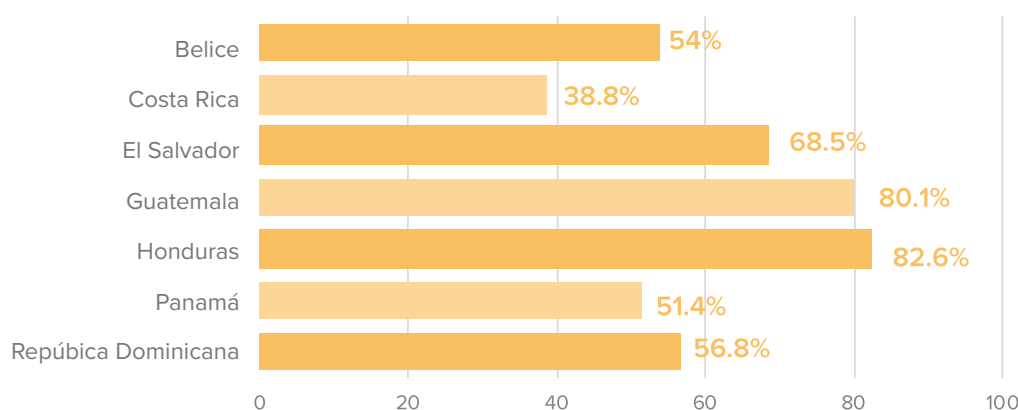


Fuente: Elaboración propia con datos Banco Mundial 2020 - World Development Indicators database.

Entre los países considerados, hay que evidenciar que Belice tiene tamaño y población significativamente inferiores al resto, además de ser el único regido por una monarquía constitucional que ha adoptado el inglés como idioma oficial y es parte de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Se puede observar además cómo Panamá, Costa Rica y República Dominicana presentan un PIB per cápita mayor que los demás países, sin que esto influya en una mejor distribución de la riqueza, ya que el coeficiente de Gini resulta muy parecido en todos los países de la subregión con una ligera baja en El Salvador.

Otro aspecto importante identificado es que los países analizados comparten un alto índice de informalidad laboral^{ix}, como se puede apreciar en la figura a continuación, que se refleja en un acceso limitado a los recursos puestos a disposición por los gobiernos nacionales para hacer frente a la pandemia.

Figura 5 | Nivel de informalidad laboral en los países de la subregión.



Fuente: Elaboración propia con datos OIT⁴³

Todos los países de la subregión objeto de este análisis se caracterizan por ser esencialmente receptores de remesas, con la excepción de Panamá y Costa Rica. Según el Centro de Estudios para la Integración Económica (CEIE), los ingresos por remesas familiares en la región centroamericana para 2018 sumaron un total de USD 22,193 millones, lo que representa un 8.3% del PIB regional. En países como República Dominicana, El Salvador y Honduras este porcentaje supera el 20% con respecto a su PIB. Si bien se ha observado una baja en las remesas durante el primer semestre del año 2020, en los datos disponibles a final del mismo año, el monto total ha sobrepasado el del 2019, actuando las remesas como un “seguro informal” aportado por los familiares residentes en el exterior⁴⁴.

En cuanto al acceso al crédito, se percibe una diferencia entre los países que están impulsando una modernización en las modalidades de transferencia de los recursos, mejorando la accesibilidad digital a través de plataformas (República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Belice) y los que siguen actuando bajo modalidades clásicas (El Salvador, Guatemala, Honduras). Éstos últimos, una vez terminada la fase de emergencia, tendrán dificultades en aprovechar los efectos positivos del cambio estructural generado.

ix La informalidad laboral abarca a los trabajadores en el sector informal y a los trabajadores informales fuera del sector informal. Los trabajadores en el sector informal son todas aquellas personas que, durante un período de referencia especificado, trabajaron en por lo menos una empresa del sector informal, sin importar su situación en la ocupación ni si se trataba de sus puestos de trabajo principal o secundario. Los trabajadores informales fuera del sector informal son todas aquellas personas que en su puesto de trabajo principal o secundario son: asalariados con puestos de trabajo informales en empresas del sector formal u hogares, trabajadores familiares auxiliares en empresas del sector formal, trabajadores por cuenta propia dedicados a la producción de bienes exclusivamente para el uso final propio del hogar (Economía informal, ILO 2019).

La integración plena de las mujeres a la vida económica sigue siendo un desafío importante.



© PNUD Guatemala / Fernanda Zelada Rosal

En la región, a pesar de los avances logrados en la equidad de género, gracias a los cuales el número de mujeres en la fuerza laboral ha aumentado, siguen existiendo grandes desigualdades en el acceso y en la permanencia en el mercado laboral a causa de la falta de políticas sociales que las sostengan en los quehaceres domésticos y el cuidado de los niños y niñas⁴⁵. Según el índice de desigualdad de género, se observan brechas de género en todos los países de la subregión y también desigualdades al interior de cada uno de estos: no es lo mismo ser una mujer indígena o afrodescendiente, ser joven, residir en zonas urbanas o rurales, estar en la tercera edad o tener o no tener hijos.

En la subregión, la integración plena de las mujeres a la vida económica sigue siendo un desafío importante. Una de las mayores preocupaciones es la sujeción a las autoridades masculinas (padres, maridos, compañeros y hermanos) en el ámbito familiar y la invisibilidad del trabajo doméstico no remunerado: las mujeres dedican más de 4 horas y media al día a las tareas domésticas o al cuidado de los hijos y personas mayores (tres veces más tiempo que los hombres)⁴⁶. Adicionalmente, las mujeres deben enfrentar las siguientes dificultades en los puestos de trabajo: menor remuneración por un trabajo de igual valor, invisibilización de su trabajo en las organizaciones a las que pertenecen y discriminación por estar en edad fértil⁴⁷.

El 63.2% de la población en la subregión tiene menos de 35 años. Ese bono demográfico representaría importantes retos y oportunidades para construir desde la visión de la juventud; en cambio a partir de los datos de la tabla 2, es posible observar cómo, en cada uno de los países analizados, el porcentaje de desempleo juvenil (15-24 años) corresponde a valores dobles o mayores del porcentaje de desempleo general⁴⁸. Por un lado, las personas jóvenes de la región se ven afectadas por las tres dimensiones de la exclusión laboral: el desempleo abierto, que es la expresión más cruda de la exclusión laboral; las ocupaciones de baja productividad y de condiciones laborales precarias que aumentan en un contexto de baja demanda laboral; los empleos de condiciones precarias que, si bien generan valor agregado, adolecen de bajas remuneraciones y escasa seguridad social⁴⁹.



Los ingresos por remesas familiares en la región centroamericana para 2018 sumaron un total de

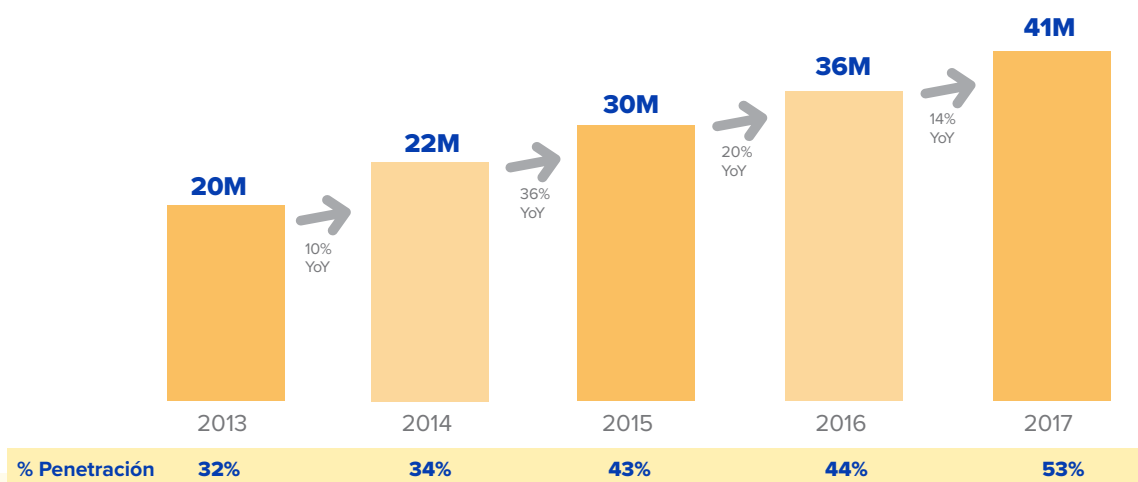
USD 22,193

millones, lo que representa un

8.3% del PIB regional.

Por otro lado, la juventud de la subregión cuenta hoy con más destrezas para la sociedad de la comunicación y con capacidades mayores a las de los adultos, tales como más años de escolaridad, mayor fluidez en la convergencia digital y un uso más familiarizado con la comunicación interactiva a distancia. Como se puede apreciar en la figura 6, todos los días 41 millones de usuarios se conectan a Internet en Centroamérica y el Caribe, lo que impulsa un crecimiento digital, tomando en cuenta que el 63% de la población está integrada por nativos digitales⁵⁰. En la figura 7 se puede observar como en la misma región existan diferencias substanciales en el nivel de penetración internet considerando el 86% de Costa Rica y el 36% de Honduras. En este contexto, resulta retador apostar al cierre de brechas con dos medidas complementarias como estrategias de asociatividad y el acceso a plataformas adecuadas de TIC.

Figura 6 | Número de usuarios de internet en Centroamérica y el Caribe.

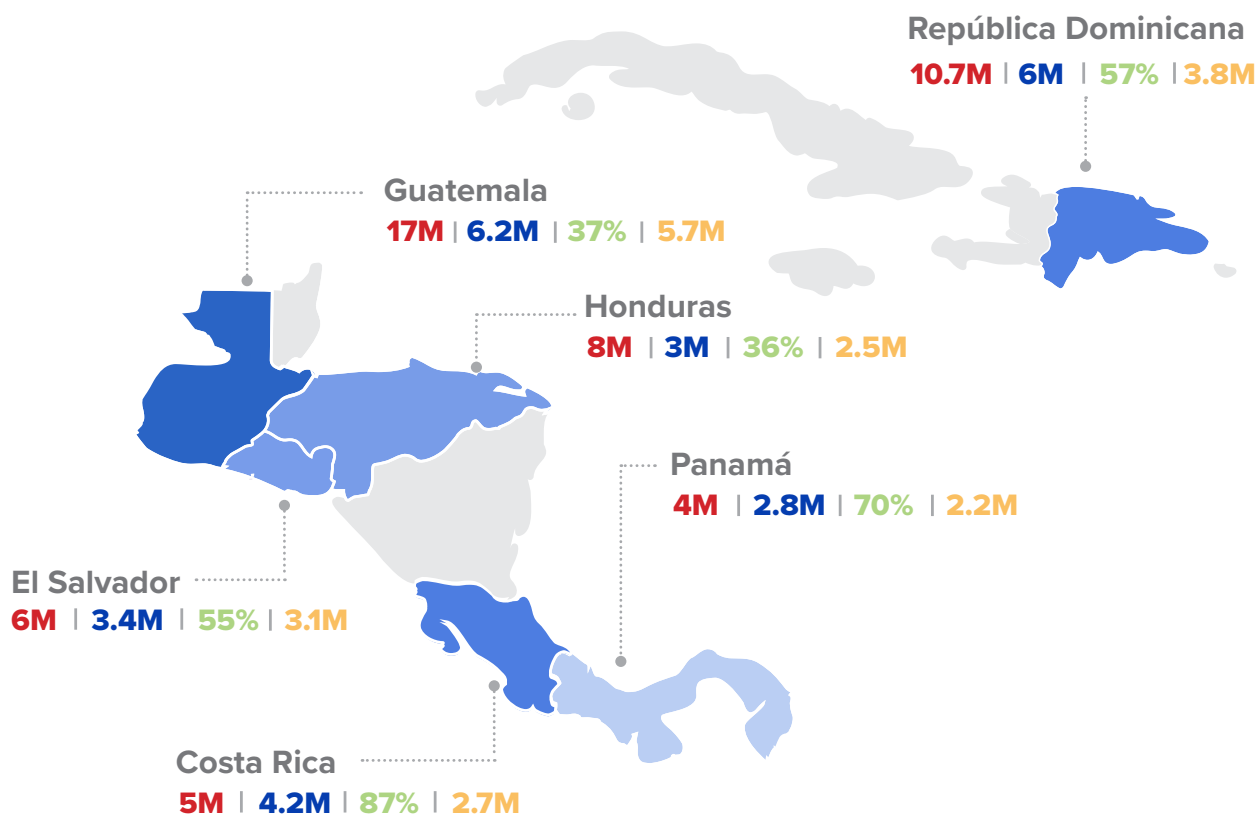
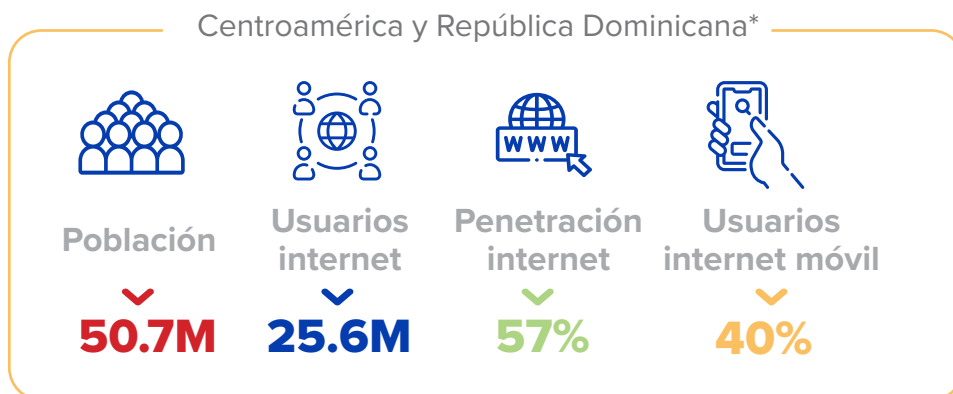


Fuente: Google 2017 – Centroamérica y el Caribe: un Oasis de oportunidades en el mundo digital



© PNUD El Salvador / Mauricio Martínez

Figura 7 | Nivel de penetración Internet y usuarios Internet en la subregión objeto del estudio en Centroamérica y República Dominicana.



Fuente: Google 2017 – Centroamérica y el Caribe: un Oasis de oportunidades en el mundo digital

* Los datos reportados en el gráfico hacen únicamente referencia a los países de la subregión, objeto del presente estudio.

Respecto al tema educación, en todos los países se hicieron grandes avances en la educación primaria, en la permanencia y en el cumplimiento del ciclo de educación secundaria, pero las tasas relativas a la educación superior siguen bajas, limitando el acceso a mejores oportunidades laborales en el futuro para las nuevas generaciones⁵¹.

Respecto al tema de la violencia, a Centroamérica pertenecen 5 de los 11 países en América Latina y el Caribe con una tasa de homicidios superior a los 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes^x. Las personas jóvenes, principalmente los varones, son una de las principales víctimas de dichos homicidios. El total de homicidios en la subregión registra una disminución de 33% en los primeros seis meses de 2020, en comparación al mismo período de 2019. Datos de la ONU revelan que en los países del Norte de Centroamérica se registró el 11% de los homicidios de la región de América Latina y el Caribe, siendo la mitad de las víctimas jóvenes entre 15 y 29 años y las armas de fuego las más utilizadas (8 de cada 10 casos)⁵². A partir de 2019, todos los países en análisis registraron una baja de la violencia y de la tasa de homicidios. Las medidas de confinamiento adoptadas a causa de la pandemia han contribuido seguramente a esta reducción. Sin embargo, en los países del Norte de Centroamérica se siguen registrando los índices de violencia más altos de la región de América Latina y el Caribe⁵³. Ver cuadro 2.

A esta tendencia positiva de la violencia en general, no corresponde una igual tendencia de la violencia doméstica o intrafamiliar. En la subregión, ante del inicio de la pandemia de la COVID-19, al menos 8 de cada 10 víctimas que habían denunciado este delito eran mujeres⁵⁴, desde el inicio de la emergencia se observó un aumento de los casos, con el incremento en las llamadas a los números de atención a la violencia de género y un número mayor de personas pidiendo acceso a refugios u otros servicios de apoyo⁵⁵.

x Para más detalle sobre migrantes y seguridad ciudadana, ver PNUD (2021). Cohesión social con enfoque ODS16+ en Centroamérica y la República Dominicana. Bases para su medición en el contexto subregional.



© PNUD Guatemala / Caroline Trutmann

CUADRO 2

La violencia como obstáculo a la inclusión económica en los países del Norte de Centroamérica

El Salvador, Guatemala y Honduras constituyen los países del Norte de Centroamérica y su estructura sociopolítica y económica está fuertemente influenciada por el fenómeno de la violencia. De hecho, el fin de los conflictos armados de los años 90 no ha correspondido al fin de la violencia. En estos tres países, muchas personas jóvenes no cuentan con adecuadas oportunidades, debido, entre otros motivos, a que no se les ha garantizado un entorno seguro ni se ha promovido entre ellas el despliegue de las capacidades necesarias para garantizar su pleno desarrollo (InfoSegura 2020).

Como se podrá revisar más detalladamente en el apartado dedicado a cada país, del total de personas jóvenes que residen en el norte de Centroamérica, solo un 13% logrará ingresar a la educación superior, y 9 de cada 10 terminarán siendo absorbidas por un trabajo precario. El ámbito laboral no es únicamente caracterizado por la precariedad y la informalidad: el 14.3% de las personas jóvenes que trabajan fueron víctimas de violencia laboral⁵⁶.

En estas áreas golpeadas por la violencia, se crea un vórtice que se autoalimenta. De hecho, se trata generalmente de zonas geográficas donde existe una baja institucionalidad y una comunidad ausente, a lo que se suma la ausencia de oportunidades desde el punto de vista educativo y laboral. En estos contextos, hay que evitar que la posibilidad de unirse a grupos criminales organizados sea considerada como una oportunidad para la respuesta a necesidades urgentes.

Para detener y mitigar el fenómeno de la violencia, es necesario, por lo tanto, impulsar un sistema que genere oportunidades para las personas jóvenes en términos de:

- ✓ Construir instituciones educativas incluyentes, participativas, estimulantes y capaces de promover una cultura de paz;
- ✓ Construir sociedades incluyentes que permitan a las personas jóvenes contar con espacios de encuentro, diálogos y donde puedan expresar sus ideas;
- ✓ Promover un proceso de descentralización para que las instancias gubernamentales sean más cercanas a los ciudadanos y entiendan sus dificultades;
- ✓ Apoyar a las familias para que sean contextos de protección y de acompañamiento en el crecimiento de las personas jóvenes, construyendo una cultura que resalte la importancia de la educación y reduciendo el riesgo de la inserción en el mercado laboral precario;
- ✓ Implementar acciones que mitiguen el abandono escolar por discriminación de género.

Fuente: PNUD, InfoSegura (2020) – Una mirada a las juventudes expuestas a violencia en el Norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana

2.3 DESIGUALDADES SOCIALES CON UNA MIRADA ESPECIAL A LAS PERSONAS JÓVENES

A pesar de los avances producidos, persisten en la región brechas estructurales que afectan particularmente a las mujeres, las personas jóvenes, así como a las personas indígenas y afrodescendientes. La desigualdad social es un elemento intrínseco y estructural de la región de América Latina y Caribe, incluyendo los países de la subregión considerada, y ha creado grupos que históricamente no tienen acceso a las mismas oportunidades que el resto de la población y generado barreras que se perpetúan de una generación a otra.

El concepto de desigualdad abarca los tres componentes del desarrollo: social en términos de procesos de integración, de expectativas sociales y de ejercicio de los derechos; económico en términos de distribución de los ingresos monetarios y de la propiedad de activos; y ambiental en términos de acceso a los recursos naturales, adaptación y efectos directos del cambio climático en las vidas de cada persona.⁵⁷ El tema de la desigualdad ha sido siempre un elemento fundamental para las Naciones Unidas desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 1948, que en el art. 2 indica que “todas las personas tienen iguales derechos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política”. Es importante destacar este elemento porque, en el análisis de la desigualdad, se identifican claros patrones de exclusión de ciertos grupos por razones de: a) género (mujeres); b) ciclo de vida (infancia y juventud); c) étnicas y raciales (pueblos indígenas y afrodescendientes); d) territoriales (áreas rurales).

Se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en **12.5%** y la tasa de pobreza alcanzó el **33.7%** de la población.

Entre 2002 y 2014, las tasas de pobreza y pobreza extrema se redujeron considerablemente en la región: la primera bajó del 44.5% al 27.8%, y la segunda se redujo del 11.2% al 7.8⁵⁸ como resultado de políticas implementadas por los países dirigidas al mejoramiento de las condiciones del ámbito social, productivo y del mercado del trabajo. A pesar de estas acciones, la tendencia positiva cambió a partir del 2015, con un estancamiento que terminó con un nuevo incremento tanto de la tasa de pobreza como de pobreza extrema. Esta situación se vio empeorada, a partir del 2020, por el impacto causado por la COVID-19: se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12.5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33.7% de la población. Ello supone que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019⁵⁹. Paralelamente a la reducción de la pobreza, se ha registrado una reducción de la desigualdad, especialmente en términos de ingresos, que se detuvo a partir del 2014.

En la presente sección, se procederá con el análisis del componente económico en función de la cohesión social en términos de ingreso y trabajo, las repercusiones en los grupos más vulnerables^{xi}, especialmente mujeres, jóvenes y poblaciones indígenas, y los avances logrados hasta la llegada de la COVID – 19, que lleva el riesgo de socavarlos fuertemente.

xi En un análisis enfocado en la inclusión económica y la cohesión social en la subregión, uno de los grupos a alta vulnerabilidad es representado por las personas refugiadas, los desplazados internos y los migrantes que requieren esfuerzos por parte de los gobiernos y cooperación de la comunidad internacional para enfrentar los desafíos y ofrecer beneficios tanto a las personas en situación de movilidad humana como a las comunidades de acogida, enfocándose más en los beneficios que la migración aporta tanto a los países de origen como de destino, que en las inquietudes que la temática genera. Para más detalle sobre migrantes y seguridad ciudadana, ver PNUD (2021). Cohesión social con enfoque ODS16+ en Centroamérica y la República Dominicana. Bases para su medición en el contexto subregional. Para más detalle sobre desplazamiento por causas socioambientales, ver PNUD (2021). Cohesión socioambiental en Centroamérica y la República Dominicana..



Los elementos de ingreso y trabajo están muy interrelacionados: la falta de oportunidades por parte de ciertos grupos poblacionales (jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas, personas en situación de movilidad humana) para acceder a empleos de calidad limita los ingresos de los hogares, imposibilitándolos a satisfacer sus necesidades, más allá de las primarias. La estructura productiva de América Latina y el Caribe está caracterizada por una alta concentración de empleos en sectores de baja productividad con altos niveles de informalidad, baja retribución y escasos o nulos mecanismos de producción que requieren, de entrada, bajos conocimientos técnicos. Analizando esta tipología de empleos, destaca la alta concentración de los pueblos indígenas (la tasa de informalidad entre la población indígena es del 82.6%, muy por encima de la estimada para la población total, entorno al 51%⁶⁰). En un análisis más detallado y aplicando una perspectiva de género, la tasa de informalidad entre las mujeres indígenas es más elevada, representando el 85.1%, frente al 80.9% de los hombres indígenas⁶¹. Esta estructura económica tiene importantes repercusiones también en otros ámbitos como la educación y la salud, creando vórtices de dependencia⁶².

La tasa de informalidad entre las mujeres indígenas es aún más elevada, representando el **85.1%**.

Los pueblos indígenas corresponden al 14.28% de la población de la subregión⁶³. Este número tiende a ser subestimado, ya que solo recientemente los censos y las encuestas de hogares identifican a estas poblaciones, además es necesario tener en consideración que los resultados se basan en una autoproclamación de los mismos ciudadanos. Estos avances se han dado gracias a las movilizaciones de las organizaciones indígenas y a su labor de incidencia a nivel nacional y regional. Por lo tanto, la primera forma de exclusión sufrida por los indígenas era en términos de estadísticas y disponibilidad de información que no reflejaban la realidad, con consecuentes efectos en el diseño de políticas públicas que no respondían a sus necesidades. La brecha entre población indígena y no indígena no es únicamente

en términos monetarios o de concentración de la tasa de pobreza, sino también de acceso a las oportunidades y de baja participación en los espacios de toma de decisiones, a ser forzosamente desplazados de sus lugares de origen, alejándolos de recursos naturales que, mayoritariamente, representan sus medios de vida. Los factores que inciden en la persistencia de la brecha pueden ser de origen diferente y múltiples, entre los cuales se destacan la opresión histórica, la dificultad a acceder a una educación de calidad por vivir en áreas rurales y remotas, la escasez de infraestructura y de bienes de capital físico, la mayor exposición a riesgos, entre otros. Aunque las causas y el origen de estas brechas pueden parecer diferentes a aquellas de las personas jóvenes (otra categoría a alta vulnerabilidad que a continuación se estará analizando), la respuesta a nivel regional y por parte de los países tendría que ser común e integral, donde la educación desde la primera infancia y la lucha a la discriminación juegan un papel clave.

Otra categoría clave a ser analizada es la juventud, una etapa fundamental en la vida de cada persona, siendo una fase crucial para sentar las bases para su futuro, en particular en términos de educación y trabajo. En la subregión, las personas jóvenes (15 – 24 años) tienen un peso demográfico importante, igual al 18.71%⁶⁴, comparado al 10.4% de los países europeos⁶⁵, transitando de consecuencia un periodo de bono demográfico⁶⁶, que representa una gran oportunidad para el desarrollo. La coyuntura, generada por un mayor porcentaje de población en edad productiva de la en situación de dependencia (niños y personas mayores), es favorable si se traduce en oportunidades para esta población, a través de inversiones en capital humano, en especial en educación de calidad y empleo, por medio de políticas públicas focalizadas y de un mayor y más eficiente gasto público. A pesar de esta situación, las personas jóvenes son frecuentemente invisibles en las políticas de los gobiernos y, si implicados, no están considerados como agentes de cambio y promotores de desarrollo en los cuales invertir, sino como grupos vulnerables a proteger.



La vida laboral de las personas jóvenes de la región está marcada por desempleo e informalidad. La tasa de desempleo urbano entre las personas jóvenes latinoamericanas y caribeñas entre 15 y 24 años llegó al 18%⁶⁷, una proporción que triplica la tasa de los adultos y es más del doble que la tasa general de desempleo promedio en la región. En números absolutos, son 10 millones las personas jóvenes de la región que buscan empleo sin conseguirlo⁶⁸. La dificultad de encontrar un empleo digno y coherente con sus capacidades lleva a las personas jóvenes a aceptar a menudo empleos en la economía informal, caracterizados por baja protección social, salarios y seguridad.

En este marco, es importante resaltar el grupo de las personas jóvenes identificados como NINI (ni estudian ni trabajan), que representan el 22.4% del total de las personas jóvenes de la región de América Latina y el Caribe, tasa que ha tenido un general incremento a partir del año 2000⁶⁹. Se trata de un grupo muy estigmatizado por parte de la sociedad respondiendo al imaginario de jóvenes hombres en situaciones de vagancia y delincuencia cuando, en la realidad, las mujeres son las más afectadas bajo esta categoría (el número de las mujeres dobla al de los hombres, con casos como el de Guatemala donde la diferencia está más acentuada), por la dificultad a acceder al mercado del trabajo por el peso de las tareas domésticas y el cuidado de los niños, trabajos no considerados como tales al no ser remunerados⁷⁰.

Esta situación se ha acentuado con el impacto que tuvo y tendrá la COVID-19 en la economía de la subregión, afectando particularmente a los empleos temporales e informales y a los sectores donde se observa mayor concentración de empleo juvenil, como en el caso del sector turismo.

La educación de calidad representa una de las condiciones preliminares para que las personas jóvenes puedan desarrollar sus habilidades y conocimientos, formándose como personas y preparándose al mercado de trabajo, sea esto en términos de empleo o de desarrollo de emprendimientos. La finalización de la educación secundaria es considerada el nivel mínimo de educación para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y para ampliar las posibilidades de acceso al trabajo decente. Entre las personas jóvenes de 20 a 24 años, esta tasa aumentó del 37% al 58% entre 1997 y 2013, pero aún persisten significativas diferencias causadas por los diferentes niveles de riqueza de las familias. De hecho, en la región de América Latina y el Caribe, el 20% más rico tiene una probabilidad cinco veces mayor que el 20% más pobre de terminar el segundo ciclo de la secundaria⁷¹.

En el caso de la subregión, al tratarse de países que, por su historia, están afectados por altas tasas de violencia y crimen, con fuerte presencia e influencia de grupos criminales organizados como las maras y las pandillas, el riesgo para las personas jóvenes es especialmente alto. Una situación de mayor vulnerabilidad social y económica puede llevar a las personas jóvenes a ver las pandillas y el crimen como una opción de ingreso económico, involucrándose directamente.

En cualquier ciudad de América Latina, las personas jóvenes entre 15-29 años están desproporcionadamente representados entre las víctimas y los condenados por delincuencia. De hecho, en la última década, las tasas de encarcelamiento en ALC aumentaron en más de un 120%, comparado a un 24% el resto del mundo. La edad a la que suelen recibir la primera condena es a los 22 años.



La tasa de desempleo urbano entre las personas jóvenes latinoamericanas y caribeñas entre 15 y 24 años llegó a **18%**.



La finalización de la educación secundaria es considerada el nivel mínimo de educación para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza y para ampliar las posibilidades de acceso al trabajo decente.

Los principales delitos de los que se acusa a los adolescentes privados de libertad son asesinato, portación ilegal de armas de fuego, homicidio, extorsión, violación; la mayoría de las mujeres está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Cuando se examina en detalle la delincuencia juvenil se descubren patrones comunes: violencia intrafamiliar, abuso de drogas y alcohol, barrios violentos, falta de oportunidades educativas o laborales⁷². Los jóvenes y las mujeres son, en proporción, los grupos poblacionales más afectados.

La importancia del Estado a través de su actividad reguladora, compensadora y de protección social, es fundamental para garantizar un ambiente propicio al crecimiento personal al interior de familias y comunidades sanas con valores positivos definidos. Este marco, permitirá mantener a las personas jóvenes al abrigo de las tentaciones representadas por la participación en actividades ilícitas que, si bien proporcionan ganancias fáciles e inmediatas, pueden llevar a un ingreso temprano en las cárceles y marcar el punto de partida por un viaje sin vuelta atrás en el mundo criminal.

Para reducir el número de adolescentes que se involucran en actos delictivos por primera vez, es necesario mitigar el impacto del delito en su entorno social, incrementar las oportunidades de progreso, facilitar la rehabilitación y contribuir a garantizar que el sistema de justicia sea basado en los derechos de la adolescencia y juventud⁷³.

Para promover la cohesión social y la inclusión económica de estos grupos en condición de vulnerabilidad, resulta fundamental invertir en términos de instrucción, para la mejora de la calidad de la educación, la reducción de la deserción escolar, el cumplimiento del ciclo de educación secundaria y una mayor coherencia entre las habilidades desarrolladas en cursos de especialización o de carreras profesionales y la demanda del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, en términos de trabajo, es necesario actuar para la creación de un sistema de intermediación laboral y apoyo al emprendimiento. En particular es importante focalizar acciones hacia las personas jóvenes, a través de incubadoras de empresas, la formalización de unidades económicas, la recalificación de la mano de obra, las certificaciones de las competencias, y el acceso a micro-crédito; y, para las mujeres jóvenes con hijos, la provisión de servicios de guarderías y otras actividades fuera del horario escolar, para favorecer su permanencia en el mercado laboral.

Perpetuar matrices de desigualdad significa obstaculizar la creación de un desarrollo sólido y sostenible, entendido como libre de pobreza, con un amplio ejercicio de los derechos y una gobernabilidad activa y democrática para todos y todas.





2.4 EL ROL DEL SECTOR PRIVADO: ACTORES, RETOS Y OPORTUNIDADES

En un proceso de construcción de una sociedad inclusiva, capaz de sostener un crecimiento que mejore la vida y ofrezca oportunidad para todas las personas sin ninguna distinción de raza, género o edad, el sector privado juega un papel fundamental, pudiendo dar una contribución positiva en términos de: respecto de los derechos humanos, promoción de un empleo digno y formal, reducción del impacto en el ambiente y la adopción de prácticas anti-corrupción. Tal y como indica en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, se trata de una relación que beneficia a las dos partes (*win-win*): por un lado, las empresas, las cuales tienen interés en trabajar en economías estables con empleados sanos, motivados y con un adecuado nivel de capacidades y competencias, y por el otro lado, las sociedades que se ven beneficiadas por una mejor conducta de las empresas y por mayores oportunidades.

Si la alineación de los intereses y una mayor implicación del sector privado, representaba una prioridad antes de la COVID-19, en un contexto de contracción económica como el que se está viviendo, urge dar una respuesta por parte de los países, a través de sus gobiernos, para proteger los derechos humanos de las personas, protegiendo los puestos de trabajo y garantizando que el requerimiento de mayor flexibilización del trabajo no sea sinónimo de lesión de los derechos a costa de las personas más vulnerables, que normalmente corresponde con el sector informal. Según las estimaciones publicadas por la OIT en su informe anual para la región, la COVID-19 ha dejado alrededor de 23 millones de personas de América Latina y el Caribe sin empleo y ha causado una reducción en la tasa de participación proporcionalmente más importante entre las mujeres que entre los hombres (-10.4% entre las mujeres y -7.4% entre los hombres)⁷⁴.

El punto de partida para la implicación del sector privado en la inclusión económica, la protección de los derechos humanos y más generalmente en la reducción de las desigualdades, está representado por la ruptura del paradigma de la responsabilidad social de las empresas, que puede ser leída como una actividad voluntaria y accesorio, y ser sustituido por el concepto de corresponsabilidad. La corresponsabilidad es entre el Estado, que, al unirse a los tratados internacionales sobre derechos humanos, asume obligaciones respecto a la protección y el cumplimiento de los derechos humanos, y el sector privado.

Como señalado en el documento “Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en Programas de Desarrollo” del PNUD⁷⁵, los Estados deben respetar los derechos humanos y garantizar que terceros no interfieran en los mismos, entre los cuales el sector privado, a través la promulgación de leyes y definición de procedimientos (proteger), deben facilitar la realización de los derechos humanos garantizando las oportunidades por cada persona (cumplir). Al mismo tiempo, las empresas juegan el papel de promover y proteger los derechos humanos de manera conjunta en apoyo al gobierno, representando un aliado estratégico. En este contexto, la acción directa del sector privado, a través del desarrollo de actividades de Responsabilidad Social de Empresa, en términos de generación de nuevos negocios incluyentes y reducción de la huella ambiental, podrá contribuir positivamente al logro de la Agenda 2030.

Aunque en este esfuerzo, el llamado a la atención está destinado generalmente a las grandes empresas nacionales y transnacionales, se trata de un mensaje que va más allá del tamaño de la empresa, requiriendo un esfuerzo también de la mediana y pequeña empresa,

en particular en la adopción de conductas transparentes y libres de corrupción. Si se analiza el caso del empleo informal y de la falta de respeto de los derechos laborales, hay casos de micro y pequeñas empresas que promueven mecanismos de informalidad y producen trabajo sumergido.

La incorporación e integración de prácticas y protocolos para tener una conducta diligente por parte del sector privado no puede ser dejada a una acción voluntaria de cada empresa, sino debe ser el fruto de obligaciones establecidas por vínculos estatales y puestas en marcha gracias a la aplicación de incentivos que permitan generar el cambio. En ese contexto, es necesaria la activación y/o fortalecimiento en cada país de mecanismos de diálogo entre las partes que favorezcan la articulación y alianzas estratégicas público-privadas y la construcción de un pacto social conjunto. La creación de mesas o plataformas de diálogo deben ser fuentes de acciones concretas.

Según el análisis llevado a cabo en cada país de la subregión, no existe una clara política que promueva la Responsabilidad Social de Empresa y que establezca incentivos que demuestren un compromiso conjunto hacia la sociedad en la cual operan, más allá de mecanismos de compensación.

CUADRO 3

Buenas prácticas promovidas por el PNUD sobre Sector privado y DDHH

- 1. Autoevaluación Rápida para Empresas:** es una herramienta desarrollada por el PNUD, como guía para las empresas, de cualquier tamaño, a considerar y gestionar los impactos de sus operaciones en los derechos humanos. La idea central de esta herramienta es generar una oportunidad para fomentar un compromiso público y privado en la protección de los derechos humanos, para aquellas empresas que no tienen una clara política en el tema. Uno de los países que está aplicando y promoviendo esta herramienta a nivel nacional es la República Dominicana.
- 2. Sello de Igualdad de Género para Empresas Públicas y Privadas (SIG):** es un programa liderado por el PNUD que comenzó en América Latina en el año 2009. Involucra al sector privado con el propósito de poner en marcha estándares de excelencia para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo empresarial. El SIG cuenta con la adhesión de 14 países de América Latina y el Caribe, de los cuales Costa Rica, El Salvador y República Dominicana y más de 600 empresas, con más de 1.900 sucursales y unidades de negocios certificadas. Esto se traduce en impactos positivos para más de 1.5 millones de trabajadores⁷⁶.
- 3. Curso sobre Derechos Humanos y Sector Privado:** el curso, organizado por el Centro Regional de PNUD para América Latina y el Caribe y cuya implementación está prevista a partir de principios de 2022, tiene el objetivo de aumentar los conocimientos y las capacidades de empresarios/as y trabajadores/as en materia de derechos humanos y con un enfoque integral de género. El curso permitirá crear espacios de intercambio, discusiones y aprendizaje entre los participantes, analizando los elementos que están al origen de las desigualdades de género y de la conflictividad generada por afectaciones ambientales vividas por las comunidades donde las empresas operan.

Al tratarse de iniciativas de adhesión voluntaria por parte de las empresas, el riesgo recae en involucrar a aquellos sectores y actores que, por diferentes razones, incluido éticas, ya implementan una conducta sensible al respeto de los derechos humanos, la promoción del empleo digno y la minimización del impacto en el medioambiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD - <https://www.selloigualdadgenero.org/programa/> y de las entrevistas realizadas por los autores

Los desafíos siguen siendo numerosos, y el reto es todavía mayor por la situación de contracción económica, generada por la COVID-19. Resulta entonces esencial partir de las buenas prácticas existentes en la región y a nivel internacional, para formular soluciones innovadoras en las que los gobiernos empujen al sector privado a integrar conductas diligentes en los tres componentes antes mencionados (derechos humanos, ambiente y transparencia) y comunicar cómo aplicar estas soluciones, siempre tomando en cuenta que no existen reglas homogéneas o un único recorrido a tomar. En este contexto, el rol que el PNUD ha asumido se centra en abrir un diálogo y un proceso de sensibilización con los gobiernos, invitando a las empresas a adoptar las prácticas existentes mencionadas y resaltando los beneficios en términos de productividad y de imagen empresarial.



2.5 EL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA ECONOMÍA LOCAL: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

La pandemia de la COVID-19 tendrá implicaciones importantes para la subregión. La magnitud del impacto dependerá de la duración de la pandemia, su propagación y las medidas de prevención y de respuesta de los países para contener y amortiguar el choque. Se proyecta que el PIB real se contraiga del 8.1% en 2020, y que se recupere moderadamente en 2021 dada la persistente propagación del virus, las consiguientes medidas de distanciamiento social y las secuelas a más largo plazo⁷⁷. La CEPAL estima que, antes de finales de 2020, podrían cerrar 2.7 millones de empresas, equivalentes al 19% de todas las firmas de la región de América Latina y el Caribe. En el caso de las microempresas, este porcentaje podría llegar al 21%⁷⁸.

El fuerte impacto registrado por las microempresas se debe, en primer lugar, a su pronunciada especialización en el sector del comercio. En 2016, aproximadamente el 42%⁷⁹ de las microempresas de América Latina y el Caribe operaban en este rubro, que ha sido uno de los más perjudicado por la pandemia.

La CEPAL estima que antes de finales de 2020 podrían cerrar **2.7 millones** de empresas, equivalentes al **19%** de todas las firmas de la región de América Latina y el Caribe.

Un segundo factor que contribuye a explicar este resultado se relaciona con la baja productividad laboral de las microempresas de la región de América Latina y el Caribe que, en promedio, alcanza tan sólo el 6%⁸⁰ de la productividad laboral de las grandes empresas. En términos de empleo, esto generaría la destrucción de más de 8,5 millones de puestos de trabajo: el 8.1% del total del empleo formal en el sector empresarial y más de un quinto de los puestos de trabajo generados por las microempresas⁸¹. Esto dependerá de la estructura de sus economías y su exposición y vulnerabilidad a canales de transmisión globales; por ejemplo, su apertura comercial e integración a cadenas de valor globales, contribución del sector turismo, dependencia de materias primas, entre otros.

Así mismo, la resistencia a los choques externos en la subregión dependerá del grado de estabilidad macroeconómica de los países y de la capacidad de implementar medidas que generen una rápida recuperación una vez reinstauradas las condiciones sanitarias. La disminución de las exportaciones e importaciones para la subregión serán el efecto de un deterioro a nivel mundial. Tal como indica CEPAL, se prevé una disminución en el valor de los flujos comerciales como consecuencia de la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de cada país⁸². La potencial contracción en el crédito al sector privado dependerá del grado de flexibilización en las condiciones de crédito con los sectores económicos más vulnerables ante la crisis sanitaria. Por lo que concierne las acciones específicas destinadas al apoyo de las MIPYME, es importante que varias de estas medidas se concentren en proteger su supervivencia, de acuerdo con el aporte de éstas al PIB y al empleo. Por lo tanto, inyecciones de liquidez, moratoria fiscal o cuotas de protección social, por ejemplo, deberían tener un componente focalizado para este tipo de empresas. Se destaca también la necesidad de reforzar la resiliencia de las MIPYME para soportar futuras crisis, la necesidad de intensificar los esfuerzos para su digitalización, el aumento de la apertura y la inclusividad de las cadenas de suministro y la utilización de la crisis para velar por que las empresas sean más sostenibles e inocuas para el clima.

Dentro del sector servicios, en la región de América Latina y el Caribe destaca el turismo, el cual tiene una contribución directa en el PIB de entre 3 y 15% dependiendo del país y se estima que su contribución total vaya desde el 8 al 40% del PIB⁸³. El turismo se estima que será un canal clave para transmitir la desaceleración del impulso económico, principalmente debido a la implementación de políticas relacionadas al cierre de fronteras, cierre temporal de las actividades de tour operadoras y aerolíneas. Al respecto, la Organización Mundial de Turismo estima que la llegada de turistas internacionales podría caer entre -20 y -30%, siendo ésta una de las actividades sobre la que podría esperarse un efecto rezagado posterior al fin de la crisis sanitaria. Cabe resaltar que los ingresos que genera este sector representan alrededor del 20% del total de exportaciones de bienes y servicios de Centroamérica. Un desplome del turismo global afectaría especialmente a Belice donde el sector genera más del 40% del PIB⁸⁴, incluyendo su contribución indirecta. Éste es también un riesgo importante para República Dominicana, Panamá, Costa Rica y Honduras. Al tratarse de uno de los sectores más vulnerables, debería analizarse *ad hoc* y tener iniciativas específicas para su supervivencia entre las cuales podrían estar: líneas especiales de crédito, diferimientos tributarios y cotizaciones sociales específicas a hoteles, restaurantes y otras empresas del sector.



Una vez expuestas las consecuencias negativas inevitables generadas por la COVID-19, la situación generada por la pandemia representa también una oportunidad única para invertir las tendencias y construir un futuro mejor, más inclusivo y sostenible, a través intervenciones sociales y económicas con miras a promover el diálogo social, empoderar los gobiernos locales, aumentar el nivel de resiliencia de las sociedades, institucionalizar los sistemas de respuestas liderados por las comunidades y mejorar los marcos legales e institucionales. Mientras que los Estados tienen una obligación de controlar la pandemia, resulta necesario evitar la implementación de cualquier práctica de discriminación, represión o censura, dirigidas entre otros contra las mujeres y los defensores de los derechos humanos⁸⁵.

En el marco de la recuperación económica, los gobiernos tienen la oportunidad de identificar las mejores estrategias de intervención. Por ejemplo en la generación de empleo formal a través de un estímulo económico para las empresas en la contratación de mano de obra, asegurando una mayor seguridad y salud en el trabajo. También mediante el apoyo al aumento del empleo autónomo a través del fomento de microemprendimientos con apoyo especializado para mejorar su entorno de negocios, el acceso al crédito, el conocimiento del mercado, el acceso a la tecnología y la formalización. Es necesario también un mayor control de la inversión pública, que es una herramienta fundamental ante situaciones de contracción económica aplicando criterios de eficiencia y priorizando a los proyectos que tienen un alto potencial de generación de empleo, la promoción de una economía verde y descarbonizada⁸⁶.

Si la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible del 2012 (Río +20) ya había evidenciado la importancia de la economía verde, las empresas y los empleos como uno de los instrumentos para contribuir a la erradicación de la pobreza y el crecimiento económico sostenible, la pandemia de la COVID-19 ha mostrado que esta transición debe representar una prioridad a nivel global y, más en específico, para la subregión.

El turismo tiene una contribución directa en el PIB de entre **3 y 15%** dependiendo del país.



La transición hacia la economía verde implica la introducción de nuevas prácticas para la prevención de la contaminación, la gestión sostenible de los recursos naturales, la reducción de los desechos, la promoción de energía renovable que tiene el potencial de aportar innovación y, por ende, de atraer nuevas inversiones.

La promoción de los empleos verdes, tanto en los sectores tradicionales como en los emergentes, fomentarán una economía competitiva, con bajas emisiones de carbono, así como modalidades sostenibles de consumo y producción, y contribuirán a la lucha contra el cambio climático⁸⁷.

En las últimas décadas, los países de la subregión han invertido en la cuestión ambiental a través la creación de instituciones gubernamentales de rango ministerial para promover una política ambiental y una transición hacia una economía limpia, han introducido mecanismos de participación de la ciudadanía y limitación del derecho de propiedad por razones ambientales, se han regulado la explotación y la conservación de los recursos no renovables y, por último, han adherido a acuerdos multilaterales como el Protocolo de Montreal y de Kyoto y han adoptado tratados, como el Acuerdo de París de 2015. En este marco y con referencia a los países implicados por el presente estudio, es importante mencionar el esfuerzo de Costa Rica que, a través de su Plan de Descarbonización 2018 – 2050, pretende transformar su modelo económico hacia una completa descarbonización y limitar al máximo las emisiones a través de inversiones e incentivos en todos los sectores (agricultura, ganadería, industria, transporte de carga y público, etc.). El Plan es el resultado de un esfuerzo del gobierno central, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y Energía e implicando a todas las instituciones nacionales y estatales. Es importante mencionar también el esfuerzo del sector privado en República Dominicana, a través de la Asociación

de Industrias de la República Dominicana (AIRD) que, a través de fondos privados y de la cooperación internacional (BID y GIZ), está en proceso de transitar hacia un modelo de economía circular en algunos sectores productivos mediante una re-manufactura de los residuos plásticos. Sin embargo, los ministerios de ambiente de varios países siguen siendo débiles tanto a nivel político como a nivel de presupuesto, y su papel no es plenamente comprendido por otras autoridades gubernamentales, el sector privado y, en general, por la población.

La aparición de la COVID-19 ha enfatizado la relación entre las personas y la naturaleza y ha puesto en evidencia las necesidades ilimitadas de los seres humanos, pero también las capacidades limitadas del planeta. Reconocida esta relación, la recuperación debe ir más allá de responder únicamente a la emergencia promoviendo la resiliencia de las comunidades, incluido el cambio climático y el colapso de la biodiversidad. Para lograrlo, los gobiernos, los empleadores y empleadoras, y los trabajadores y trabajadoras, no son observadores pasivos sino más bien agentes del cambio capaces de desarrollar nuevas modalidades de trabajo que protejan el medio ambiente para las generaciones actuales y futuras, erradiquen la pobreza, y promuevan la justicia social fomentando empresas sostenibles y creando trabajo decente para todas las personas.

Por otro lado, la pandemia de la COVID-19 ha acelerado un proceso ya en rápida evolución, como es el de la digitalización, en todos los ámbitos desde el social al económico. La digitalización representa una gran oportunidad tanto para las MIPYME, para ser más competitivas en el mercado, transformando y automatizando algunos procesos, como para las personas jóvenes que tienen mayores competencias digitales. Si estas capacidades son oportunamente aprovechadas y potenciadas, podrán representar habilidades claves para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la inclusión económica de las personas jóvenes⁸⁸.

Figura 8 | Mapeo de problemas.

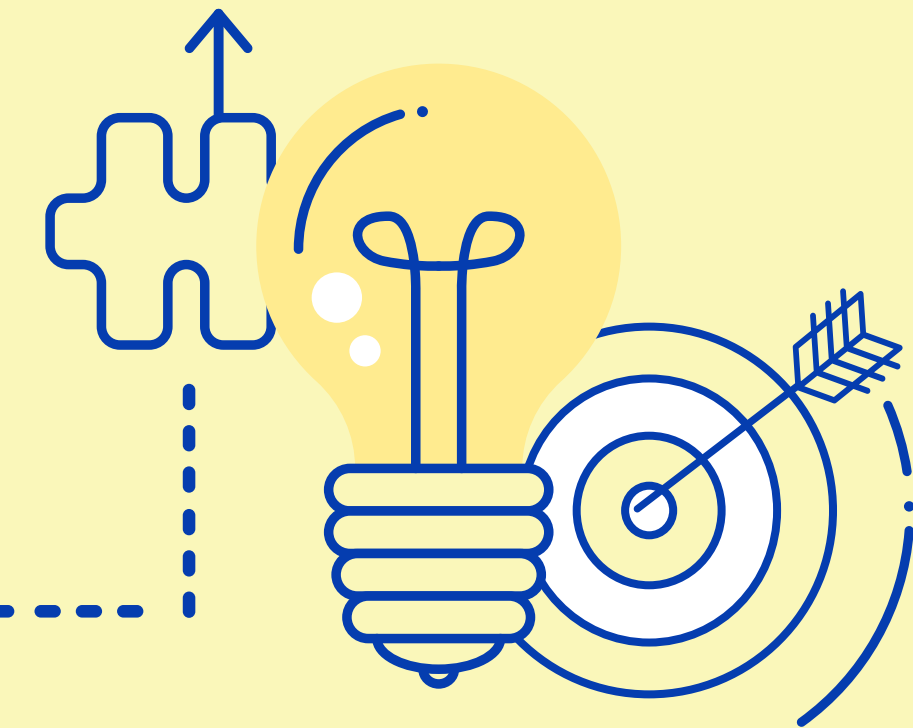


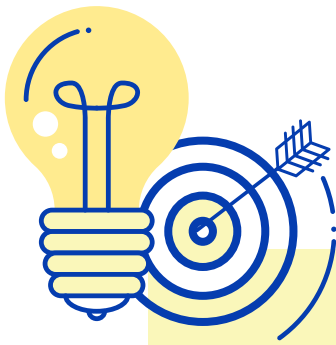
Fuente: Elaboración propia



3

UN ENFOQUE A NIVEL DE PAÍS





3. UN ENFOQUE A NIVEL DE PAÍS

El presente capítulo pretende ofrecer un análisis a nivel nacional, recogiendo las informaciones de cada país de la subregión examinada (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana), en materia de inclusión económica y cohesión social, con un enfoque especial en la situación de las personas jóvenes.

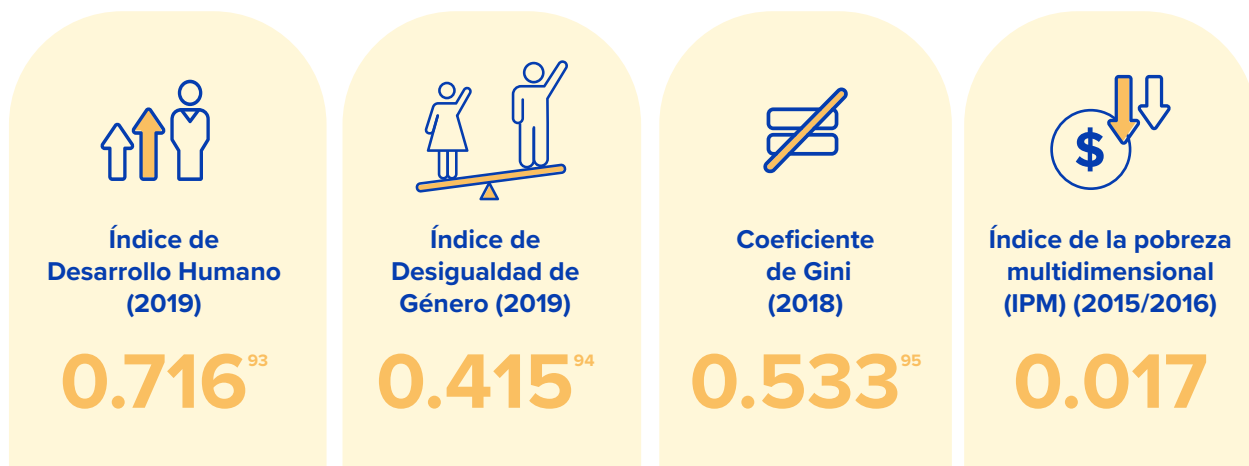
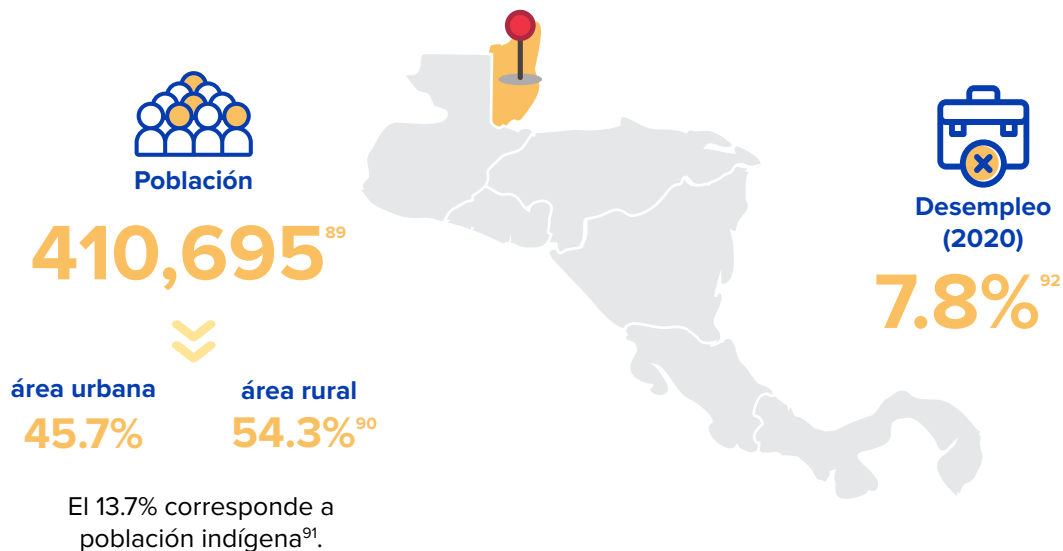
Los datos sistematizados en las presentes fichas son el resultado de una selección de las informaciones recogidas a través entrevistas bilaterales con los referentes temáticos de cada Oficina País del PNUD.

Cada caso nacional presenta los siguientes apartados: i) Situación general del país; ii) Sectores económicos principales; iii) Situaciones jóvenes (15 – 24 años); iv) Actores relevantes para programas de inclusión económica; v) Iniciativas en implementación/ buenas prácticas; vi) Principales desafíos; y, vii) Propuestas.

A través de estas informaciones se buscan identificar los esfuerzos de dichos países para avanzar en la inclusión económica, especialmente de las personas jóvenes, evidenciando aquellas iniciativas exitosas que pueden representar lecciones aprendidas y referencias para los demás países, según un esquema de cooperación horizontal y descentralizada entre los países de la región de América Latina y el Caribe.

BELICE

01 SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



Los datos de encuestas más recientes publicados sobre la estimación del IPM de Belice se refieren al 2015/2016. En Belice, el 4.3% de la población vive en situación de pobreza multidimensional y otro 8.4% está clasificado como vulnerable a la pobreza multidimensional, siendo el IPM 0.017⁹⁸.

A corto plazo, se espera que Belice pierda el 9.3% de los empleos formales y, si la contracción económica se prolonga, esta estimación podría elevarse a 25.6%. En relación con otras economías pequeñas de la región, se espera que Belice enfrente el mayor aumento del desempleo⁹⁹.



Las remesas representan
alrededor del

5% del PIB¹⁰⁰



Tasa de homicidios (2020)

24.3

por cada 100,000
habitantes¹⁰¹

02

COVID-19

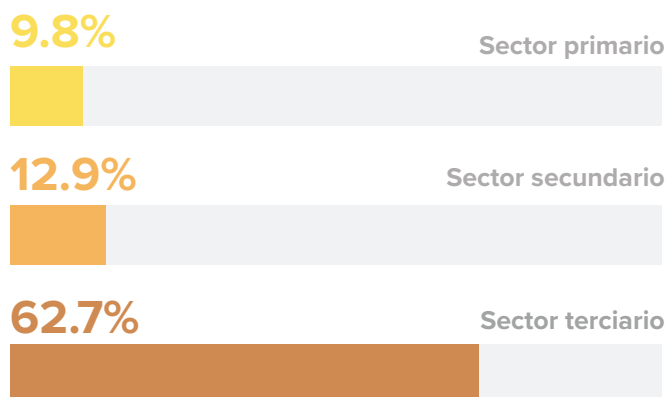
La red de seguridad financiada por el estado está compuesta principalmente por cinco programas:

- ✓ **Unemployment Relief Program**, que se lanzó en 2020 como transferencia monetaria temporal para personas desempleadas y trabajadoras que perdieron sus empleos e ingresos debido a la COVID-19. Entró en su segunda fase para diferentes categorías de trabajo, en particular del sector turístico. Están excluidas personas jóvenes por debajo de los 18 años y las personas que benefician de otros subsidios.
- ✓ **COVID-19 Cash Transfer Program BCCAT**, que empezó en octubre 2020 y que se dirige a los grupos de población vulnerable y será sujeto a criterios de evaluación más estrictos.
- ✓ **El Food Pantry**, cuyo objetivo es combatir la desnutrición proporcionando una canasta de alimentos semanal subsidiada.
- ✓ **Micro Small and Medium Enterprise (MSME) Support Program**, que otorga \$ 2.5 millones de subvenciones a microempresas de todo el país, con un límite de \$ 2.500 cada una, \$ 7 millones de subsidios salariales para promover la retención de empleados y empleadas y \$ 5 millones de préstamos blandos limitado a pequeñas y medianas empresas aprobadas para ayudar con el capital de trabajo en preparación para la reapertura y la aceleración de la producción.¹⁰²

03

SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país)



El sector terciario, en particular comercio, hoteles y restaurantes absorbe el 65% de la población ocupada, seguido por el sector primario (18%) y el secundario (17%)¹⁰³.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 19.9%
del total de la población del país

Las personas jóvenes (15 – 24 años) representan el 19.9% del total de la población del país¹⁰⁴.

Las mujeres jóvenes de Belice tienen difícil acceso a la participación en sus comunidades debido a obligaciones domésticas. Una de cada cinco niñas beliceñas menores de 15 años ya está casada o está en una unión. Para la mayoría de las niñas que viven en áreas rurales, el matrimonio o la convivencia con hombres mayores se considera una forma de salir de la pobreza. Esto exacerba el ciclo de pobreza intergeneracional, ya que estas uniones tempranas dan como resultado una maternidad precoz¹⁰⁵.

En Belice, una cuarta parte de los hombres jóvenes y casi la misma cantidad de mujeres jóvenes (23%) no tienen acceso a Internet o incluso a computadoras. Con demasiada frecuencia, son las personas adolescentes que viven en vecindarios violentos o las personas jóvenes vulnerables o con capacidades diferentes, las que quedan fuera de las iniciativas de desarrollo¹⁰⁶.



05 ACTORES RELEVANTES PARA PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

PÚBLICOS

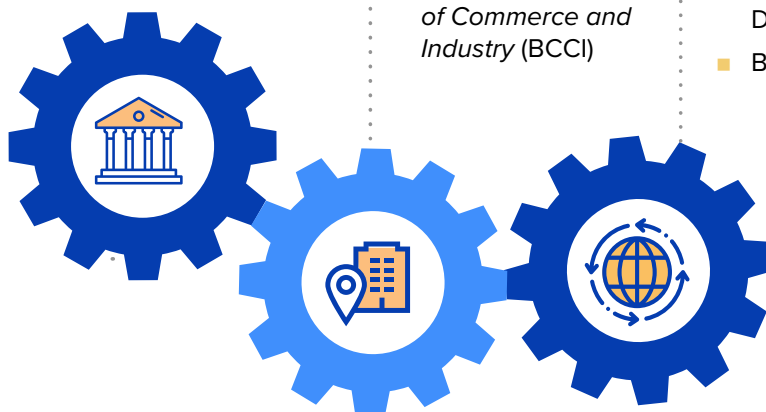
- Ministerio de Desarrollo Humano, Familias y Poblaciones Indígenas
- Ministerio de Finanzas, Desarrollo Económico e Inversión
- Agencia para el Desarrollo del Comercio e Inversión de Belice (BELTRADE)
- *Social Security Board*

PRIVADOS

- *Belize Chamber of Commerce and Industry (BCCI)*

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Banco Mundial



■ **Iniciativas de PNUD para la respuesta a la COVID-19:**

- ✓ Mapeo rápido para la identificación de posibles tiendas de alimentos y socios comerciales que puedan brindar servicio a las áreas rurales desatendidas de Belice. También se establecieron bancos de alimentos a nivel de distrito y se facilitaron suministros de higiene.
- ✓ Expansión del programa de transferencias de efectivo BOOST dirigido a mujeres solteras, a familias, y a otros grupos vulnerables privados de sus derechos por la crisis de la COVID-19.
- ✓ Se entregaron USD 79.000 del Programa de asistencia a agricultores financiado a través del Proyecto EnGenDER para asegurar la continuación de la producción en la granja y evitar posibles crisis de seguridad de alimentos.



- **Beltraide a través de su programa BelizeINVEST:** orientación y facilitación para el establecimiento de empresas, información sobre oportunidades de inversión, asistencia con reuniones virtuales Business to Business (B2B) con partes interesadas públicas y privadas.

- **Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia (CERC) del Banco Mundial:** apoyo al sector agrícola a través de transferencias de efectivo a pequeños agricultores y mujeres involucradas en la agricultura; fondos para la compra de insumos agrícolas elegibles; suministro de pequeños equipos agrícolas, equipos de protección y soporte técnico.





La alta tasa de deuda pública, que será empeorada por la necesidad de brindar apoyo por parte del Estado para mitigar los efectos de la COVID-19, a largo plazo podrá perjudicar el crecimiento económico y la estabilidad del país.

La alta tasa de criminalidad representa todavía un elemento que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos y que tiene profundas implicaciones en particular en las personas jóvenes.

Las brechas de género, que llevan a las jóvenes a identificar en el matrimonio la solución a su futuro, impiden la construcción de cohesión social y la autonomía económica de las mujeres.



PROPUESTAS



Combinar la formalización con un proceso de asistencia técnica (facilidad en los trámites, fortalecimiento técnico del empresario y de sus empleados, imagen comercial, certificados de producción, etc.) a las MIPYMES en el cual se evidencien las ventajas de este proceso, incluyendo la posibilidad de introducir incentivos monetarios, crediticios o de mejora del nivel productivo, puede representar un elemento de éxito.

Fortalecer los “*Youth Centers*”, a través de la profesionalización y especialización del personal de acompañamiento técnico, creados por el departamento de servicios a los jóvenes que proporcionan capacitaciones en Tecnología de Información y habilidades para la inserción en el mercado laboral y cuya implementación se ha revelado de gran eficacia.

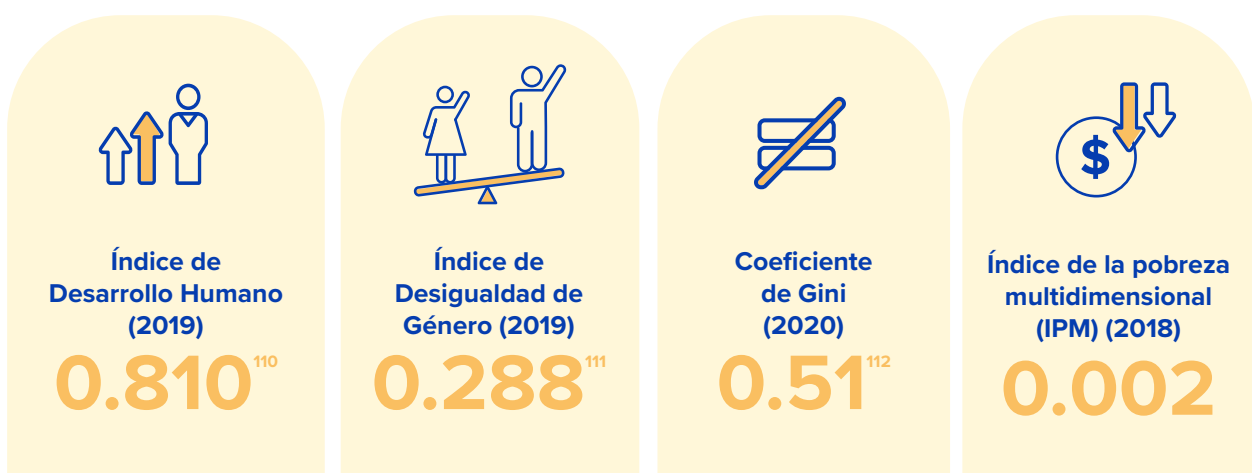
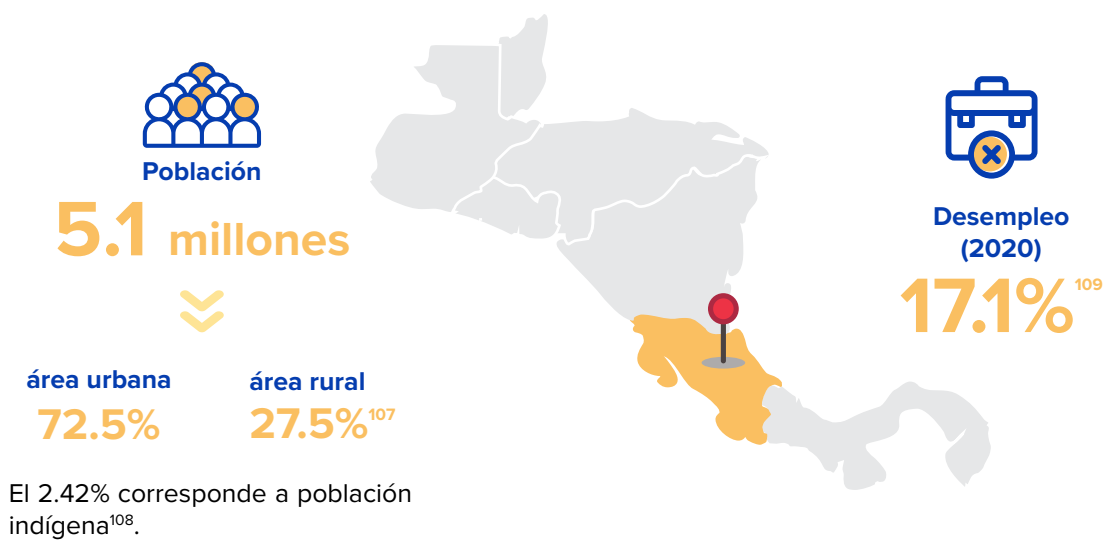


Para una mayor articulación en la cadena de valor del turismo, es necesario contar con un mapeo actualizado de los principales integrantes, involucrando a todos los eslabones, y promoviendo espacios de diálogo y la elaboración de una Agenda que contemple iniciativas de provecho para las empresas e incentivos para la integración.

Incorporar plenamente en las estrategias de desarrollo de Belice sus ventajas comparativas (recursos naturales para la generación de energías renovables, la agricultura y el ecoturismo; el bilingüismo que se traduce en una cercanía con los mercados estadounidense y latinoamericano, al ser parte del CARICOM y del SICA, su doble vertiente geográfica – comercial, etc.) para su aprovechamiento de manera sostenible y para un mejor impacto en el crecimiento económico del país. La economía digital requeriría que el Gobierno implemente políticas y legislaciones que fomenten la innovación, la adopción de tecnologías limpias y la eficiencia ambiental.

COSTA RICA

01 SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS




La diferencia entre hombres y mujeres respecto a los niveles de informalidad es del 5%, siendo más alta entre las mujeres. Esto es más preocupante considerando que las mujeres tienen una tasa de participación más baja en la PEA, lo cual implica que el denominador para estimar la tasa de informalidad es más bajo que para el de los hombres¹¹⁵.

La combinación de estabilidad política, contrato social y un crecimiento sostenido ha resultado en una de las tasas de pobreza más bajas de América Latina y el Caribe, donde la proporción de la población con ingresos inferiores a US\$5,5 por persona por día disminuyó ligeramente de 12.9 a 10.7 por ciento entre 2010 y 2016¹¹⁶.

La población que vive en condiciones de pobreza multidimensional es el 16.6%.¹¹⁷

Costa Rica transita a una economía verde, a una descarbonización, está modificando su matriz de generación eléctrica y persigue modificar la matriz energética para electrificar el transporte público. El país ha elaborado un Plan Nacional de Descarbonización (2018 – 2050).¹¹⁸



Tasa de homicidios (2020)
11.1 por cada
100,000 habitantes¹¹⁹

02 COVID-19

Según una encuesta del gobierno (agosto 2020), el impacto de la COVID – 19 en las MIPYME del país se puede sintetizar de la siguiente forma:

- ✓ El 56% ha calculado una disminución de sus ventas entre el 75% y el 100%
- ✓ El 25% de los negocios han tenido que cerrar totalmente
- ✓ El 36% se mantiene al día con el pago a los proveedores.

Además, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reporta un total de 981,963 afectados de los cuales:

- ✓ 58,843 empresas solicitaron una suspensión temporal de contrato
- ✓ 100,806 empresas solicitaron una reducción temporal de la jornada de trabajo
- ✓ 220,703 despidos

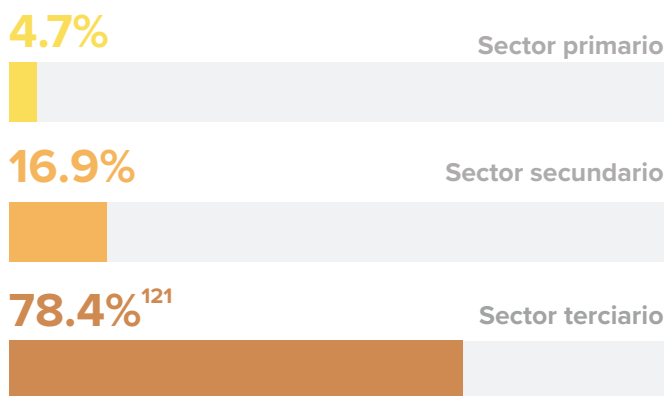
A estos 3 casos se suman los despidos no registrados por el Ministerio de Trabajo, personas trabajadoras independientes, con trabajo temporales e informales.

Medidas y planes implementados:

- ✓ **Programa Alivio promovido por la Promotora del Comercio Exterior (PROCOMER)**, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofreciendo una plataforma que dotará de herramientas a 200 micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de diferentes sectores y fondos no reembolsables para seguir operando.
- ✓ **“Bono Proteger”** para más de 700,000 personas como depósito único para limitar los efectos que la COVID–19 está teniendo en los hogares más vulnerables.
- ✓ Disposición de 10,000 millones de colones para crédito de capital de trabajo para MIPYME.
- ✓ **Comercialización digital:** el Ministerio de Industria y Comercio (MEIC) ha puesto a disposición plataformas digitales (Ciudad PYME, Fygaro, Compre PYME, Catalogo Correos de Costa Rica) para que las empresas puedan exponer sus productos y comercializarlos.¹²⁰

03 SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
 (calculado en base al PIB total del país)



El sector terciario absorbe el 68.1% de la población ocupada, mientras que el sector agropecuario únicamente el 13.4% con una baja componente femenina (4.2%)¹²².

El turismo, en particular internacional, representa un importante aporte al PIB del país igual al 6.3%¹²³ que podría provocar una mayor recesión a la economía del país, estimada del – 5.6%¹²⁴ impactando en los amplios avances en reducción de la pobreza y causando un incremento del desempleo y del empleo informal.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 15%

del total de la población del país

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 15% del total de la población del país¹²⁵. Su inclusión económica es reconocida como prioritaria por el gobierno y se ve reflejado en la política pública de la Persona Joven del Gobierno 2020–2024. Si, por un lado, el país ha conocido una tendencia positiva en el número de jóvenes que cumplen la educación secundaria, la OIT remarcó un 42% de desocupación juvenil en el primer trimestre del 2020, por encima de todos los países de América Latina lo que indica la presencia de barreras de empleabilidad que serán agravadas por el incremento del desempleo debido a la COVID – 19¹²⁶.

Durante la presente década, la cobertura en educación superior en Costa Rica ha entrado en una fase de estancamiento. El 28% de la población

costarricense de 25 a 34 años cuenta con educación superior, de estos el 57.5% de la población de 18 a 24 años que asiste a la educación superior proviene de hogares donde ninguno de los progenitores tiene estudios universitarios¹²⁷. El 19.3% de la población entre los 12 y 24 años no estudia ni trabaja (NINI). Este porcentaje se concentra en zonas periféricas del país, en cantones con bajo índice de desarrollo social¹²⁸.

Costa Rica cuenta con la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social (2019-2022), donde se establece las Juventudes como un grupo prioritario. En el marco de esta iniciativa se han creado los Centros Cívicos por la Paz (CCP).

05 ACTORES RELEVANTES PARA PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

PÚBLICOS

- Ministerio de Cultura y Juventud
- Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ)
- Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
- Dirección General PYME (DIGEPYME)
- Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

PRIVADOS

- Alianza Empresarial para el Desarrollo
- Incubadoras y aceleradoras de empresas como UNA Incuba, Parque Tec, CIE–TEC, Auge
- Asociación Costa Rica por Siempre
- Centros de Desarrollo Empresarial


COOPERACIÓN INTERNACIONAL

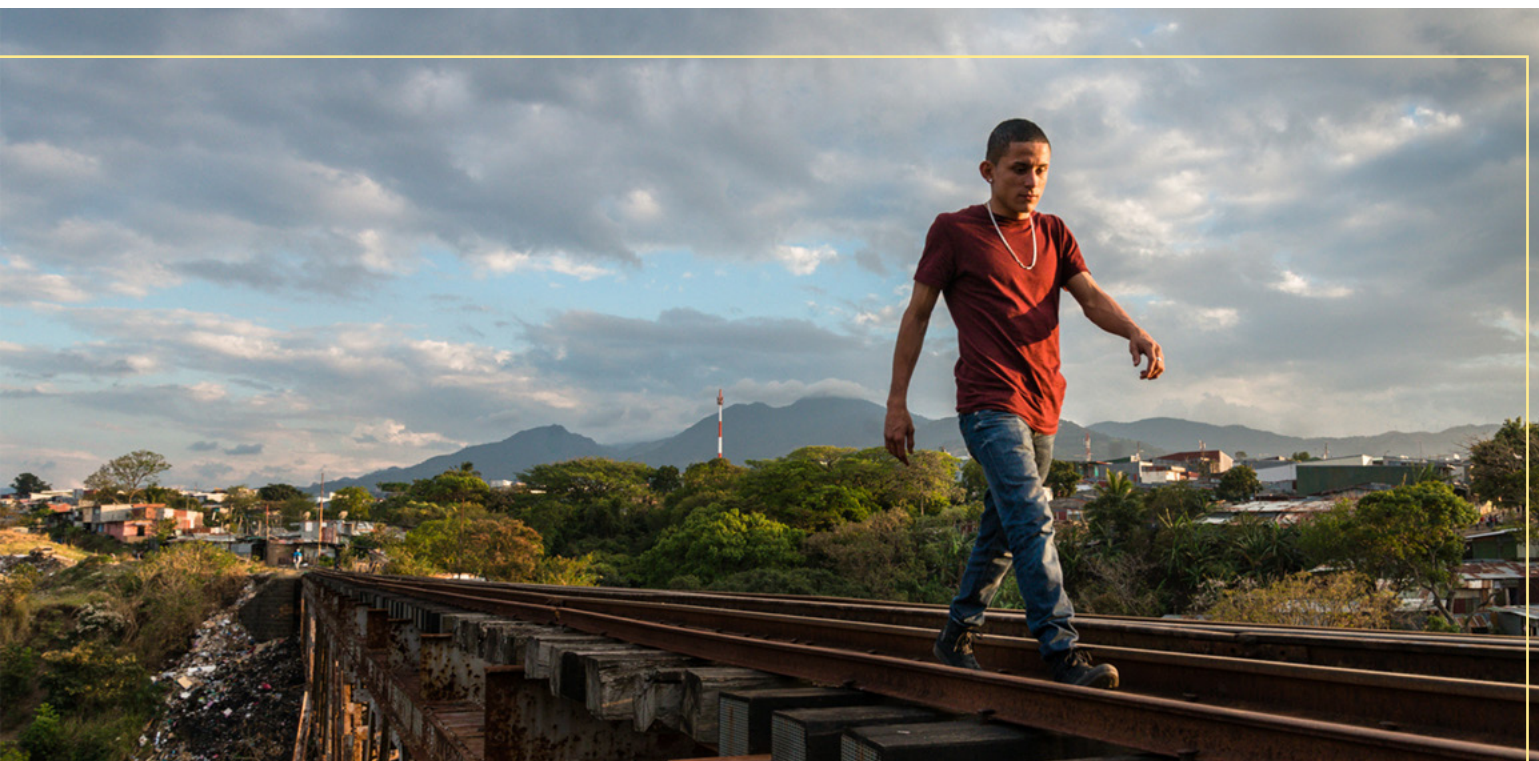
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)

PÚBLICO - PRIVADA

- Red de Apoyo a PYME



- **Programa Conjunto del Fondo para los ODS:** Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de la pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental. Los esfuerzos están orientados a fortalecer y ampliar la autonomía económica de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Entre los grupos de mujeres beneficiarias destacan mujeres indígenas, afrodescendientes y de la zona costera. Las agencias de la ONU que participan son: PNUD (agencia líder), OIT, FAO y ONU MUJERES.
 - El MEIC, el INA y la Red de Apoyo han puesto a disposición una ventanilla única para facilitar el acceso a programas, herramientas, servicios y tramites para fortalecer la competitividad de las PYME.
- 
- Como demostrado en la respuesta a la COVID-19, Costa Rica ha logrado desarrollar una buena articulación de las instituciones, aplicada también en materia de jóvenes. En este marco, el MEIC y el Consejo de la Persona Joven impulsan “Bootcamp de Emprendimiento Joven” diseñado para apoyar el emprendimiento joven, impulsando el desarrollo de habilidades necesarias para crear, generar o fortalecer exitosamente una idea o modelo de negocio, brindando herramientas e instrumentos que permitan validar, innovar y diseñar un plan o modelo de negocio en donde la persona emprendedora pueda desarrollarse en el mercado comercial de manera sostenible. Esta iniciativa se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2018-2022.
 - **Programa Nacional de Empleo:** es un programa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que impulsa proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población desempleada o subempleada. Como parte de este Programa, destaca la iniciativa Empléate, dirigida a personas en el rango de los 17 a los 24 años, que no estudian ni trabajan y que, además, se encuentran en una condición socioeconómica desfavorable. Opera mediante transferencias condicionadas para apoyar capacitación técnica-ocupacional, según las necesidades del mercado de trabajo. El Programa opera en alianza con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación públicos y privados.





Existen todavía profundas brechas de discriminación y desigualdades entre mujeres y hombres, como demuestran los datos referentes al porcentaje de personas ocupadas, a la informalidad, al peso del trabajo doméstico no remunerado, a la distribución de la propiedad de la tierra (solo el 15% de las tierras está a nombre de mujeres¹²⁹), al número de puestos de los Poderes del Estados ocupados por mujeres, y a las brechas de género en el uso del tiempo.

La centralización del país, en particular en términos de presencia de las instituciones, representa un obstáculo en el acceso a programas y servicios a beneficio de los grupos más vulnerables, en particular las personas indígenas y grupos de población que viven en zonas más remotas.

Si bien la COVID-19 ha ofrecido la oportunidad de avanzar en el proceso de digitalización en todos los niveles de la sociedad, el país enfrenta todavía una brecha digital en términos de acceso, considerando que, en algunas áreas, en particular aquellas rurales, tienen un difícil acceso y también en su uso, afectando particularmente a los grupos más vulnerables en particular las mujeres y la población indígena.

PROPUESTAS



Para facilitar la implementación y la efectividad de la nueva política nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018 – 2030, será fundamental favorecer la inter-institucionalidad y la articulación entre las instituciones directa e indirectamente implicadas. A tal efecto, será importante que el INAMU desarrolle un sistema de seguimiento y monitoreo para evaluar los resultados de los programas y para la toma de decisiones adecuadas.



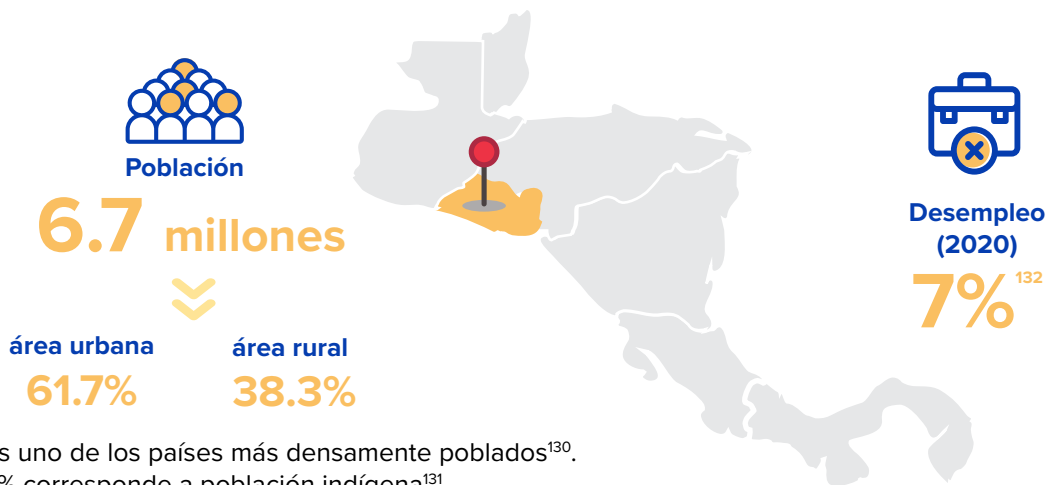
Una mayor alineación entre la malla curricular de la educación superior y las características de la demanda de trabajo facilitarían el acceso al mundo del trabajo por parte de las personas jóvenes. Además, facilitar y acercar la demanda de trabajo con la oferta de la fuerza de trabajo permitiría impactar positivamente en la tasa de desempleo.



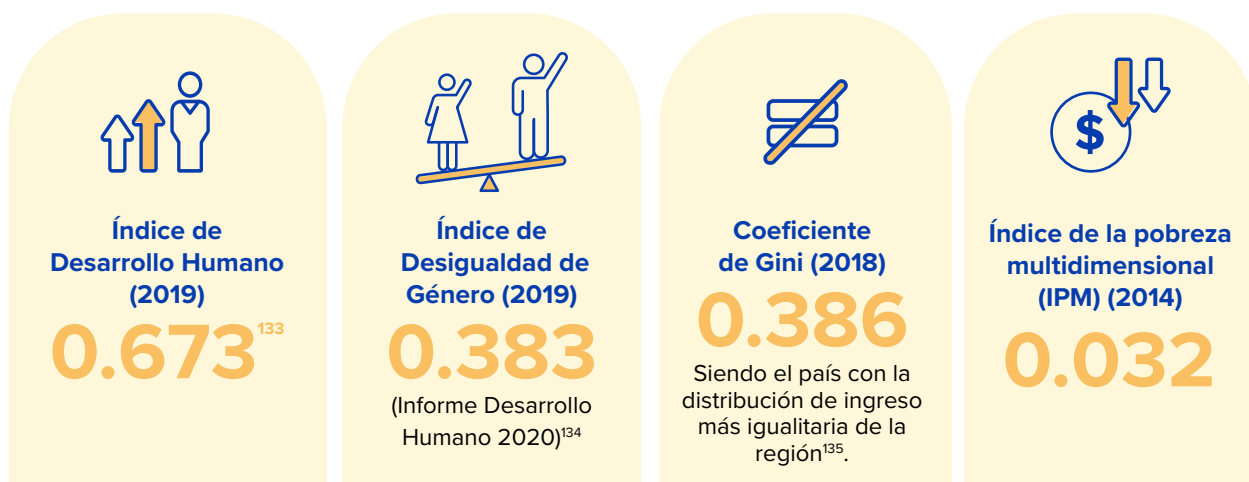
Adoptar medidas especiales para acompañar las MIPYME para que puedan ser competitivas en el mercado: acceso efectivo al crédito, mejoras tecnológicas, acceso al mercado digital, corrección de los problemas de tenencia de la tierra o de registro de la propiedad de sus activos en general entre otros, descentralización de los servicios financieros y no financieros.

EL SALVADOR

01 SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



ELS es uno de los países más densamente poblados¹³⁰. El 0.2% corresponde a población indígena¹³¹.



La población económicamente inactiva corresponde a 1.8 millones de personas (28% del total de la población) y está compuesto por un 77% de mujeres, de las cuales, el 69.7% no busca empleo debido a la carga de los quehaceres domésticos, mientras que sólo es un obstáculo para el 2.2% de los hombres. Existe una brecha salarial, en la cual las mujeres perciben menos que los hombres¹³⁷.

ELS se caracteriza por ser un país de alta migración por variables económicas y de violencia. El importante porcentaje de salvadoreños migrados hacia el exterior lleva un alto nivel de remesas que influye fuertemente en la economía del país.

Las remesas representan el 21.5% del PIB y el país principal de origen es Estados Unidos. Además, entre enero y diciembre de 2020 se incrementaron en aproximadamente un 4.8% respecto al mismo período de 2019. Luego de una primera disminución al principio de la pandemia debido a las medidas de confinamiento en E.E.U.U., en el último semestre las remesas terminaron creciendo¹³⁸.

El país había registrado recientemente una reducción moderada de la pobreza. La tasa de pobreza (basada en una línea de pobreza de US \$ 5.5 por persona por día) disminuyó del 39% en 2007 al 29% en 2017. La pobreza extrema (US \$ 3.2 por persona por día) también disminuyó del 15% al 8.5% durante el mismo período¹³⁹.

La población que vive en una condición de pobreza multidimensional es el 7.9%, siendo el IPM 0.032¹⁴⁰.

El 59.5% de la población considera que la inseguridad es el problema más importante que enfrenta el país¹⁴¹.



Tasa de homicidios (2021)

19.5

por cada 100,000 habitantes¹⁴²

02 COVID-19

En la primera etapa de la pandemia los hogares más vulnerables recibieron U\$ 300.

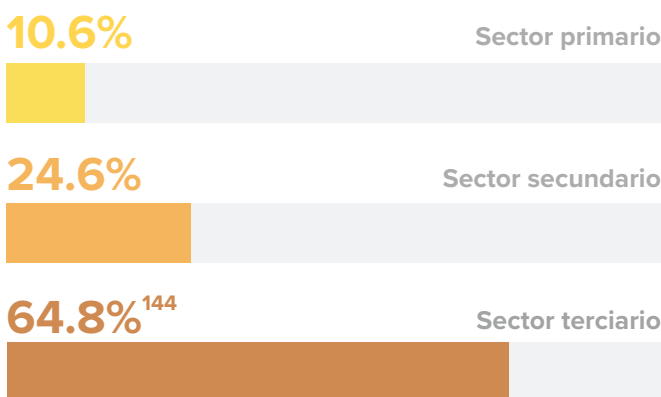
A final de febrero de 2021 ha empezado la entrega de computadoras, por parte del Gobierno, para los alumnos de las familias más vulnerables para garantizar el acceso a la educación de forma digital. Desde febrero 2020, los niños y niñas, y las personas jóvenes no han regresado a la escuela de forma presencial.

Para la reducción del impacto de la COVID-19, en particular en la micro, pequeña y mediana empresa, el Gobierno está promoviendo las siguientes líneas de apoyo:

- ✓ Creación de una línea de crédito de \$360 millones con una tasa de interés baja para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la pandemia y otra de \$100 millones destinada a financiar el sector informal en un plazo de 3 años, a través del Banco Central.
- ✓ Cobertura del 50% de salario para los empleados de las micro, pequeña y mediana empresas afectadas por el cierre causado por la pandemia.¹⁴³

03 SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país)



El sector terciario, en particular comercio, hoteles y restaurantes absorbe el 31.5% de la población ocupada, seguido por el sector primario (15.8%)¹⁴⁵.

El 72% de las empresas en El Salvador son informales y solo el 28% de ellas sostiene la recaudación tributaria en el país¹⁴⁶.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 18.9%
del total de la población del país

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 18.9% del total de la población del país¹⁴⁷. Los datos indican que la población salvadoreña es mayoritariamente joven. Si, por un lado, eso representa una gran oportunidad, por el otro lado existe una gran preocupación, porque las personas jóvenes representan uno de los grupos más vulnerables, sobre todo ante el problema de la violencia. Se releva una mayor vulnerabilidad a nivel económico: la tasa de desempleo juvenil (16 a 24 años) se encuentra en 13.4% a nivel nacional, en particular entre aquellos que alcanzaron el título de educación básica¹⁴⁸. Poco más de un tercio de las personas jóvenes no pueden continuar con sus estudios, debido a problemas económicos y tienden a insertarse en el mercado de trabajo en condiciones precarias. Además del reto de aumentar la cobertura de educación media, otro importante desafío es la retención escolar en todos los ciclos de educación: la tasa global de deserción escolar para personas jóvenes de 15 a 19 años fue de 37.7 %¹⁴⁹. Analizando la situación de las jóvenes salvadoreñas, la situación es todavía más difícil: el 37.5% de las mujeres entre 15 y 24 años caen en la categoría de NINI, ni estudian ni trabajan, debido a los impedimentos del trabajo doméstico no remunerado y al cuidado de los niños, en el caso de los hombres este porcentaje es del 14.1%. Mientras la duración de la búsqueda de empleo por parte de un joven es entre una semana y un mes, para las mujeres es entre 1 año y menos de 2 años¹⁵⁰.



05 ACTORES RELEVANTES PARA PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

PÚBLICOS

- Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE)
- Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)

PRIVADOS

- Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
- Agencias de Desarrollo Económico Local (ADEL)
- Centros de Desarrollo Empresarial (CDE)
- Fundación Empresarial para la Acción Social (Fundemas)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)





© PNUD El Salvador / Mauricio Martínez

06 INICIATIVAS EN IMPLEMENTACIÓN / BUENAS PRÁCTICAS

- Desde enero 2021, instalación del Laboratorio de Aceleración del PNUD que promoverá una nueva iniciativa, denominada Digi-Chiquihuites ofreciendo una canasta de servicios digitales para las empresas lideradas por mujeres.



- Joven360:** empresa social, que nace como iniciativa impulsada por USAID, que promueve e impacta la empleabilidad juvenil construyendo un ecosistema favorable a través la creación de una plataforma virtual de empleos, eventos, ferias, etc.

- Programas específicos para promover el emprendimiento femenino, impulsados por los Centros de Desarrollo Empresarial

- Centros Supérate:** los 10 centros, instalados en diferentes departamentos del país, brindan educación de alta calidad en inglés, informática y valores a personas jóvenes de escasos recursos económicos y de alto rendimiento académico durante tres años. Incluyen a los grandes grupos de empresas de país.

- Programa de Empleo y Empleabilidad** para las personas jóvenes del Gobierno con enfoque inclusivo, contemplando acciones dirigidas a diferentes grupos, más allá de los jóvenes NINI. Debido a la situación de la COVID – 19, no se pudieron apreciar avances.

07 PRINCIPALES DESAFÍOS



Las líneas de crédito instaladas para apoyar las empresas para reducir el impacto de la COVID – 19 causarán una importante subida del endeudamiento del País y una distorsión de la industria financiera, que ya cuenta con un reducido espacio fiscal.

Los CDE no cuentan con mecanismos de monitoreo para medir el impacto y los resultados que los Centros tienen en términos de incremento de la competitividad, tasa de sobrevivencia en el mercado, mejora de las oportunidades para las empresas beneficiarias de los servicios.

La baja tasa de crecimiento económico y la informalidad de las empresas (micro y pequeñas) y del empleo afectan gravemente a la capacidad de resiliencia del país considerando su alta exposición a catástrofes naturales, debidas también al cambio climático.

El alto nivel de desigualdad de género representa un obstáculo a la cohesión social del país, considerando que uno de los impedimentos al acceso a la vida social y económica del país, está representado por el peso de las tareas domésticas y del cuidado de los niños y niñas, a cargo esencialmente de las mujeres.

La guerra de pandillas y la violencia sigue impactando negativamente en la calidad de vida de los salvadoreños. La respuesta gubernamental ha sido enfocada en la respuesta antes que en la prevención. Los avances logrados a partir del 2016 podrían ser minados por la crisis causada por la COVID – 19.



PROPUESTAS



Apoyar a los productores y sus asociaciones para que puedan mejorar su capacidad productiva, a través un apoyo especializado en los aspectos gestionales/administrativos, así como técnicos (cantidad y calidad). Esto les permitiría convertirse en proveedores de los programas del gobierno central o local y de la cooperación internacional de entrega de alimentos para mitigar la emergencia, según un enfoque de cadena de valor corta.

Por Ley Nacional, cada Agenda Municipal debería tener un enfoque en las personas jóvenes priorizando acciones específicas. En la práctica, en particular para los municipios de menor tamaño, el tema está relegado. Enfatizar el espacio dedicado a las personas jóvenes, promoviendo un proceso de revisión de las Agendas Municipales vinculándolas con la Agenda 2030.

Promover alianzas público–privadas sostenibles en áreas como el ecoturismo, el transporte verde, prácticas agrícolas y sistemas energéticos, favoreciendo soluciones y enfoques desde las comunidades que permitan una transición hacia una economía limpia y equitativa¹⁵¹.

Brindar programas dirigidos a las mujeres para favorecer su acceso y permanencia en el mercado laboral, a través: formación avanzada, acceso al crédito, articulación con el entorno empresarial, acceso a instrumentos de marketing y tecnología, etc., como resultado de claras políticas públicas y en base a datos nacionales y departamentales desagregados.

En coordinación con el sector privado, promover un plan de formación e inserción laboral, tanto en términos de empleo como de emprendimiento, que pueda ofrecer oportunidades reales para las personas jóvenes, en particular aquellos deportados que ingresen al país, representando alternativas económicas a la violencia criminal.

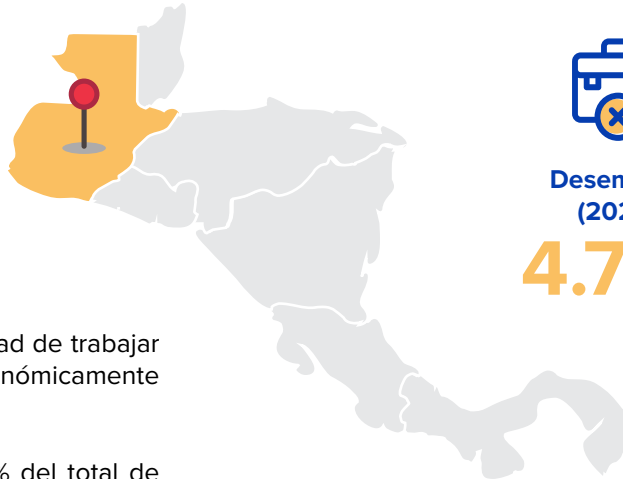
GUATEMALA

01 SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



Población

16.8 millones



Desempleo
(2020)

4.7%¹⁵⁴

De los cuales 12 millones están en edad de trabajar y 7.1 millones integran la Población Económicamente Activa (PEA)¹⁵².

Más de 6 millones de habitantes (41% del total de la población) se auto identifican como poblaciones indígenas¹⁵³.



Índice de
Desarrollo Humano
(2019)

0.663¹⁵⁵



Índice de
Desigualdad de
Género (2019)

0.479¹⁵⁶



Coeficiente
de Gini
(2014)

0.48¹⁵⁷



Índice de la pobreza
multidimensional
(IPM) (2014/2015)

0.134



Nivel de informalidad en el mercado
laboral

80.1%¹⁵⁸

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 39.9%, en comparación con el 86.3% de los hombres¹⁵⁹.



86.3 %

39.9 %



Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo con un alto índice de la pobreza, concentrado especialmente en zonas indígenas y rurales.

Antes de la COVID – 19, la economía guatemalteca había tenido un desempeño sólido, aunque con tasas moderadas de crecimiento del 3.5% en promedio en los últimos 5 años. Esta estabilidad económica, no obstante, no se ha traducido en una reducción importante de la pobreza y la desigualdad¹⁶⁰.

El 28.9% de la población vive en situación de pobreza multidimensional y otro 21.1% está clasificado como vulnerable a la pobreza multidimensional siendo el IPM 0.134¹⁶¹.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) son el motor principal de la economía nacional, generador de la mayor parte del empleo formal (85%) y fuente importante de ingresos (40% del PIB)¹⁶².

El país cerró el 2020 con un récord de remesas superior al 2019, igual a un incremento del 7.7%¹⁶³.



Las remesas representan el **14.6%** del PIB



Tasa de homicidios (2020)

15.3 por cada 100,000 habitantes

La población joven (18–30 años) es la más afectada¹⁶⁴.

02

COVID-19

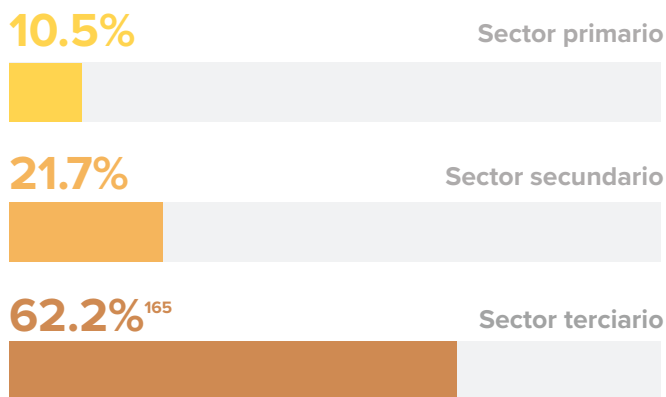
En el *Plan general de atención a la emergencia COVID-19* se establecieron tres componentes:

- ✓ Medidas sanitarias
- ✓ Medidas sociales
- ✓ Medidas complementarias, entre las cuales destacan las medidas de inclusión económica, en términos de apoyo a la PYMES con acceso a fondos de crédito, bono de protección del empleo, adquisición de ventiladores, pruebas COVID–19, trajes y material de protección personal, proyectos para la reactivación económica.

03

SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país)



El sector primario emplea la mayoría de la población (31,9%¹⁶⁶) con la producción esencialmente de: café, azúcar, banano (plátano), palma africana y cardamomo, con condiciones laborales particularmente vulnerables en términos de temporalidad y de condiciones de pago. El sector agropecuario es el mayor empleador de personas jóvenes, 1 de cada 3 jóvenes activos se encuentran empleados en este sector (29,6%)¹⁶⁷. El sector informal absorbe el 70,6% del empleo a nivel nacional, con particular concentración en el área rural (8 de 10 trabajadores son informales)¹⁶⁸.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 20.9%
del total de la población del país

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 20.9% del total de la población del país¹⁶⁹.

La edad promedio es de 19.7 años¹⁷⁰. Este dato representa una gran oportunidad para el país. El 73.4% de los desocupados guatemaltecos son personas jóvenes entre los 15 y 29 años¹⁷¹. 200 mil jóvenes demandan acceso al mercado laboral pero solo 20 mil acceden al trabajo decente, según la Política Nacional de Juventud 2012 – 2020.

La juventud guatemalteca vive una situación de alta vulnerabilidad, siendo muy expuesta a explotación laboral con dificultad a competir en el mundo del trabajo, debido entre otros motivos a la falta de oportunidades en el desarrollo de competencias técnicas o especializadas.¹⁷² El 24% es analfabeta (alta concentración en la

población indígena y las mujeres jóvenes) y el 14.5% vive en condiciones de extrema pobreza y sin acceso a los servicios básicos. La mayoría cuenta solo con un título de educación primaria y alrededor del 20% tiene estudios secundarios y/o universitarios¹⁷³.

La juventud guatemalteca presenta un cierto desinterés o apatía hacia la vida política y social del país, que se concretiza en su baja participación. Actualmente las propuestas organizativas están brindadas por parte de grupos religiosos y organizaciones juveniles comunitarias. Esta falta de liderazgo representa una de las oportunidades por las maras y las pandillas juveniles, que se presentan como una respuesta a las necesidades de las personas jóvenes¹⁷⁴.

05 ACTORES RELEVANTES PARA PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

PÚBLICOS

- Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE)
- Instituto Nacional de Capacitación (INTECAP)
- Ministerio de Economía (MINECO), a través del Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME

PRIVADOS

- Cámara de Comercio Guatemala

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Unión Europea (UE)



- Para facilitar el acceso al financiamiento, desde finales de 2019, la Superintendencia de Bancos (SIB) inició a incluir datos sobre el estado de inclusión financiera de los guatemaltecos por rangos de edad, lo cual permite construir una base de datos para el desarrollo de estrategias e iniciativas dedicadas al fomento de la inclusión financiera juvenil. A esta iniciativa, corresponde también una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, fruto de la coordinación interinstitucional entre MINECO, BANGUAT y la SIB con el objetivo de fomentar el acceso y el uso de productos financieros por parte de diferentes segmentos de la población guatemalteca.



- **“Alianza Por la Educación” conformada por Tigo Guatemala y USAID:** programa que busca contribuir a la capacitación de personas jóvenes vulnerables y retornados, para que puedan encontrar una oportunidad económica en el país y no tengan que volver a migrar. Los cursos están siendo impartidos de manera presencial y virtual durante el primer semestre de 2021 y están facilitados y certificados por el INTECAP. La finalidad es apoyar a 25,000 personas jóvenes vulnerables del altiplano entre los 24 y 29 años¹⁷⁵.

- **Banco Nacional de Oportunidades (BANOP)** lanzado en 2020 por el MINECO en coordinación con el CONJUVE para estimular oportunidades que promuevan el desarrollo económico de la juventud guatemalteca mediante la coordinación y articulación de programas y proyectos que generan emprendimiento, empleo y productividad.

- En el marco del Proyecto Regional sobre seguridad integral y prevención de la violencia que afecta a personas jóvenes en los países del SICA -PREVJUVE (2015 – 2017), el PNUD Guatemala atendió a un total de 156 personas, de las cuales el 70% jóvenes menores de 30 años. Se generó un banco de datos de 60 empresas y cooperativas, de cara a generar la conexión entre oferta y demanda laboral. Se realizaron dos encuentros intersectoriales para la empleabilidad juvenil, entre el sector privado e instituciones que trabajan en pro de la empleabilidad juvenil de los municipios de Chimaltenango y Antigua Guatemala. Se llevó a cabo la primera feria de empleo a nivel departamental, a la que asistieron un aproximado de 1.000 personas y participaron más de 20 empresas¹⁷⁶.





Un alto porcentaje de la PEA no tiene ningún tipo de educación formal.

El 63% de la población vive en áreas rurales y tiene una estrecha relación y dependencia de los recursos naturales^{vii}. La adhesión al acuerdo de París en el 2015, la necesidad de proteger la riqueza en términos de recursos naturales y de ofrecer oportunidades de ingreso a la población, ha llevado a compromisos por parte del gobierno a elaborar e implementar una estrategia de economía verde. La traducción de esta estrategia en políticas y programas con recursos públicos representa el principal desafío para reducir las emisiones de efecto invernadero.

La oferta financiera y su difícil acceso representa un cuello de botella para las MIPYME limitando su innovación, productividad y competitividad en el mercado, afectando los niveles de ingresos y su longevidad.



PROPUESTAS



Favorecer el acceso a la educación “formal” y a la formación técnica (ej. a través flexibilidad en los planes de estudio, incentivos y financiamiento gracias a una estrecha colaboración con el sector productivo y de servicios, mayor cobertura geográfica en las estructuras de oferta educativa, reconversión de programas en formato digital gracias al uso de medios virtuales) para garantizar la coherencia entre la demanda del mercado y la preparación formal y técnica de las personas jóvenes y de las mujeres, basados en los diagnósticos elaborados a nivel departamental.

Para la reducción de las emisiones hasta 2030, es necesario actuar en varios frentes: por un lado, resulta fundamental invertir en la producción agroalimentaria que representa uno de los sectores más contaminantes, en particular la agroexportación, por la articulación entre las instancias públicas y el sector privado es un factor clave para el respecto de las normas ambientales y para una conducta transparente con bajo impacto ambiental.

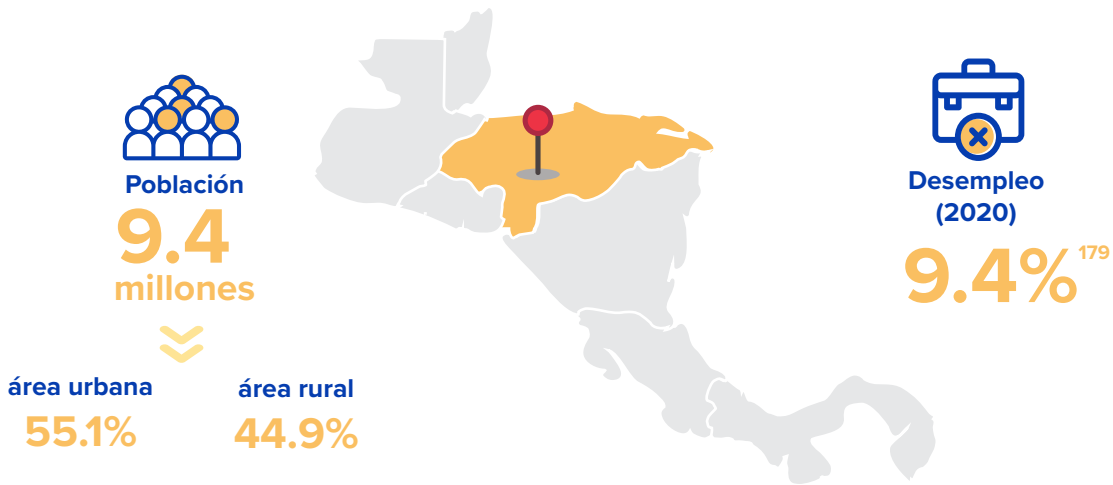
Apoyar el proceso de descentralización del país, a través de la promoción de Agencias de Desarrollo regional, como previsto por la estrategia nacional y a través de la creación de centros público-privados, que puedan brindar servicios integrales territoriales a las micro y pequeñas empresas y a los nuevos emprendimientos. Las Agencias podrán proveer también servicios que aporten positivamente a una cultura de formalización entre las micro y pequeñas empresas.

Favorecer la articulación entre las instituciones de crédito, incluyendo aquellas de microcrédito, y promover productos financieros que respondan a las necesidades de la micro y pequeñas empresas, fomentando su inclusión e incrementando su competitividad.

vii Para más detalle sobre desplazamiento por causas socioambientales, ver PNUD (2021). Cohesión socioambiental en Centroamérica y la República Dominicana.

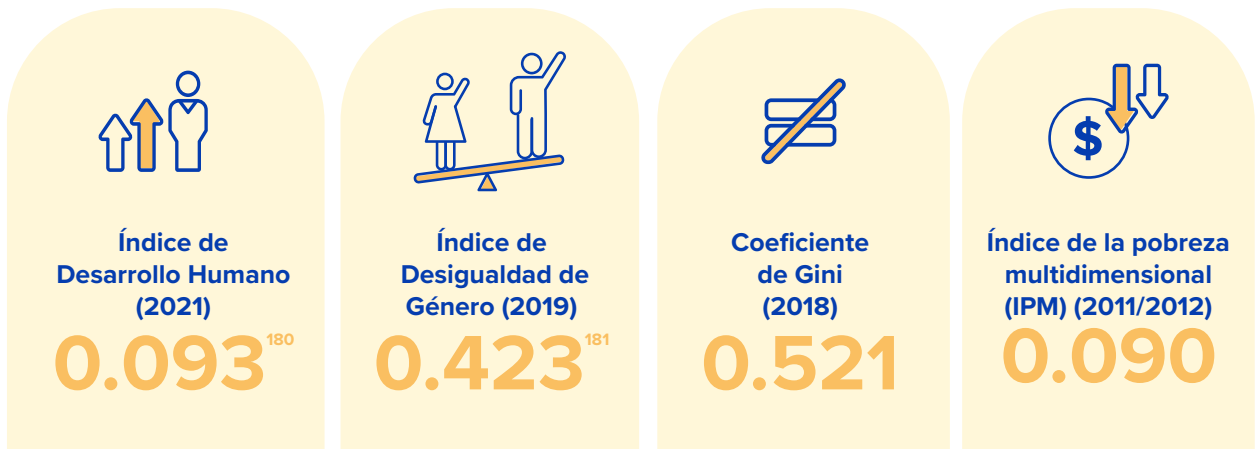
HONDURAS

01 SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



En el área rural, las condiciones de vida son más vulnerables (en términos de acceso al agua, a la energía, a los sistemas de saneamiento básico) respecto al área urbana¹⁷⁷.

La población indígena es 717.618 personas, corresponde al 8.6% de la población total¹⁷⁸.



El 73.8% de la población nacional está en edad de trabajar (15 años y más), sin embargo, la Tasa de Participación sobre la base de la Población en Edad de Trabajar (PET), es de 59.4%. La participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 52%, en comparación con el 85.9% de los hombres¹⁸².

El coeficiente de Gini (2018) es 0.521, entre los más altos de la región y con una de las clases medias más pequeñas de América Latina y Caribe¹⁸⁴.

El crecimiento del PIB del país alcanzó el 4.8% en 2017, el 3.7% en 2018 y el 2.7% en 2019¹⁸⁵.

El país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad. El 48.3% de las personas viven en pobreza (2018) y el porcentaje de personas viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1%) es mayor que en zonas urbanas (38.4%)¹⁸⁶.



La población que vive en pobreza multidimensional es el 20% siendo el IPM 0.093¹⁸⁷.



Las remesas representan el **20%** del PIB

Se trata de un país de alta migración, en particular de personas jóvenes y en los últimos años también de niños, con una pérdida importante de capital social por el país¹⁸⁸. Las remesas representan alrededor un 20% del PIB y el país principal de origen es Estados Unidos. En el 2020 se incrementaron en aproximadamente un 3.8% respecto al mismo período de 2019¹⁸⁹. El Banco Central señaló que el 98.5% de las familias hondureñas que reciben este dinero lo utilizan sobre todo para pagar gastos de alimentación, servicios de salud y educación, y el 1.5% lo destina a inversión de capital fijo¹⁹⁰.

Un patrón de dualismo entre formalidad e informalidad se extiende a todos los sectores del mercado laboral hondureño, y la mayoría de los trabajos de menor calidad son informales. Según incrementan los años de estudios aprobados, el nivel de empleo informal disminuye. Por ejemplo, en

el 2017, el 100% de las personas sin años de estudios tenía empleo informal¹⁹¹.

El país es muy expuesto a las consecuencias del cambio climático y a catástrofes naturales, como los 2 huracanes que lo han afectado profundamente en el 2020.

En los indicadores de *Doing Business* del Banco Mundial (2019), Honduras se encuentra en el puesto 133 de 190¹⁹². El país se caracteriza particularmente por sus largos y numerosos procedimientos para emprender un negocio, puesto que la inseguridad ciudadana y jurídica pueden afectar negativamente al interés y la propensión a la inversión por parte de empresas nacionales y extranjeras. Sin embargo, Honduras está en el 12º puesto a nivel mundial en cuanto a la facilidad con la cual las empresas pueden obtener crédito¹⁹³.



Tasa de homicidios (2020)

37.6 por cada 100,000 habitantes¹⁹⁴

02

COVID-19

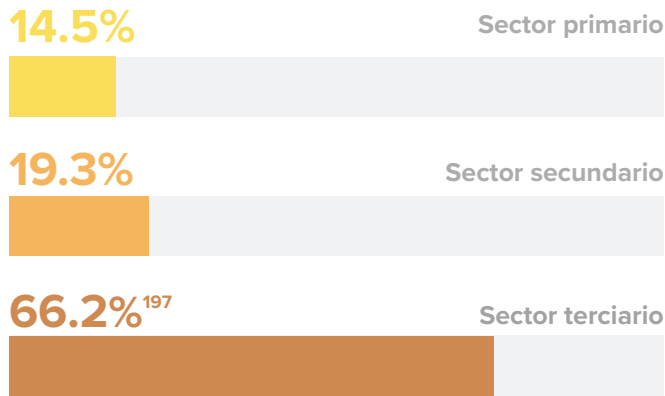
Para la reducción del impacto, en particular en la micro, pequeña y mediana empresa, el Gobierno está promoviendo las siguientes líneas de apoyo:

- ✓ Congelamiento de los precios de todos los productos de la canasta básica.
- ✓ Asignación de un Bono de Solidaridad Productiva a 190,000 pequeños productores para que dispongan de insumos agrícolas. Estos fondos serán destinados para apoyar la siembra de frijol, maíz, arroz, hortalizas, frutas, entre otros.
- ✓ Apoyo a través del Banco Hondureño para la Producción y Vivienda (BANHPROVI) para congelar las cuotas en financiamientos a PYMES, comercio, sector agrícola y turismo.
- ✓ Habilitación de líneas de financiamientos directas a bancos, cooperativas, microfinancieras y cajas rurales, a fin de hacer más expeditos la utilización de los 2,500 millones de lempiras.
- ✓ Habilitación de 51 millones de lempiras a través de Crédito Solidario para beneficiar a 5,000 emprendedores una vez que la emergencia permita reiniciar la actividad comercial¹⁹⁵.

El PNUD ha sido invitado por el gobierno de Honduras a acompañarlo en la definición de una metodología de identificación de la población con derecho a beneficiar del bono único, un subsidio de 2,000 lempiras para la población más vulnerable y mayormente afectada por las medidas de contención social de la COVID-19. El PNUD ha brindado asistencia técnica para el desarrollo del Índice de Vulnerabilidad Multidimensional y la implementación de un mecanismo digital para facilitar la llegada y la entrega al ciudadano¹⁹⁶.

03 SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país)



El sector agropecuario emplea al 35% de la Población Económicamente Activa. El sector agropecuario juega un papel esencial en la reducción de la inseguridad alimentaria y nutricional.¹⁹⁸

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 20.7% del total de la población del país¹⁹⁹.

Este elemento representa una gran oportunidad para el país que está viviendo los efectos positivos del bono demográfico. Analizando los datos, se identifica el alto nivel de vulnerabilidad al cual las personas jóvenes están expuestos²⁰⁰.

Con referencia a las tasas de violencia, cuantitativamente la población más afectada por los homicidios está representada por hombres entre los 18 y 29 años²⁰¹.

La desocupación se concentra en la población joven: del total de 447.774 desempleados del país, 36.8% son personas jóvenes menores de 25 años²⁰². El porcentaje de NINI es el 27.7% (2017) del total de las personas jóvenes²⁰³, con una incidencia mayor entre las mujeres²⁰⁴.

El problema del embarazo adolescente es todavía fuerte en el país: por cada 100,000 nacidos vivos mueren 65 mujeres por causas relacionadas con el embarazo, y la tasa de fecundidad entre las adolescentes es de 72.9 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años²⁰⁵.

72.9
nacimientos por cada 1,000
mujeres de 15 a 19 años



« **20.7%**
del total de la población del país



© Alex Sorio

PÚBLICOS

- Instituto Nacional de la Juventud (INJ)
- Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)
- Subsecretaría de la MIPYME
- Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (SENPRENDE)

PRIVADOS

- Cámara de Comercio e Industria, reunidas en la Fedecámaras
- Centro de Desarrollo Empresarial de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CDE)
- Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)



- **Proyecto PREVJUVE:** promovido por el PNUD con los fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se han seleccionado a 65 personas jóvenes que residen en Tegucigalpa promoviendo y apoyando el desarrollo de habilidades y capacidades para generar emprendimientos y oportunidades.

- El PNUD Honduras ha acompañado el proceso de elaboración de una caja de herramientas, junto a actores claves del área empresarial, según un enfoque de negocios inclusivos para favorecer la competitividad de las empresas, ayudándolas a mejorar su actividad para reducir el impacto socio-ambiental. Estas herramientas han sido incorporadas en una propuesta de ajustes al manual operativo de los CDE.



- El PNUD Honduras ha y está desarrollando un amplio trabajo con las personas jóvenes, tomando en cuenta el importante rol que tienen como tomadores de decisiones. Uno de los resultados es la construcción de la propuesta “Políticas Públicas de/para/ con Juventudes: Honduras 2018–2030”. En el proceso de elaboración del Informe de Desarrollo Humano 2021 las personas jóvenes tienen un rol clave a nivel de consultas y de formulación de propuestas.

- El gobierno hondureño ha reconocido la importancia del apoyo directo a la creación de trabajos para personas jóvenes de bajos ingresos. “Con Chamba Vivís Mejor” ofrece experiencia laboral a corto plazo para personas jóvenes desempleadas. Los miembros de las Cámaras de Comercio e Industria ofrecen ofertas de trabajo que coinciden con los perfiles de las personas jóvenes que están registrados en el Servicio Nacional de Empleo (SENAEH).



Las personas jóvenes representan uno de los grupos más vulnerables de la población. Por falta de oportunidades (bajo número de estudiantes en la educación superior y alto número de personas jóvenes sin ocupación) y escasez de programas de empleo y promoción de empresas para la juventud, se exponen en ciertos casos a migrar al exterior en búsqueda de futuro o a involucrarse en actividades relacionadas al crimen organizado y la violencia.

El trabajo decente para todos representa todavía uno de los obstáculos a la inclusión económica de un gran porcentaje de la población hondureña. Persiste la existencia de empleo informal en particular en ciertos sectores productivos y para ciertos segmentos de la población, en particular personas jóvenes y mujeres.

Existen todavía profundas diferencias de género tanto en el acceso como en la permanencia en el mercado laboral de las mujeres, situación que ha empeorado con la COVID-19. La falta de protección social y el peso del trabajo no remunerado siguen representando cuellos de botella para la inclusión económica de las mujeres.



PROPUESTAS



Favorecer la articulación entre las instituciones gubernamentales y el sector privado, aprovechando la oportunidad que la recuperación post COVID-19 ofrece a través de sus estrategias y planes de reactivación económica persiguiendo principios de inclusión, favoreciendo el empleo digno y promoviendo prácticas innovadoras.

Proteger los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, vinculada a la generación de ingresos, en particular de la población del área rural. Esto implica la formulación e implementación de políticas públicas que favorezcan un proceso de descentralización, hacia un mayor espacio de los gobiernos locales, y de formación a las comunidades locales.

Promover espacios de participación juvenil en las comunidades donde las personas jóvenes sientan la oportunidad de expresar y de realizarse, desarrollando un compromiso responsable con los demás ciudadanos.

En una óptica de mejora de la educación y una mayor especialización técnica y cultura empresarial, favorecer una reorientación educativa, promoviendo calidad e innovación tecnología, orientada a la demanda laboral y aptitudes vocacionales.

Promover la participación de las mujeres, diseñando programas dirigidos a sectores y tipos de trabajos más atractivos para las mujeres, proporcionando cuidado infantil y garantías de seguridad personal para los participantes, y monitorear los datos de forma desagregada.

PANAMÁ

01

SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



Población

4,219,000



área urbana

62.2%

área rural

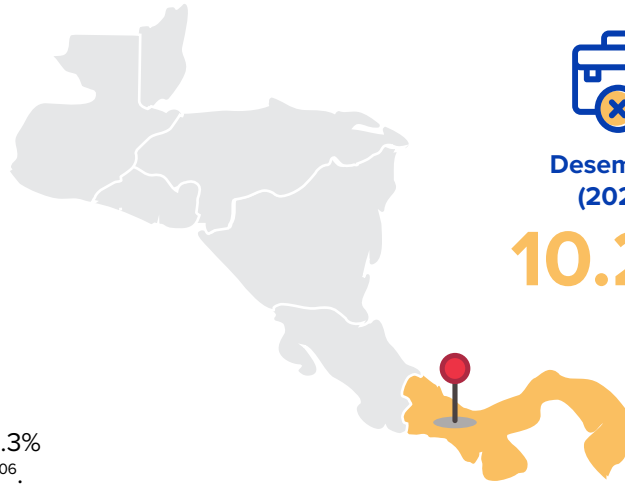
37.8%

Según el censo del 2010, el 12.3% correspondía a población indígena²⁰⁶.
Desempleo (2020): 10.2%²⁰⁷



Desempleo
(2020)

10.2%



Índice de
Desarrollo Humano
(2019)

0.815²⁰⁸



Índice de Desigualdad
de Género
(2019)

0.460

(Informe Desarrollo
Humano 2019)



Coefficiente
de Gini
(2017)

0.51

Panamá es el tercer
país más desigual de
América Latina²⁰⁹.



Índice de la pobreza
multidimensional
(IPM) (2018)^{viii}

0.081



Nivel de informalidad en
el mercado laboral

51.4%²¹⁰

Entre 2014 y 2019, el 85% de los empleos creados fueron informales²¹¹. En agosto de 2019, se registraron unas 716,113 personas ocupadas con empleos informales no agrícolas (45 de cada 100 ocupados tuvo un empleo informal).

Población económicamente inactiva

1.9 millones de personas
(45% del total de la población)



de los cuales

41 %
por mujeres

En lo relativo a la distribución del empleo informal (no agrícola) por sectores o unidad de producción, se observó la siguiente composición: 13% fueron ocupados informales del sector formal, 77.4% ocupados informales del sector informal y 9.6% ocupados informales en los hogares²¹².

Existe una brecha de salario, en la cual las mujeres perciben menos de los hombres²¹³.

viii El dato del IPM de Panamá se refiere al dato nacional, ya que no se cuenta con el dato global, calculado por el Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI).



Las remesas representan el

0.9% del PIB

Cifras de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industria revelan que, de enero a septiembre de 2020, las remesas enviadas al exterior disminuyeron aproximadamente un 40%; en cuanto a las remesas recibidas también se reportó una baja que supera el 20% en el tercer trimestre 2020²¹⁴.

Las remesas representan un 0.9% del PIB y el país principal de origen es Estados Unidos. Desde el país, los inmigrantes envían remesas principalmente hacia Colombia, China y República Dominicana.

El porcentaje de personas en condición de pobreza multidimensional se ubicó en 19.1% (2017), lo que representó en términos absolutos 777,752 personas, siendo el IPM 0.083²¹⁵.

Antes del impacto de la pandemia de la COVID-19, Panamá se encontraba entre las economías de más rápido crecimiento a nivel mundial, con un promedio anual de 4.6% en los últimos 5 años²¹⁶.

Panamá ha progresado con la reducción de la pobreza en los últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas. Entre 2015 y 2018, si utilizamos la línea de pobreza de US\$5,5 al día, resultaría en una disminución de pobreza del 15.4% a un 12.6%, mientras que la pobreza extrema, fijada en US\$3,2 diarios, declinó de 6.7% a 5.2%²¹⁷.



Tasa de homicidios (2020)

11.6 por cada 100,000 habitantes²¹⁸

02

COVID-19

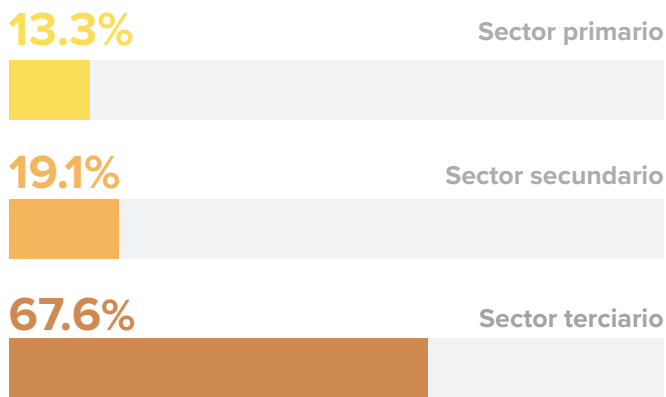
Panamá ha sido el primer país en Centroamérica y el tercero en América Latina en realizar investigaciones científicas con respecto al nuevo coronavirus²¹⁹.

El Gobierno Nacional ha puesto en marcha en abril 2020 el plan “Panamá Solidario” bajo la responsabilidad de un Consejo Consultivo Económico, iniciativa que contó con un fondo inicial de US\$50 millones, para cubrir las necesidades básicas de la población panameña más vulnerable, afectada por el impacto económico ocasionado por la pandemia del nuevo coronavirus. Se flexibilizará el régimen tributario mediante el diferimiento del pago de impuestos, tasas y gravámenes para los patronos que se acojan a los beneficios, condicionado a que las empresas no reduzcan su fuerza laboral.

- ✓ Envío de medicamentos, productos de higiene y equipos de protección personal a más de 25 países de la región a través del Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, el “Hub Humanitario” que opera en Panamá a cargo del Ministerio de Gobierno, en alianza con la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna Roja y el Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas (UNHRD), este último administrado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
- ✓ La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) implementa la inteligencia artificial para asesorar a pequeños empresarios y emprendedores durante esta crisis sanitaria las 24 horas. La herramienta tecnológica, denominada RITA, ofrecerá respuestas a quienes necesiten información sobre los servicios empresariales, banca de oportunidades, capital semilla y registro empresarial.
- ✓ A partir del 30 de abril 2020 comenzó la primera fase del denominado ‘vale digital’ de \$80 a través de la cédula de identidad personal, como parte del programa Panamá Solidario. Con la cédula se pueden hacer compras de alimentos, medicinas y otros artículos. Con esta iniciativa, Panamá se convirtió en el primer país del continente y uno de los primeros países del mundo en utilizar la cédula para la compra de alimentos, medicinas y artículos de limpieza e higiene.

03 SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país 2018)²²⁰



Las MIPYME constituyen alrededor del 90% de las empresas del país y generan más del 70% de los empleos a nivel nacional²²¹.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 16.4%
del total de la población del país

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 16.4% del total de la población del país²²².

En Panamá, el desempleo juvenil en septiembre 2020 fue del 18.5%. En 2021 se estiman perder entre 385 mil y 400 mil empleos, de los cuales, el 35% serán de trabajadores con menos de 30 años. Unos 135 mil jóvenes perderán sus fuentes de ingreso²²³.

La situación es particularmente grave en las personas jóvenes de 15 a 24 años. Entre los adolescentes (15-19 años), el aumento de la deserción escolar ocasionó que el aumento de NINI adolescentes en los últimos 5 años (25,872) superase su crecimiento poblacional (23,032), tendencia que se agravará como consecuencia de la COVID-19.

3 de cada 4 jóvenes que entraron al tramo de edad de 15 a 24 años entre el 2014 y 2019 fueron NINI y los desocupados casi se triplicaron (181% de aumento). En entornos urbanos, 2 de cada 3 varones que entraron al tramo de edad de 15 a 24 años entre el 2014 y 2019 fueron NINI²²⁴.

Uno de los objetivos del gobierno es disminuir los índices de desempleo juvenil. El 52.8% de las personas entre 20 y 29 años ocupadas no tenían seguro social, en comparación con un 47.2% para el resto de la población ocupada mayor de 15 años. Un 22.4% de estos jóvenes trabajan por cuenta propia, por debajo del resto de la muestra de la encuesta, con un 34.3%. Esto indica que muchos jóvenes estaban trabajando en el sector formal, pero en condiciones de informalidad²²⁵.



© PNUD Panamá / Risseth Yanguéz

05

ACTORES RELEVANTES PARA PROGRAMAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA

PÚBLICOS

- Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud
- Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)
- Autoridad de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME)
- Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
- Ministerio de Comercio e Industria
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL)
- Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU)
- Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACCOP)

PRIVADOS

- Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (PANACAMARA)
- Joven360

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)



06

INICIATIVAS EN IMPLEMENTACIÓN / BUENAS PRÁCTICAS

- **Proyecto “Aprender Haciendo”** del MITRADEL cuyo objetivo es contribuir a la disminución de la tasa de desempleo en jóvenes entre 17 y 24 años, mediante pasantías laborales en un entorno empresarial amigable, supervisado y guiado por especialistas en empleabilidad.
- Una alianza en materia laboral y emprendimiento por los jóvenes panameños fue firmada en septiembre de 2020, entre las autoridades del MITRADEL, el MIDES y la empresa Nestlé Panamá. Este Memorando de Entendimiento tiene el propósito de establecer un marco de cooperación para facilitar y fortalecer la colaboración entre las partes del sector público y privado e impulsar una alianza nacional por la empleabilidad, emprendimiento y agro-emprendimiento de jóvenes en edades de 18 a 29 años.
- **Programa de Orientación Vocacional y empleo (POVE)** para jóvenes entre 15 y 18 años con el objetivo de orientar en la identificación de intereses, recursos personales, expectativas respecto al futuro profesional y facilitar la transición del mundo de la educación al mundo del trabajo.
- **Proyecto Panamá Pro-Joven** para jóvenes de 17 a 23 años cuyo objetivo es ofrecer a estudiantes egresados de escuelas públicas con competencias técnicas y vocacionales la oportunidad de iniciarse en el mundo laboral, por medio de pasantías supervisadas en un entorno empresarial.
- **Programa Padrino Empresario** dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años a quienes se les brinda asistencia y capacitación profesional, a fin de evitar la deserción escolar. Las personas jóvenes reciben capacitación laboral para un futuro empleo en una empresa patrocinadora.





El país requiere una transformación educativa orientada a la calidad y una formación profesional vinculada al mercado del trabajo que facilite su acceso por parte de las personas jóvenes y que permita una mayor coherencia entre la oferta y la demanda de trabajo.

Llevar a cabo una reestructuración tributaria que pueda incentivar la registración y formalización de las empresas y del trabajo y que permita una reducción del alto nivel de informalidad garantizando una mayor protección social.

Débil sistema de estadísticas y débil confianza hacia las informaciones recogidas. La disponibilidad y el acceso a estas informaciones permitirían también tener una mejor planificación.



PROPUESTAS



Considerando que el alto número de NINI y la dificultad a acceder y permanecer en el mercado de trabajo por parte de las personas jóvenes entre 15 y 24 años representa uno de los principales desafíos, el país requiere una transformación educativa orientada a la calidad y una formación profesional vinculada al mercado del trabajo que facilite su acceso y que permita una mayor coherencia entre la oferta y la demanda de trabajo.

Revisar e impulsar una transformación de la ley de la AMPYME, actualizándola a los retos del presente, incluyendo la simplificación de los procedimientos para las MIPYME, tanto en el gobierno como en los municipios. Esto incluye la digitalización de los servicios y el impulso de laboratorios de emprendimiento e innovación social, que permitan mejorar las habilidades y los conocimientos de las empresas existentes y de las personas emprendedoras, mediante la instalación de incubadoras de empresas.

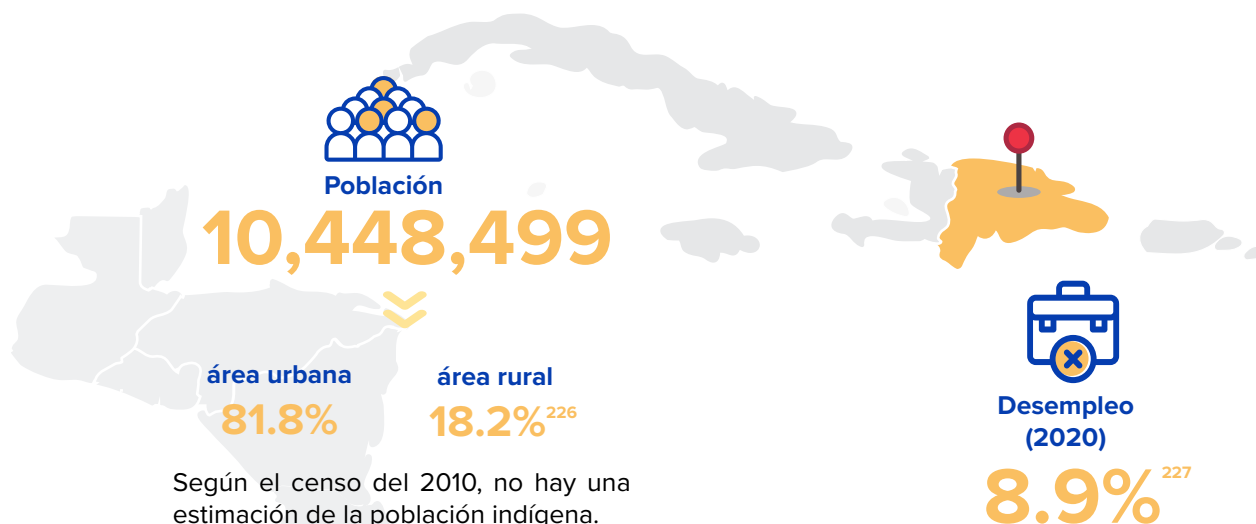
Disponer de datos actualizados y desagregados que permitan contar con una fotografía del contexto nacional y, más específicamente, del nivel de participación en el mercado laboral por parte de las personas jóvenes y de las mujeres para la elaboración de políticas activas, que permitan fortalecer sus habilidades, en función de la demanda del trabajo y ofrecer servicios públicos para su acceso y permanencia.

Potenciar el turismo verde en Panamá favoreciendo el desarrollo de comunidades y promover la conservación de espacios naturales, terrestres y acuáticos en las 125 áreas protegidas del país.

REPÚBLICA DOMINICANA

01

SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS



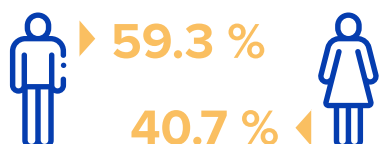
Nivel de informalidad en el mercado laboral

56.8%²³¹

Población económicamente activa

5 millones

(alrededor del 50% del total de la población) de los cuales:



Es una de las economías de mayor dinamismo en la región de América Latina y el Caribe, con un crecimiento promedio anual del 5.6% en la presente década, impulsado por actividades orientadas a la exportación, como la manufactura de zonas francas y el turismo. La economía dominicana presenta una creciente divergencia (dualidad), entre un sector económico de alto crecimiento y productividad concentrado en las zonas francas y capaz de generar una cantidad relativamente limitada de buenos empleos y actividades orientadas al consumo interno con baja productividad²³².

El 3.9% de la población vive en situación de pobreza multidimensional y otro 5.2% está clasificado como vulnerable a la pobreza multidimensional, siendo el IPM de 0.015.²³³

En los últimos años, República Dominicana ha implementado una estrategia de consolidación fiscal a través de reformas fiscales que han implicado renegociaciones con grandes empresas y la aplicación de mecanismos de control y transparencia para mejorar y modernizar la gestión de las finanzas públicas.

Mientras que el 50.3% de la población ocupada forma parte del sector informal, es notorio que, en el caso de los jóvenes ocupados, el 53% pertenece al sector formal²³⁴.

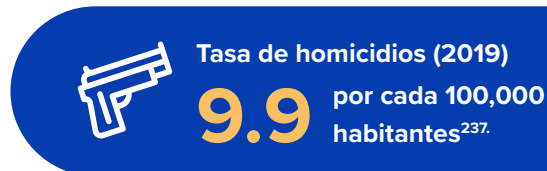
Los resultados indican que, del total de la población desocupada, el 67.9% son mujeres y el 32.1% hombres, lo que evidencia que a nivel nacional el porcentaje de mujeres desocupadas es más del doble del porcentaje de hombres²³⁵. Asimismo, del total de mujeres que no buscó trabajo en ese periodo de referencia, el 35.8% no se insertó en el mercado de trabajo porque se dedica a los quehaceres del hogar, en lugar del 1% de los hombres.

En cuanto al embarazo en la adolescencia, el 13.8% de las adolescentes ya son madres (ENHOGAR 2018). 1 de cada 3 adolescentes entre 15 y 19 años no asistió a la escuela, colegio o universidad durante el embarazo de su primer hijo (31.1%) y casi la mitad no continuó asistiendo a la escuela, colegio o universidad luego del nacimiento de su primer hijo (48.7%).



Las MIPYME representan más de 233 mil unidades productivas formalizadas que emplean a 642,303 personas, llegando a 2.2 millones de empleos cuando se incluyen los empleos informales, lo que equivale al 54.4% de la población ocupada del mercado laboral dominicano, realizando un aporte al PIB de un 38.6%²³⁶.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que las remesas en 2020 aumentaron del 37.1% respecto al 2019. El monto de las remesas equivale a por lo menos un 10.4% del PIB, alrededor del 83% de las remesas proviene de Estados Unidos.



02 COVID-19

La pandemia empujó a la República Dominicana a su primera recesión en casi 25 años²³⁸.

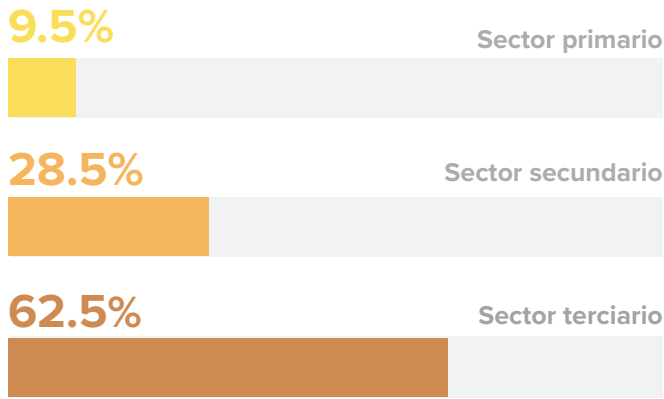
Los sectores que se han visto más afectados por las medidas de confinamiento implementadas a partir del mes de marzo 2020 han sido hoteles, bares y restaurantes (-17.9%), construcción (-4.0%) y transporte y almacenamiento (-3.0%). El turismo tiene importantes encadenamientos hacia atrás, por lo que el cierre de operaciones de los hoteles tiene efectos indirectos que hay que considerar.

Medidas para mitigar los efectos de la pandemia:

- ✓ Plan para Reactivación de las MIPYME, destinado a las micro y pequeñas empresas con ventas de hasta RD\$58 millones que consta de tres programas para impulsar las MIPYMEs con apoyo a capital de trabajo, así como la asociatividad a través de las cooperativas.
- ✓ El gobierno estableció que el 20% de las compras del Estado debe hacerse a las MIPYME. Además, se instruyó el pronto pago para las compras públicas a MIPYME.
- ✓ Se habilitó una ventanilla de liquidez de corto plazo por hasta RD\$15 mil millones, para ser canalizados al financiamiento de las MIPYME y otros microcréditos, a través del Banco de Reservas.
- ✓ **Fondo de Asistencia Solidaria para Empleados "FASE"**, creado para apoyar a los trabajadores de aquellas empresas que se encuentran cotizando en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
- ✓ **Programa "Quédate en Casa"**, diseñado especialmente para personas de escasos recursos o que viven en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de proteger el ingreso de los hogares y de los trabajadores informales.
- ✓ **Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa'ti)**: este programa ofrece una ayuda económica a personas independientes quienes no han podido operar por las medidas de distanciamiento social.
- ✓ **Ponte en Marcha** que tiene el objetivo de contribuir a la reactivación de los negocios y las empresas MIPYME del país y mostrar nuevas formas de conectar con clientes.
- ✓ Entrega por parte del PNUD de 800,000 tabletas para educación a distancia.
- ✓ Escuela a distancia por programas de televisión grabados y transmitidos a nivel nacional.

03 SECTORES ECONÓMICOS PRINCIPALES

Estructura económica del país
(calculado en base al PIB total del país)



En términos de sectores económicos, el 46.7% de las MIPYME pertenecen al sector comercio, seguido por el sector servicios con un 38.4% y el sector de industrias con un 14.9%²³⁹.

04 JUVENTUD (15 – 24 AÑOS)

« 17.5%
del total de la población del país

Las personas jóvenes (15–24 años) representan el 17.5% del total de la población del país²⁴⁰. El valor estimado por el Banco Mundial del desempleo juvenil (15-24) es de 15.9%. La población joven se enfrenta a obstáculos que atentan contra su calidad de vida, entre estos: bajos niveles educativos y altas tasas de desempleo²⁴¹.

A pesar de que los jóvenes constituyen el mayor subgrupo poblacional de la fuerza de trabajo (32% de la PEA), la tasa de desempleo de este grupo duplica la de la población total y es la más alta de América Latina. La combinación de estos dos fenómenos, deserción escolar y desempleo, resulta en que el 20% de la población entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja (NINI). De los jóvenes económicamente activos, apenas un 44.7% trabaja, en su mayoría hombres, a pesar del aumento de escolaridad y la participación laboral de las mujeres²⁴².

Este fenómeno afecta en mayor medida a las mujeres, quienes presentan una proporción de jóvenes “NINI” más del doble de los hombres (27% frente a un 12%) (ENFT, 2016). Adicionalmente, los jóvenes están expuestos a situaciones de violencia y criminalidad. En 2016 esta situación resultó la muerte por homicidio de 422 jóvenes, representando al 44.3% del total de las muertes por esta causa²⁴³.



PÚBLICOS

- Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME (MICM)
- Ministerio de la Juventud
- Ministerio de Trabajo
- Ministerio de Educación (MINERD)
- Gabinete de coordinación de políticas sociales

PRIVADOS

- Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
- Cámara de Comercio de Santo Domingo
- Red de 25 Centros MIPYME
- Red de Agencias para el Desarrollo Económico Local (Red ADELDOM)

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID)
- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
- Oxfam
- *Caribbean Export Development Agency*



- **Programa de Recuperación Socioeconómica Inclusiva del PNUD** que logró impactar a más de 300 actores de la cadena productiva y emprendedores pertenecientes a poblaciones en condición de vulnerabilidad; los participantes recibieron herramientas y acompañamiento para reestructurar sus modelos de negocios en materia de digitalización, recaudación de fondos, estrategias de mercadeo y desarrollo de emprendimientos.



- **Catálogo de prácticas prometedoras (PNUD, CONEP)** que tiene como objetivo compartir iniciativas destacadas en empresas del país, para motivar a que más organizaciones se unan a acciones encaminadas a lograr avances en la implementación de la Agenda 2030 en la República Dominicana.

- **Red de 25 Centros MIPYME**, que operan bajo la coordinación del MICM y desde las universidades de toda la geografía nacional, ofrecen servicios de asesoría técnica y capacitación de manera virtual.

- **Proyecto Dominicano Emprende (PREMDE)**, que busca reconocer y apoyar el mejor proyecto emprendedor creado por jóvenes en las 32 provincias del país; en el programa pueden participar proyectos que están en fase de prototipos y que estén basados en innovación tecnológica con alto impacto social que mejoren la calidad de vida de las personas, el cuidado del medio ambiente y que dejen una huella transformadora en la sociedad.



La pandemia de la COVID-19 plantea importantes desafíos para el país, como la pérdida de ingresos de divisas por reducción de actividades clave como el turismo, la paralización de buena parte de las actividades económicas con efectos directos e indirectos en el empleo e ingresos de los hogares, y desafíos fiscales importantes, ya que el gobierno debe implementar medidas de alivio ante la crisis, especialmente para aquellos hogares más vulnerables, al mismo tiempo que ve caer su recaudación tributaria.

La educación técnica especializada en temas de innovación (digitales, programación y tecnología) no es considerada como una ventaja competitiva para el crecimiento del país.

El difícil acceso a servicios de desarrollo empresarial de calidad para fortalecer las capacidades, favorecer la innovación e incrementar la competitividad, representa un obstáculo al incremento de la competitividad de las MIPYME, en particular cuando necesita de la articulación entre el sector público y privado.



PROPUESTAS



Implementar un conjunto de medidas destinadas a atender a las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo: la creación de un sistema integral de apoyo, tanto académico como social, para prevenir el abandono escolar; la implementación de medidas de carácter permanente en los centros educativos para reducir la incidencia del embarazo en la adolescencia y sus consecuencias en la tasa de abandono escolar; el diseño de programas de formación laboral, habilidades para la vida, y orientación específica.

Formular políticas públicas y estrategias fruto de la coordinación interinstitucional que tomen en cuenta, no solo los factores que influyen en la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo remunerado, sino también en las condiciones y efectos de dicha incorporación en su calidad de vida. Promocionar la participación de las mujeres en la actividad económica superando la visión de iniciativas para la subsistencia hacia un enfoque de desarrollo económico sostenible y de empoderamiento económico de las mujeres.

Ampliar con más ímpetu el alcance de los programas de transformación digital e innovación empresarial como medidas para eliminar las brechas digitales, impulsar el teletrabajo y maximizar las capacidades operacionales de las MIPYME.

Impulsar y promover el emprendimiento verde en los sectores del reciclaje, la agricultura ecológica, la eficiencia energética y temas relacionados con la sostenibilidad para que se vuelvan un enlace entre el sector privado y los esfuerzos del gobierno en cumplir con las metas trazadas para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.



© PNUD El Salvador / César Avilés

CONSIDERACIONES FINALES



CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas creadas por los problemas estructurales existentes en la región: los elevados niveles de desigualdad, la informalidad laboral, la baja protección social y la vulnerabilidad de algunos grupos poblacionales. En este marco, es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de Bienestar.

Los gobiernos de Centroamérica y la República Dominicana deberán apostar por la inclusión económica y cohesión social, a través de políticas activas en el mercado del trabajo que apunten a la generación de empleo formal y al fomento del emprendimiento.

La formalización empresarial tiene que ser parte de un enfoque multidimensional y equilibrado, puesto que este proceso guarda una estrecha correlación con un entorno empresarial propicio, el crecimiento económico y la mejora de las condiciones de trabajo. Los efectos positivos de la formalización de las empresas son múltiples, entre los que destacan: para los países, los ingresos fiscales se incrementarían, pudiendo proporcionar bienes y servicios públicos en número mayor y de mayor calidad; y para las empresas, tendrían el acceso a financiación, a servicios y tecnologías de desarrollo empresarial, y a licitaciones públicas. La práctica demuestra también, que la condición fundamental para empujar el proceso de formalización es asociarlo a una clara oferta de servicios: a las personas, en cuanto a protección y seguridad social; y a las empresas, con respecto a servicios empresariales descentralizados que permitan incrementar la competitividad y acceder a nuevos mercados. De esta forma, la formalización podrá representar una ventaja real y atractiva para el mundo empresarial, en particular para las micro y pequeñas empresas.



Hay dos colectivos cruciales en cuanto al fomento del emprendimiento y el crecimiento de las MIPYME de la región: las personas jóvenes y las mujeres. Existe un bono demográfico que se debe capitalizar y retomar para ejercer un giro en la forma de pensar, que requiere de un liderazgo empresarial que cuente con su inclusión.

Resulta de vital importancia garantizar el acceso a oportunidades educativas de calidad y ajustadas a las demandas del mercado laboral que favorezcan el desarrollo de capacidades y aptitudes adaptadas a las exigencias de los sectores de mayor crecimiento de la economía. Mejorar los niveles de acceso a la educación superior y disminuir el porcentaje de abandono escolar, especialmente para las zonas rurales, es fundamental para avanzar hacia una orientación al mercado digital y la creación de una mano de obra especializada, que permita el acceso a empleos de mejor remuneración. Aunque la región ha avanzado de manera significativa en la reducción de las brechas de acceso al mundo digital en los últimos años, particularmente gracias a la masificación de la conectividad móvil, aún persisten brechas considerables en el acceso efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y la participación de las nuevas generaciones.

El empleo juvenil constituye uno de los principales retos que enfrentan los países de Centroamérica y la República Dominicana, tanto por la limitada capacidad de las economías de generar suficientes empleos para la población joven, como por los bajos niveles educativos que ésta presenta²⁴⁴. Es necesario fomentar el emprendimiento juvenil hacia la creación de MIPYME que puedan conectarse a cadenas de valor con un potencial de crecimiento y mejorar los mecanismos de acceso al crédito, no solo en la etapa inicial, sino también en los momentos que determinan su sostenibilidad, crecimiento y consolidación en el tiempo. De igual manera, es importante que se exploren nuevas acciones para reducir las barreras de entorno que afectan la actividad emprendedora juvenil. Se deben promover alianzas público-privadas para crear, fortalecer y coordinar la oferta de recursos y servicios. También es conveniente que se promueva la vinculación de las iniciativas dirigidas al segmento juvenil con el mundo de las TICs, la innovación social y ambiental, y los programas de fomento de la emprendeduría femenina y juvenil, garantizando apoyos económicos y legales que los hagan más resilientes ante cambios políticos, sociales o económicos.

A su vez, un elemento fundamental para la eliminación de las desigualdades y la promoción de la cohesión social es alcanzar la igualdad de género, que representa uno de los nudos estructurales, especialmente en Centroamérica y la República Dominicana. La garantía del acceso de las mujeres a recursos financieros, tierra, otros activos productivos y su participación en la vida laboral, no tiene que pasar únicamente por programas de apoyo al desarrollo de capacidades, conocimientos y emprendimiento; sino también por programas que quiten la carga exclusiva de las tareas domésticas y del cuidado infantil en las mujeres que tradicionalmente desempeñan estos papeles.

Otro grupo poblacional que merece particular atención, en un análisis de inclusión económica y cohesión social, es la comunidad indígena. Los pueblos indígenas, en cuanto sociedades culturalmente diferentes, tienen derecho a desempeñar un papel en el orden nacional y regional sin renunciar a sus idiomas, culturas y aspiraciones. Asimismo, si bien el desarrollo suele asociarse con el logro de objetivos políticos, económicos y sociales específicos—como erradicar la pobreza monetaria o estimular el crecimiento—, los pueblos indígenas suelen tener una noción más compleja y matizada sobre lo que es el desarrollo y por qué es importante. Para que estos pueblos asuman el papel clave que les corresponde en la agenda de desarrollo, es necesario considerar seriamente sus voces y visiones alternativas²⁴⁵.

La desigualdad no sólo se expresa de distintas maneras en el mosaico heterogéneo y diverso que caracteriza a los distintos pueblos indígenas, sino que se manifiesta al interior de éstos como mayor nivel de desventaja social en los jóvenes y en las mujeres. Por eso es necesario promover su desarrollo económico, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de productos que vayan en línea con su cultura y valores, y que se enfoquen en desarrollar mecanismos para que la acción pública sea culturalmente pertinente. La pertinencia está vinculada directamente a la fuerte relación que este grupo poblacional tiene con los recursos naturales.

Finalmente, para garantizar la sostenibilidad de las estrategias y los programas gubernamentales en los ámbitos anteriormente presentados, es necesario crear institucionalidad tanto a nivel nacional como a nivel local, promoviendo un proceso de descentralización y territorialización que permita responder, a través un enfoque *bottom-up* (de abajo hacia arriba) a las necesidades de todas y todos. Para el logro de la Agenda 2030, y como evidencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, los ODS se cumplirán de manera satisfactoria a través la promoción de alianzas y de una articulación interinstitucional que transita por una implicación directas de los principales actores cuales: gobiernos, sector privado y sociedad civil.

La respuesta a la COVID-19, y la consecuente fase de reconstrucción, representa una oportunidad histórica para abogar por un cambio que implique la construcción de un nuevo pacto social a favor de los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, situando los derechos de las personas en el centro del proceso de transformación hacia más equidad y sostenibilidad. El elemento fundamental de la recuperación económica deberá ser la inclusión, promoviendo un acceso y una utilización más equitativa de los recursos disponibles.

BIBLIOGRAFÍA DE BASE

- ADEL Morazán – *Abriendo oportunidades para la inclusión financiera en El Salvador*.
- Banco Interamericano de Desarrollo – *América Latina y Caribe post COVID-19*.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2020) – *El Grupo BID en el Istmo Centroamericano y la República*.
- CENPROMYPE (2018) – *Informe Regional de Centros de Atención MIPYMEs*.
- CEPAL (2007) – *Cohesión social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*.
- Dominicana Informe de Actividades (2020)*.
- CEPAL (2007) – *Inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe*.
- CEPAL (2016) – *La matriz de la desigualdad social en América Latina*.
- CEPAL (2018) – *Panorama Social de América Latina*.
- CEPAL (2018) – *Estudio económico de Centroamérica y República Dominicana en 2018 y perspectivas para el 2019*.
- De Hoyos R., Rogers H. y Székely M. – *NINIS en América Latina*.
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – *Centroamérica 2020: hacia un nuevo modelo de desarrollo regional*.
- IDEASS – *Agencias de Desarrollo Económico Local para la gestión y la internacionalización de las economías locales*.
- InfoSegura (2020) – *Una mirada a las juventudes expuestas a violencia en el Norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana*.
- Naciones Unidas Pacto Mundial (2018) – *Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una llamada a la acción para empresas sostenibles*.
- OIT (2016) – *Soluciones eficaces: Políticas activas del mercado de trabajo en América Latina y el Caribe*.
- OIT (2020) – *Panorama laboral 2020 América Latina y Caribe*.
- OIT (2020) – *Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil*.
- PNUD Sello de Igualdad de Género.
- PNUD (2021a) – *Cohesión social y enfoque SDG+ en Centroamérica y República Dominicana*.
- PNUD (2021b) – *Cohesión socioambiental en Centroamérica y República Dominicana*.
- RED ACTUA (2020) – *Segunda encuesta sobre el impacto socioeconómico de la COVID-19*.
- Rodríguez Wong L. y Sánchez J. – *La población afrodescendiente e indígena en América Latina*.
- Sánchez Almanza A. (2006) – *Crecimiento económico, desigualdad y pobreza: una reflexión a partir de Kuznets*.
- SICA (2020) – *Juntos saldremos adelante, Informe de avances en la implementación del Plan de Contingencia Regional del SICA frente al Coronavirus*.
- UNESCO (2020) – *América Latina y el Caribe Inclusión y Educación: todos y todas sin excepción*.

REFERENCIAS

- 1 CEPAL (2007) – Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
- 2 CEPAL (2007) – Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
- 3 OEA – Desigualdad e Inclusión Social en las Américas.
- 4 Latinóbarometro – Informe 2018.
- 5 Martin J. Urquijo Angarita (2014) - La teoría de las capacidades en Amartya Sen.
- 6 CEPAL (2007) – Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
- 7 PNUD (2015) – El nuevo rostro de Bolivia. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia.
- 8 Banco Interamericano de Desarrollo, Busso M. & Messina Julián (2020) – La crisis de la desigualdad, América Latina y el Caribe en la encrucijada.
- 9 CEPAL 2007 - Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
- 10 ONU 2020 - Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19.
- 11 FMI (2020) – Políticas, política y pandemia.
- 12 Baldwin, R., Tomiura, E. (2020). Macroeconomics of the flu. En: R. Baldwin and B. Weder di Mauro (Eds). Economics in the time of COVID-19, 1st ed. Londres, pp.31-36.
- 13 SICA (2020) – Estimación del impacto económico del COVID – 19 en Centroamérica y República Dominicana.
- 14 CEPAL (2019) – Foro Regional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 2019.
- 15 Observatorio de la OIT (2021) – La COVID-19 y el mundo del trabajo.
- 16 OIT (2020) – Panorama laboral 2020, América Latina y el Caribe.
- 17 UNICEF (2020) – COVID-19: más del 97 por ciento de los estudiantes aún no regresan a aulas en América Latina y el Caribe.
- 18 OIT (2020) – Los Jóvenes y la COVID-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental.
- 19 OIT (2020) – Panorama laboral 2020, América Latina y el Caribe.
- 20 ONU (2020) – Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19
- 21 PNUD, InfoSegura (2021) – Tendencia regional de indicadores
- 22 PNUD, InfoSegura (2021) – Análisis multidimensional de Seguridad Ciudadana de Guatemala, Primer Semestre 2021.
- 23 PNUD, InfoSegura (2021) – Análisis multidimensional de Seguridad Ciudadana de El Salvador, Primer Semestre 2021.
- 24 PNUD, Infosegura (2021) – Análisis de seguridad ciudadana en 2020, Honduras.
- 25 Basu, K. (2020) – Epidemics and Economic Policy. Nueva York.
- 26 SICA (2020) – SICA: MIPYMES aportan el 34 % de la producción en Centroamérica, sector clave para la reactivación en la región.
- 27 Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas FIAPP (2020) – La COVID agrava la pobreza y la desigualdad en Centroamérica.
- 28 BID (2019) – El futuro de Centroamérica Retos para un desarrollo sostenible.
- 29 PNUD (n.d.) – PNUD ALC: Sobre América Latina y el Caribe.
- 30 PNUD América Latina y Caribe (2020) – Sobre América Latina y el Caribe.
- 31 SICA (2020) – Pueblos originarios.
- 32 OIT, Pueblos indígenas en América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
- 33 ONU, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Pueblos Indígenas.
- 34 OECD (2019).
- 35 SICA (2018) – 8 países construyendo una Región de oportunidades.
- 36 Statistical Institute of Belize (2020)
- 37 INEC (2020) – Costa Rica en cifras
- 38 Gobierno de El Salvador (2019) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
- 39 INE (2020) – Estimaciones y proyecciones de población a nivel departamental y municipal. Resultados.
- 40 INE (2020) – Honduras, Resumen Ejecutivo Encuesta telefónica de hogares para medir empleo.
- 41 Datosmacro (2019) – Panamá
- 42 Ministerio de economía, planificación y desarrollo oficina nacional de estadística (2020) - Censo nacional de población y vivienda 2020 de la República Dominicana
- 43 OIT (2020) – Statistics on the informal economy.
- 44 SICA (2021) – Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA.
- 45 SICA (2018) – Política Regional de Igualdad y Equidad de Género (PRIEG).
- 46 Secretaria general Iberoamericana (2019).
- 47 OIT (2019) – La brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina.
- 48 SICA (2019) – Conclusiones Encuentro SICA Joven El Salvador.
- 49 CEPAL (2003) – Juventud e inclusión social en Iberoamérica.
- 50 Google (2017) – Centroamérica y el Caribe: un Oasis de oportunidades en el mundo digital.
- 51 Instituto de estadística de la UNESCO (2018) – Disponibilidad de datos e indicadores para el cálculo de los indicadores de monitoreo de la PEC 2013/2030 y ODS 4 Resultados del relevamiento de mapeo de datos.
- 52 SICA, PNUD (2018) – Proyecto Prevjuv.
- 53 International crisis group (2020) – Violencia a prueba de virus: crimen y COVID-19 en México y el Triángulo Norte.
- 54 PNUD, InfoSegura (2020) – La cara escondida

- de la inseguridad: Violencia contra las mujeres en Centroamérica y República Dominicana.
- 55 ONU Mujeres (2021) – Violencia contra las mujeres: una pandemia en la sombra agravada por el COVID-19.
- 56 PNUD, InfoSegura (2020) – Una mirada a las juventudes expuestas a violencia en el Norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana.
- 57 Sánchez Almanza A. (2006) – Crecimiento económico, desigualdad y pobreza: una reflexión a partir de Kuznets.
- 58 CEPAL (2019) – La región ha subestimado la desigualdad.
- 59 CEPAL (2021) – Panorama Social de América Latina.
- 60 OIT (2019) – OIT: 55 millones de indígenas enfrentan “potentes barreras” para acceder al trabajo decente en América Latina y el Caribe.
- 61 OIT (2019) – OIT: 55 millones de indígenas enfrentan “potentes barreras” para acceder al trabajo decente en América Latina y el Caribe.
- 62 CEPAL (2007) – Cohesión Social: inclusión y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe.
- 63 Censos oficiales de los países.
- 64 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100.
- 65 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Europa 2019).
- 66 CEPAL (n.d.) – Mejor educación y empleo para jóvenes son clave para aprovechar el bono demográfico.
- 67 OIT (2020) – Global Employment Trends for Youth.
- 68 OIT (2018) – Empleo juvenil en América Latina y el Caribe.
- 69 De Hoyos R., Rogers H. & Székely M. (2016) – Los “ninis” de América Latina: ni estudian ni trabajan ni son comprendidos.
- 70 CEPAL (2016) – La matriz de la desigualdad social en América Latina.
- 71 UNESCO (2020) – América Latina y el Caribe, Inclusión y Educación: Todos y todas sin excepción.
- 72 BID (2019) – Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe: Una primera mirada al otro lado de las rejas.
- 73 Ministerio de gobernación de Guatemala (2020) – Prevenir o lamentar: de jóvenes y cárceles.
- 74 OIT (2020) – Panorama laboral 2020, América Latina y el Caribe.
- 75 PNUD (2011) – Integración de los Derechos Humanos en las Políticas y en Programas de Desarrollo.
- 76 PNUD (n.d.) – El Sello de Igualdad de Género para Empresas Públicas y Privadas.
- 77 FMI (2020) – Perspectivas económicas regionales - Las Américas.
- 78 ONU EUROMIPYME (2020) – MIPYMES y el COVID-19.
- 79 ONU EUROPYME (2020) – MIPYMES y el COVID-19.
- 80 ONU EUROPYME (2020) – MIPYMES y el COVID-19.
- 81 CEPAL (n.d.) – Euromipyme: Mipymes y el COVID-19.
- 82 CEPAL (2020) – Los efectos del COVID-19 en el comercio internacional y la logística.
- 83 CEPAL (2020) – Medidas de recuperación del sector turístico en América Latina y el Caribe.
- 84 BID (2020) – El impacto del Covid en las economías de la región.
- 85 ONU (2020) – Marco de la ONU para la respuesta socioeconómica inmediata ante el COVID-19.
- 86 OIT (2020) – Panorama laboral 2020 América Latina y el Caribe.
- 87 OIT (2015) – Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos.
- 88 OIT (2020) – Tendencias mundiales del empleo juvenil 2020.
- 89 Statistical Institute of Belize (2020).
- 90 IDB Group (2020) – Developing a Sustainable, Resilient and Inclusive Belize.
- 91 Statistical Institute of Belize (2020).
- 92 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 93 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 94 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 95 World Bank (2019).
- 96 OIT (2020) – Estadísticas sobre la economía informal.
- 97 Consulado de España en Belice (2018).
- 98 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 99 BID (2020) – Factor trabajo.
- 100 Observatorio de la OIT (2020) – La COVID-19 y el mundo del trabajo. Sexta edición.
- 101 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 102 ENTORNO MIPYME (2020) – Medidas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en América Latina y el Caribe frente a la crisis de la COVID-19.
- 103 CEPAL (2019) – Economic Survey of Latin America and the Caribbean.
- 104 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Belice 2019).
- 105 Comisión interamericana de Derechos Humanos (2019) – Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.
- 106 Organización Panamericana de la salud (2017) – Perfil de los adolescentes y jóvenes de la región de las Américas.
- 107 INEC (2020) – Costa Rica en cifras.
- 108 INEC (2011) – X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda.
- 109 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 110 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo

- humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 111 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 112 INEC (2020) – Coeficiente de Gini por hogar y per cápita 2010-2020.
- 113 OIT (2020) – Estadísticas sobre la economía informal.
- 114 INEC (2020) – Encuesta Continua de Empleo, II Trimestre.
- 115 Mora Guerrero J.C. (2020) – La informalidad del empleo en Costa Rica, Caracterización y recomendaciones.
- 116 Banco Mundial (2021) – El Banco Mundial en Costa Rica.
- 117 INEC (2020) – Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Costa Rica.
- 118 Gobierno de Costa Rica (2018) – Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050.
- 119 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 120 Gobierno Bicentenario de Costa Rica, Comisión Nacional de Emergencia 2020 - Plan General de Emergencia.
- 121 Gobierno Costa Rica, Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) (2019) – Indicadores macroeconómicos 2015-2019.
- 122 INEC (2020) – Costa Rica en cifras.
- 123 Instituto Costarricense de Turismo (2016) – Industria turística aporta 6,3% del PIB a la economía de Costa Rica.
- 124 OCDE (2016) – Perspectivas Económicas provisionales.
- 125 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Costa Rica 2019).
- 126 OIT (2020) – Panorama laboral 2020 América Latina y el Caribe.
- 127 Varios autores para el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2019) – Estado de la Educación Costarricense.
- 128 De Hoyos R., Rogers H. & Székely M. (2016) – Los “ninis” de América Latina: ni estudian ni trabajan ni son comprendidos.
- 129 Deere C.D. & León M. (2003) – La brecha de género en la propiedad de la tierra en América Latina.
- 130 Gobierno de El Salvador (2019) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
- 131 Gobierno de El Salvador, Ministerio de Economía y Dirección General de Estadística y Censos (2007) – VI Censo de Población y de Vivienda
- 132 Banco Mundial (2020) – Datos de libre acceso del Banco Mundial.
- 133 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 134 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 135 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 136 OIT (2020) – Estadísticas sobre la economía informal.
- 137 Gobierno de El Salvador (2019) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
- 138 Banco Central de Reserva (2021) – Gerencia de Estudios y Estadísticas Económicas, Informe Grafico de remesas familiares.
- 139 Banco Mundial (2020) Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 140 PNUD (n.d.) – Indicadores de Desarrollo Humano (El Salvador).
- 141 PNUD, InfoSegura (2020) – Una mirada a las juventudes expuestas a violencia en el Norte de Centroamérica desde un enfoque de vulnerabilidad y resiliencia humana.
- 142 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 143 Gobierno de El Salvador (2020) – Plan económico de respuesta a la COVID-19.
- 144 Banco Central de Reserva de El Salvador (2019) – Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad.
- 145 Gobierno de El Salvador (2019) – Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM).
- 146 Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMRASAL) (2008).
- 147 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (El Salvador 2019).
- 148 OIT (2020) – COVID-19 y el Mundo del Trabajo: Punto de partida, respuesta y desafíos en El Salvador.
- 149 PNUD (2018) – Informe sobre Desarrollo Humano El Salvador 2018 “¡SOY JOVEN! ¿Y ahora qué?”.
- 150 OIT (2014) – Transiciones en el mercado de trabajo de las mujeres y hombres jóvenes en El Salvador.
- 151 PNUD El Salvador (2020) – Respuesta del PNUD El Salvador ante el COVID-19.
- 152 INE (2020) – Estimaciones y proyecciones de población a nivel departamental y municipal. Resultados.
- 153 INE (2002) – Censo oficial de Guatemala.
- 154 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 155 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 156 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 157 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano
- 158 OIT – Estadísticas sobre la economía informal.
- 159 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano..
- 160 Banco Mundial (2021) – El Banco Mundial en Guatemala.

- 161 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 162 FAO (2020) – La inclusión financiera de los jóvenes rurales en Guatemala.
- 163 BANGUAT (2020) – Comportamiento de ingreso de divisas por remesas familiares.
- 164 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 165 BANGUAT (2021) – Producto Interno Bruto real medido por el origen de la producción años 2020 - 2021.
- 166 INE (2019) – Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2019, Principales resultados.
- 167 FAO (2020) – La inclusión financiera de los jóvenes rurales en Guatemala.
- 168 INE (2019) – Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI) 2019, Principales resultados.
- 169 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Guatemala 2019).
- 170 FAO (2020) – La inclusión financiera de los jóvenes rurales en Guatemala.
- 171 FAO (2020) – La inclusión financiera de los jóvenes rurales en Guatemala.
- 172 CEPAL (2015) – Juventud: realidades y retos para un Desarrollo con igualdad.
- 173 Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Defensoría de la Juventud (2018) – Informe 2018.
- 174 Interpeace, POLJUVE (2009) – Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala.
- 175 El Periódico (2021) – Declaraciones de los representantes día de lanzamiento del proyecto.
- 176 PNUD Guatemala – Infografía Proyecto PREVJUVE, Modelo de Intervención Preventiva en el Municipio de Chimaltenango.
- 177 INE Honduras (2020) – Resumen Ejecutivo Encuesta telefónica de hogares para medir empleo
- 178 Honduras (2013) – XVII Censo de Población y VI de Vivienda.
- 179 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 180 PNUD (2021) Desvelar las disparidades de etnia, casta y género. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2021_mpi_report_es.pdf
- 181 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 182 INE Honduras (2020) – Resumen Ejecutivo Encuesta telefónica de hogares para medir empleo.
- 183 OIT – Estadísticas sobre la economía informal.
- 184 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 185 Banco Mundial – El Banco Mundial en Honduras.
- 186 Banco Mundial – El Banco Mundial en Honduras.
- 187 PNUD (n.d.) – Indicadores de Desarrollo Humano (Honduras).
- 188 OIM, OIT (2012) – Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana & Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, Investigación – Flujos migratorios laborales intrarregionales: Situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana, Informe de Honduras.
- 189 Banco Central de Honduras (n.d.) – Balanza Cambiaria.
- 190 La Prensa Honduras (2019) – El 89.6% de las remesas que recibe Honduras proviene de Estados Unidos.
- 191 Banco Mundial (2020) – Michel V. & Walker I., Honduras: diagnostico del trabajo.
- 192 Banco Mundial (2021) – Doing Business: Clasificación de las economías.
- 193 BID (2019) – Derlagen C., Paolo De Salvo C., Egas Yerovi, J.J. & Pierre G., Análisis de Políticas Agropecuarias en Honduras.
- 194 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 195 Gobierno de Honduras (2021) – Cronología de las medidas económicas del Gobierno a la emergencia por el coronavirus.
- 196 PNUD Honduras (2021) – Pinilla-Roncancio M. & Ham A., Notas de políticas n.1, Focalización de transferencias a población vulnerable por el COVID-19 en Honduras.
- 197 Consejo Nacional de Inversiones (2018) – Informe del comportamiento de la economía por rama de actividad y su impacto en el crecimiento económico a diciembre.
- 198 BID (2019) – Derlagen C., Paolo De Salvo C., Egas Yerovi, J.J. & Pierre G., Análisis de Políticas Agropecuarias en Honduras.
- 199 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Honduras 2019).
- 200 INE Honduras (2016) – Encuesta de hogares Jóvenes que ni trabajan ni estudian.
- 201 PNUD, InfoSegura (2019) – Repositorio.
- 202 INE Honduras (2020) – Resumen Ejecutivo Encuesta telefónica de hogares para medir empleo.
- 203 OIT (2019) – Entre el bono demográfico y los NINIS: empleo juvenil.
- 204 Banco Mundial (2020) – Michel V. & Walker I., Honduras: diagnóstico del trabajo.
- 205 PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Nota informativa para los países, Honduras.
- 206 Datosmacro (2019) – Panamá.
- 207 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 208 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 209 Banco Mundial (2020) – Panamá.
- 210 OIT – Estadísticas sobre la economía informal.
- 211 OIT (2020) – Diagnóstico sobre economía informal.
- 212 República de Panamá (2019) – Contraloría general de la república, Encuesta de Mercado Laboral.

- 213 OIT (2019) – La brecha salarial entre hombres y mujeres en América Latina.
- 214 Ministerio de Industria y comercio República de Panamá (2019).
- 215 Ministerio de economía y finanzas Dirección de Análisis Económico y Social (2017).
- 216 Banco Mundial (2020) – Panamá: panorama general.
- 217 Banco Mundial (2020) – El apoyo del Banco Mundial ante la COVID-19 en ALC.
- 218 PNUD (2021) – Homicidios en el año del COVID-19: Centroamérica y República Dominicana.
- 219 Instituto Gorgas (2021) – Panamá lidera investigación regional sobre el COVID-19.
- 220 PNUD Panamá (2020) – Impacto del COVID-19 en panamá análisis socioeconómico.
- 221 Ampyme (2020).
- 222 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (Panamá 2019).
- 223 Centro Internacional de Estudios Políticos y sociales Panamá (2020) – Perspectivas laborales de la juventud panameña frente a la pandemia.
- 224 Oficina de la OIT para los Países Andinos (2019) – Entre el bono demográfico y los ninis: empleo juvenil.
- 225 Instituto Nacional de Estadística y censo Panamá (2019).
- 226 Ministerio de economía, planificación y desarrollo oficina nacional de estadística (2020) – Censo nacional de población y vivienda 2020 de la República Dominicana.
- 227 Banco Mundial (2020) – Desempleo, total (% de la población activa total) (estimación modelado OIT).
- 228 PNUD (2020) – La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Informe sobre Desarrollo Humano.
- 229 IDB (2020) – Desigualdades de género en República Dominicana.
- 230 Banco Central de la República Dominicana con la colaboración de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (2018) – Encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares.
- 231 OIT – Estadísticas sobre la economía informal.
- 232 Banco Central de la República dominicana (2019.)
- 233 PNUD (2020) – Informe sobre Desarrollo Humano. La próxima frontera: desarrollo humano y el Antropoceno, Nota informativa para los países, República Dominicana.
- 234 Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (2017) – Los jóvenes dominicanos, esos desconocidos “Estado de situación y políticas en materia de formación y empleo juvenil en la República Dominicana”.
- 235 ONE (2018) – Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples.
- 236 PNUD (2020) – Situación económica y de mercado de las MIPYMES en República Dominicana por la crisis del COVID-19.
- 237 ONE (2019).
- 238 CEPAL (2021) – World economic situation prospects.
- 239 Banco Mundial (2020) – República Dominicana.
- 240 PopulationPyramid.net (2020) – Pirámides de población desde 1950 a 2100 (República Dominicana 2019).
- 241 Banco Mundial (2020) – República Dominicana.
- 242 OIT (2020) – Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil.
- 243 OMS (2020) – Violencia juvenil.
- 244 OIT – Estadísticas sobre la economía informal.
- 245 Grupo Banco Mundial (2015) – Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ADEL	Agencia de Desarrollo Económico Local
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
AIRD	Asociación de Industrias de la República Dominicana
ALC	América Latina y el Caribe
AMPYME	Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Panamá
B2B	Business to Business
BANGUAT	Banco de Guatemala
BANHPROVI	Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Honduras
BANOP	Banco Nacional de Oportunidades Guatemala
BCCI	Cámara de Comercio e Industria de Belice
BCRD	Banco Central de la República Dominicana
BELTRAIDE	Agencia para el Desarrollo del Comercio e Inversión de Belice
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BCCAT	Belize COVID – 19 Cash Transfer Program
BOOST	Building Opportunities for Our Social Transformation
CARICOM	Comunidad del Caribe
CDE	Centro de Desarrollo Empresarial
CEAL	Consejo Empresarial de América Latina
CEIE	Centro de Estudios para la Integración Económica
CENPROMYPE	Centro Regional de Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CERC	Componente de Respuesta a Emergencias de Contingencia
COHEP	Consejo Hondureño de la Empresa Privada
CONAMYPE	Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa El Salvador
CONEP	Consejo Nacional de la Empresa Privada
CONJUVE	Consejo Nacional de la Juventud Guatemala
CPJ	Consejo Nacional de la Persona Joven Costa Rica
DIGEPYME	Dirección General PYME Costa Rica
E.E.U.U.	Estados Unidos
EHPM	Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
ELS	El Salvador
ENFT	Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo República Dominicana
ENHOGAR	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FMI	Fondo Monetario Internacional
FUNDEMAS	Fundación Empresarial para la Acción Social
GIZ	Agencia Alemana de Cooperación Internacional
IFARHU	Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano Panamá
INA	Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica

INADEH	Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano Panamá
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres Costa Rica
INFOP	Instituto Nacional de Formación Profesional Honduras
INTECAP	Instituto Nacional de Capacitación Guatemala
INJ	Instituto Nacional de la Juventud Honduras
INJUVE	Instituto Nacional de la Juventud El Salvador
INTECAP	Instituto Nacional de Capacitación Guatemala
IPACCOP	Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
IPM	Índice de Pobreza Multidimensional
MEIC	Ministerio de Industria y Comercio Costa Rica
MICM	Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME República Dominicana
MIDES	Ministerio de Desarrollo Social Panamá
MINECO	Ministerio de Economía Guatemala
MINERD	Ministerio de Educación
MIPYME	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
MITRADEL	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral Panamá
MSME	Micro Small and Medium Enterprise
NINI	Jóvenes Ni estudian Ni trabajan
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA	Organización de los Estados Americanos
OIT	Organización Internacional del Trabajo
ONG	Organización No Gubernamental
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ONU Mujeres	Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
PANACAMARA	Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá
PEA	Población Económicamente Activa
PET	Población en Edad de Trabajar
PIB	Producto Interno Bruto
PMA	Programa Mundial de Alimentos
PNUD	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POVE	Programa de Orientación Vocacional y Empleo Panamá
PPA	Paridad de Poder Adquisitivo
PROCOMER	Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
RSE	Responsabilidad Social de Empresa
SBD	Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica
SENAEH	Servicio Nacional de Empleo Honduras
SENPRENDE	Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios

SIB	Superintendencia de Bancos
SICA	Sistema de Integración Centroamericana
SIG	Sello de Igualdad de Género para Empresas Públicas y Privadas
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
UE	Unión Europea
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA	Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNHRD	Depósito de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas
USAID	Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional



